



DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Tercera Monografía

Ariel Fernando Ávila
Coordinador

Elizabeth Escobar
Investigadora Regional

Carol Torres Tovar
Asistente de investigación

Este tercer informe pretende hacer una lectura de riesgos en temas de; conflicto armado, conflictos sociales asociados a la minería, la extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de la región de Nariño y su impacto en la infracción a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

24 de febrero de 2014

Contenido

1.1 Contexto general del Departamento de Nariño	3
1.2 Conflictividad social.....	6
1.3 Movimiento social.....	16
Delimitación territorial y temporal del estudio.	21
Dinámicas de la seguridad y conflicto armado.	25
Hitos principales y sus efectos sobre la población.....	25
La Fuerza Pública.....	32
Los Rastrosjos.	34
Las Águilas Negras.....	35
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.	36
Dinámicas de la protesta social y del movimiento social. Línea de tiempo de hitos asociados con la violencia colectiva en el territorio.....	40
Hitos principales y sus efectos sobre la dinámica de violencia colectiva.....	40
Movilizaciones por la Paz.	40
Movilización cívica urbana.	42
Movilización por el territorio.	43
Movilización por la minería.	45
Actores protagónicos asociados.....	47
Unidad de Pueblo Awá – UNIPA.....	47
Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – RECOMPAS.....	48
Introducción.	51
Delimitación territorial y temporal del estudio.	53
Dinámicas de la seguridad y conflicto armado.	58
Hitos principales y sus efectos sobre la población de cada una de las zonas.....	58
Actores protagónicos: su evolución y transformación en el periodo objeto de estudio.....	59
El Ejército de Liberación Nacional	60
Los paramilitares.	61
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.	62

La Fuerza Pública.....	65
Dinámicas de la protesta social y del movimiento social (Zona objeto de estudio). Línea de tiempo de hitos asociados con la violencia colectiva en el territorio.	66
Hitos principales y sus efectos sobre la dinámica de violencia colectiva.....	66
Actores protagónicos asociados.....	69
Delimitación territorial y temporal del estudio.	72
Dinámicas de la seguridad y el conflicto armado.....	74
Hitos principales y sus efectos sobre la población de cada una de las zonas.....	74
Actores protagónicos: su evolución y transformación en el periodo objeto de estudio.....	76
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia	78
La Fuerza Pública.....	80
Las Bandas Criminales y el narcotráfico.....	82
Dinámicas de la protesta social y del movimiento social (Zona objeto de estudio). Línea de tiempo de hitos asociados con la violencia colectiva en el territorio.	84
Hitos principales y sus efectos sobre la dinámica de violencia colectiva.....	84
La comunidad de Jardines de Sucumbíos.....	84
La población indígena frente al TLC.	88
Transporte de carga frente a la Comunidad Andina.	89
Actores protagónicos asociados.....	92
Conclusiones	94
Delimitación territorial y temporal del estudio.	96
Dinámicas de la seguridad y conflicto armado.	98
Hitos principales y sus efectos sobre la población de cada una de las zonas.....	98
Actores protagónicos: su evolución y transformación en el periodo objeto de estudio.....	101
La Fuerza Pública.....	102
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia	103
El Ejército de Liberación Nacional.	105
Las bandas criminales: “Los Rastrojos” y las “Águilas Negras”	106
Dinámicas de la protesta social y del movimiento social (Zona objeto de estudio). Línea de tiempo de hitos asociados con la violencia colectiva en el territorio.	109
Hitos principales y sus efectos sobre la dinámica de violencia colectiva.....	109
Actores protagónicos asociados.....	110

Departamento de Nariño

Contexto general del Departamento de Nariño

El departamento de Nariño está ubicado al suroccidente de Colombia, limita al norte con el Departamento del Cauca, al oriente con el Departamento del Putumayo, al sur con la vecina República de Ecuador y al occidente con el Mar Pacífico. Tiene una extensión de 33.268 kilómetros cuadrados, distribuidos en 64 municipios, donde vivían, según el último censo en 2005, un total de 1'541.692 habitantes y se proyecta que en la actualidad tenga 1'701.782 personas (Censo DANE, 2005).

Un rasgo demográfico que caracteriza al departamento es la diversidad étnica. Según el Dane, en el año 2005 la población auto reconocida como indígena representaba el 10,8% y la población afro descendiente un 18,8%, lo cual quiere decir, que cerca de una tercera parte de la población nariñense tiene una pertenencia étnica. La población indígena está organizada en seis pueblos: Pastos, Awa, Eperara Siapidara, Inga, Kofan y Quillacinga. Estos pueblos conforman 65 resguardos, distribuidos en 20 municipios con un territorio de 467.000 hectáreas.

El pueblo Pastos es el que está presente en mayor cantidad de municipios de Nariño, todos en la denominada Ex Provincia de Obando, estos son: Cumbal, Potosí, Aldana, Santacruz, Cuaspúd, Cordoba, Guachucal, Mallama, Ipiales, Contadero y Tuquerres.

El pueblo Awá está presente en el piedemonte costero de Nariño y comprende los municipios de Barbacoas, Ricaurte, Roberto Payán, Santacruz y Tumaco. Por su parte, el grupo de los Eperara-Siapidara habitan zonas costeras de la denominada región de Sanquianga en municipios como Olaya Herrera, La Tola, El Charco y una parte del norte de Tumaco. Los pueblos Inga, Kofan y Quillacinga son los menos numerosos de Nariño y están presentes en un municipio cada uno, siendo estos Tablón de Gómez, Ipiales y Pasto respectivamente.

Por su parte, la población afro descendiente tiene 29 títulos, organizados en 361 comunidades con presencia en 10 municipios del departamento, concentrados en la zona pacífica y norte, ocupando un área de 739.648 hectáreas (PNUD, 2011: 17). Los municipios

donde están ubicados estos títulos son Tumaco, Barbacoas, Olaya Herrera, El Charco, Roberto Payán, Magüi Payán, Francisco Pizarro, Mosquera, La Tola, Santa Barbara y

Nariño es uno de los departamentos con mayor cantidad de población habitando la zona rural en el país, ya que el 53% de su población vive en el resto, mientras que el 47% restante lo hace en las cabeceras, aunque el Índice de Ruralidad (IR), ubica a Nariño en un nivel intermedio con un valor de 41, muy lejos del más alto (Guainía con 85,1), pero también del más bajo (Bogotá con 6,1).

A su vez, es uno de los departamentos con un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) más altos del país, 43,8% de la población, valor que se incrementa a 59,3% en las zonas rurales. (Perfil DANE Nariño, 2005). Otro indicador de pobreza, el del nivel de ingresos, indica que la población por debajo de la línea de pobreza en el departamento para el 2010 era de 18,7%, mostrando una tendencia reduccionista en la última década. Sin embargo, una de las más reciente metodologías de medición de pobreza, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), reporta para los datos de 2005, un valor de 69,9% de población en situación de pobreza en Nariño (PNUD, 2011: 24).

Las condiciones de habitabilidad de la población nariñense son preocupantes: el 13,5% de las viviendas no cuenta con servicio de energía eléctrica, el 29,2% no cuenta con acueducto y más de la mitad, el 53,1%, está sin alcantarillado. El gas natural hasta el momento no ha llegado a Nariño (Perfil Nariño Dane, 2005).

El Departamento de Nariño participó, entre el año 2000 y 2010, con un promedio del 1,57% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En el 2010, la producción alcanzó los 6.451 mil de millones de pesos. Es destacable un crecimiento prolongado durante toda la década de 4,4%, el cual es superior al crecimiento nacional que ha estado en promedio al 4,1%, aunque vale la pena anotar que dicho crecimiento fue jalonado en buena medida por el fenómeno de las “pirámides” y por lo tanto a raíz de la caída de estas, se presenta una desaceleración del crecimiento a partir del 2007, donde pasa a ser inferior al crecimiento del PIB nacional (Cuentas Nacionales Dane, 2013).

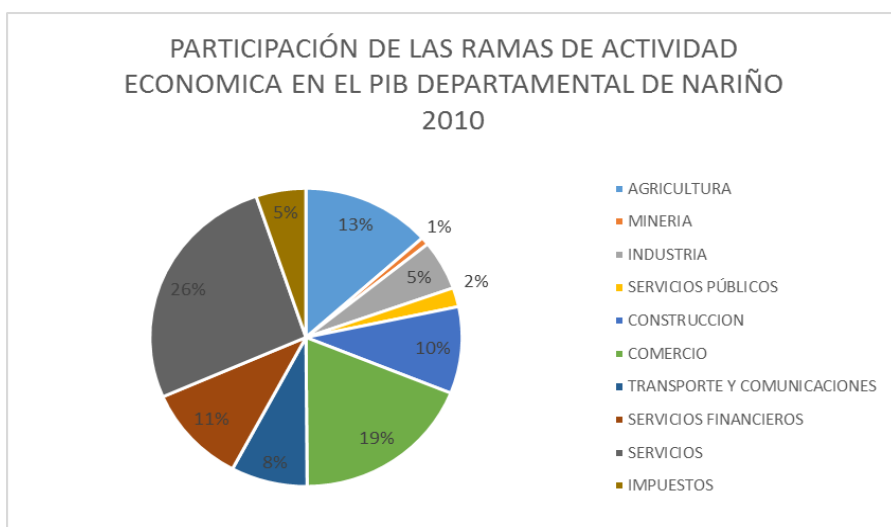
La participación de las ramas de actividad económica en el PIB departamental del año 2010 está lideradas por los servicios con el 26,3% en 2010, seguido por el comercio con el 18,8% y en tercer lugar la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 13,4%. Este último sector, presenta una reducción significativa en la última década, principalmente a partir del año 2007. Allí, las cadenas productivas más importantes son la papa, la leche, la caña panelera, las fibras naturales, la palma aceitera, el cacao y la pesca.

La participación de la rama de la construcción en el PIB departamental prácticamente se ha duplicado del año a 2000 a 2010, pasando de 4,8% a 9,4% respectivamente. Los

sectores de la industria y la minería tienen una participación muy baja, 5,4% y 0,8% respectivamente.

Este panorama productivo demuestra un tipo de economía básica destinada principalmente al consumo interno, que ha tenido incrementos importantes en los últimos tiempos, en parte especulativos como el tema de las “pirámides”, pero también por proyectos dinamizadores como la creación de Zonas Económicas Especiales de Exportación (ZEEE) en Ipiales y Tumaco en los años 2001 y 2003 respectivamente, que permite ampliar el comercio exterior en productos puntuales como la palma aceitera, pero que no ha desarrollado sectores de alta rentabilidad como la industria o la minería para tener mejores rendimientos, o como lo define el PNUD “una economía agrícola, predominantemente minifundista, con baja competitividad y sin actividades que generen valor agregado y sin actividades mineras importantes, que puedan representar ingresos por regalías” (PNUD, 2011: 19).

CUADRO 1



Conflictividad social

Una de las condiciones que han servido de explicación a la situación económica de Nariño es el aislamiento geográfico, ya que el departamento no cuenta con una red vial que abarque todo el territorio y la existente no tiene las mejores condiciones en muchos tramos, por ejemplo la infraestructura vial terciaria es bastante deficiente. Esta tesis es sostenida por algunos (Viloria, 2007) quienes hacen extensiva dicha cadena explicativa a la situación de conflicto armado (aislamiento-pobreza-conflicto armado), argumentando que “la pobreza y la geografía de Nariño han facilitado la llegada y establecimiento de grupos guerrilleros y paramilitares. Éstos no solo han generado una delicada situación de orden público, sino además han traído los problemas propios del narcotráfico”.

Sin embargo, bajo dicha premisa, no se hace posible entender porque se asiste a un escalamiento del conflicto en un periodo donde la economía departamental experimentó unos resultados positivos en la última década. Al menos de forma preliminar se podría decir que las variables de la economía y la geografía, pasarían a ser condiciones de contexto que no determinan el arribo o la generación de grupos armados.

En cambio, consideramos que hay algunos factores socio-políticos que tienen una mayor incidencia explicativa en la generación de conflictos. El Pacífico en su conjunto, se convirtió en las últimas décadas en una región altamente atractiva para la generación de proyectos productivos ligados a la extracción de recursos minerales y ambientales, sobre el cual el Estado colombiano y diferentes empresas del orden nacional y extranjero han dirigido la mirada (Conpes, 2007).

La difícil condición económica y social de la población allí asentada, que ha sido relegada históricamente por el Estado colombiano, entra en una búsqueda por comprender cuál es el papel que juega en el desarrollo de la región, para que la riqueza de sus territorios sea revertida en una mejor calidad de vida de las personas, o para que por lo menos, sus tierras y sus recursos no se vean afectados.

Aspectos como la economía de subsistencia, los bajos niveles educativos, y el escaso espacio de participación social y política, ha dejado el espacio propicio para que determinados grupos por la vía armada asuman los planteamientos sobre la forma en que la región permite el desarrollo económico y cómo este se distribuye entre la población. Es quizá por esto, que el conflicto solo se intensifica en el momento en que por las vías de la apertura económica y la puesta de la mirada nacional e internacional sobre el pacífico, se plantea la posibilidad de aprovechar a mayor escala la riqueza de la región.

Para Ávila (2009), la ejecución de megaproyectos, tales como el “Corredor Intermodal Tumaco-Puerto Asís-Belem do Pará” y la extensión de cultivos de palma aceitera, ha traído

consigo procesos violentos de apropiación y concentración de la tierra, que acompañados de la lucha por el control de los cultivos, la producción y las rutas de transporte del narcotráfico, han generado un panorama de multiplicidad de actores armados enfrentados entre sí y un sinnúmero de afectaciones a la población civil.

El Departamento de Nariño ha sido, sostenidamente, el mayor productor de coca en el país y para 2012 contaba con 10733 ha sembradas con la planta, las cuales constituyen el 22% del total que se produce a nivel nacional. Vale la pena destacar, que solo en el municipio de Tumaco, hay cerca de la mitad de los cultivos de coca del departamento y es de lejos el municipio con mayor producción a nivel nacional, con el 10,6% de hectáreas. Sin embargo, este mismo año, fue el primero en que se ha presentado una significativa reducción de los cultivos de coca, la cual estuvo alrededor del -38% con respecto al año anterior (UNODC, 2013).

Una aproximación al origen y expansión de los cultivos de coca está dado por el desplazamiento (o retorno) de campesinos cocaleros desde el Putumayo, luego de la implementación del Plan “Conquista II” del Ejército Nacional, inscrito dentro de las operaciones del Plan Colombia para erradicar la coca en la región y la ofensiva de violencia paramilitar contra los participantes de las movilizaciones campesinas cocaleras que se oponían a dicho plan a finales de los noventa. (Ávila, 2013).

La presencia y el accionar de actores armados ilegales en el departamento de Nariño se pueden ubicar desde mediados de los años ochenta, con la creación en el año 1985 del Frente 29 “Alonso Arteaga” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Farc en el piedemonte costero, límites entre Nariño y Cauca. Posteriormente, en el año 1993 se hace el traslado, desde el sur de Caquetá y norte de Putumayo al nororiente de Nariño, del Frente 2 Mariscal Antonio José de Sucre de las Farc, con el cual la organización armada logra conectar el tránsito hacia el pacífico.

Para la segunda mitad de la década del noventa, del Frente 29 se crean las Columnas móviles “Mariscal Antonio José de Sucre”, la “Daniel Aldana” y la “Omar Quintero” de las Farc, como estrategia para hacer frente a los embates sufridos por la implementación del Plan Colombia. En los primeros años de la década del 2000, en la llamada Bota Caucana, nace el Frente 64 “Arturo Medina” de las Farc, con alguna influencia sobre los municipios limítrofes de Nariño y por último, en el año 2002, se conforma la Columna móvil “Jacinto Matallana”, en los límites de Nariño con Putumayo (Ávila, 2013).

En la actualidad tanto la Columna Móvil Omar quintero como la Jacinto Matallana han prácticamente desaparecido, debido a la ofensiva de la Fuerza Pública, y ha sido el Frente 48 desde el Putumayo quienes han retomado parte del oriente del departamento. Por su

parte el Frente 2 de las FARC también prácticamente desapareció desde el año 2005, aunque se han vuelto a reactivar desde el año 2011 en el municipio de Ipiales.

De otra parte, el Ejército de Liberación Nacional-ELN, también tiene una presencia militar desde finales de la década del 80, cuando después de un trabajo político surgido de una década atrás por Francisco Galán y el Colectivo Camilo Torres, se conforma el Frente Comuneros del Sur en el año 1989. A finales de la década del 90, se crean también estructuras móviles como la Compañía Héroes y Mártires de Barbacoas, con centro de operaciones en el municipio que lleva su nombre, la Compañía Héroes y Guerreros del Sindagua, operando en el pie de monte costero, la Compañía Héroes de los Andes, operando en límites con Putumayo y la Compañía Elder Santos (Ávila, 2013).

En la actualidad la Compañía Héroes y Guerreros del Sindagua y Elder Santos han sido fuertemente debilitadas, la primera prácticamente desapareció y la segunda de fusionó con el Frente Comuneros del Sur.

Nariño no escapó tampoco al fenómeno del paramilitarismo. Si bien el origen de éste estuvo muy lejos de allí, dichos grupos representados en las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC deciden crear en 1999 el Bloque Libertadores del Sur, al mando de alias “Pablo Sevillano”, quien tenía adhesión al Bloque Central Bolívar.

La ruta del paramilitarismo en Nariño ha sido documentada de la siguiente manera: en primer lugar, en la cabecera municipal de Tumaco se desarrollaron acciones de asesinatos selectivos a líderes sociales y políticos, junto a las denominadas “limpiezas sociales” a simpatizantes de las guerrillas. Uno de los hitos principales que marcan esta entrada del paramilitarismo es el asesinato de la Hermana Yolanda Cerón Delgado, Directora de Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, ocurrida en septiembre del año 2001 (El tiempo.com).

Posteriormente, la estrategia fue establecer control sobre las vías terrestres con salida al mar como las carreteras Tuquerres-Tumaco e Ipiales-Tumaco. Para ello se establecieron dominios sobre sitios estratégicos como el corregimiento Llorente, de Tumaco, en donde se desarrollaron intensos combates con las Farc y masacres de población civil a quienes consideraban bases de apoyo de la guerrilla. De esta manera, se dice que el paramilitarismo logró expulsar a la guerrilla de las principales cabeceras y centros poblados, consolidando un control sobre estos.

Por último, la estrategia continuó a tomar el control de los ríos, principales rutas fluviales para el transporte de cocaína hacia el mar pacífico, tales como el río Mira y el río Patía. Con esto vino la incursión a municipios costeros hacia el norte como Francisco Pizarro y Mosquera, y hacia el interior como Roberto Payán, Magüi y Barbacoas. Según Ávila (2013),

en el año 2000, se creó una nueva agrupación desprendida, pero dependiente del Bloque Libertadores del Sur, la cual se denominó “Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño” que se instaló en el municipio de Policarpa y desde allí se extendió a municipios circunvecinos como El Rosario, Leiva, Cumbitara, entre otros.

Se ha argumentado, que la motivación paramilitar fue más enfocada al despojo y a la concentración de tierras para actividades del narcotráfico, el cultivo de palma y la explotación minera que para la lucha contra-insurgente (MOE-CNAI; Ávila, 2013). Los años de expansión paramilitar coinciden con años en donde se incrementaron significativamente los cultivos de coca y de palma africana.

Las confrontaciones armadas durante el periodo de incursión paramilitar se incrementaron notoriamente, por lo menos en los primeros años. El escalamiento del conflicto puede apreciarse en la serie de información que se presenta en el informe MOE-Corporación Nuevo Arco Iris, donde refiere un aumento significativo en el periodo 1997-2002 de indicadores tales como los homicidios, los muertos civiles en conflicto, el desplazamiento, la presencia violenta de actores armados y los tipos de disputa¹. En este periodo, y casi de manera paralela a la incursión paramilitar, en 2001 se presenta una fuerte ofensiva del Ejército Nacional que adelanta una de las operaciones más grande en la costa pacífica, denominada la Operación “Tsunami”.

Entre los años 2003 y 2005 hay una reducción leve en los indicadores del conflicto, no sustancial, pero si significativa, que es interpretado como el afianzamiento de los paramilitares en el departamento hasta llegar a su desmovilización, el 30 de julio de 2005, en donde se desmovilizaron 689 hombres.

A partir de este momento, retorna una nueva escalada del conflicto con indicadores que se ponen en niveles superiores a los que se daban antes de la desmovilización de las AUC. El surgimiento de nuevos grupos paramilitares, esta vez denominados bandas criminales, serían los factores explicativos del inicio de un nuevo periodo de conflicto en el departamento. Sumado a ello, el repliegue nuevamente de las FARC y el ELN hacia zonas que habían perdido en la confrontación con los paramilitares.

Se ha indicado que las bandas criminales fueron conformadas a los pocos días de la desmovilización de las Auc, por parte de alias “El Nomo”, segundo al mando de “Pablo Sevillano”. Este grupo se denominó “Organización Campesina Nueva Generación-OCNG” y

¹ El informe indica que para el periodo señalado se pasó de unos 400 homicidios a más de 700; que de cerca de 100 muertos civiles en combates se llegó hasta 400; los desplazados que prácticamente no existían, se alcanzaron cerca de 10.000; de una presencia de actores armados en alrededor de tres cuartas partes del departamento de pasó a más de la mitad; los tipos de disputa entre ejército -guerrilla y paramilitares-guerrilla se incrementó, aunque la disputa ejercito-paramilitares fue nula.

luego se conformó otro grupo, esta vez llamado “Organización Autodefensas Nueva Generación-OANG”, el cual operó en los municipios de Leiva, Cumbitara, El Rosario y Policarpa. Hacia finales de 2006, el grupo se desplazó también hacia los municipios del Bajo Patía, hacia la costa pacífica, como Magüi, Roberto Payán, Olaya Herrera y Mosquera. En el año 2006 se creó el grupo Águilas Negras, operando inicialmente en municipios de la costa pacífica como El Charco y Tumaco.

También hizo presencia la organización Los Rastrojos quienes hacen parte del grupo que lideraba Wilmer Varela, alias “Jabón”, narcotraficante del norte del Valle, quien se expandió por toda la costa pacífica, partiendo desde Buenaventura hasta las costas chocoanas por el norte, y hasta Tumaco, en las costas nariñenses por el sur, a finales del año 2005. Este grupo absorbió algunas fracciones de los ya mencionados y se ha consolidado como una de las Bacrim más fuertes en el Departamento, por lo menos hasta la entrega de los hermanos “Comba” a finales de 2012, máximos comandantes de la agrupación que sucedieron a “Jabón” luego de su muerte.

En septiembre de 2011, en la parte norte de Nariño, municipios de Cumbitara y Policarpa, se dio un proceso de reestructuración de Los Rastrojos que recompuso su jefatura y formas de actuación posicionado una nueva tendencia, mediante las denominadas “Rondas Campesinas del Sur” o “Rocas del Sur”. A este grupo se le habría sido encomendado evitar las divisiones en el interior de la organización, pero antes de la entrega de sus jefes, habría sido vendido a “Los Urabeños” en 2012, quienes han hecho una presencia, hasta ahora débil, en Nariño, pero que en otras regiones ha avanzado decididamente sobre corredores del pacífico, como Buenaventura en el Valle del Cauca.

Durante el periodo entre los años 2007 y 2009 el departamento asistió a una reconfiguración del poder regional que llevó, por un lado, a una situación de guerra entre las Farc y el Eln, decretada inicialmente en los Departamentos de Cauca y Arauca para posteriormente reflejarse también en Nariño, ya que en el avance de las Farc por retomar espacios dejados por las Auc, ingresó a territorios del Eln y este a su vez estableció alianzas con Los Rastrojos para participar del negocio del narcotráfico en algunas regiones, y por el otro lado, a la recomposición de fuerzas paramilitares denominadas ahora como Bandas Criminales-Bacrim, que han ganado poder en distintos municipios del país.

Entre estas últimas, igualmente se habría reconfigurado poderes regionales, ya que por ejemplo el avance de Los Rastrojos por el norte de Nariño, significó para las Águilas Negras establecer una alianza con la Organización Nueva Generación en municipios como Policarpa para enfrentarlos (Ávila, 2009).

El cese de hostilidades entre las Farc y el Eln se da en el año 2009 y las Farc diseñan un plan denominado “Renacer”, para recuperar los espacios dejados en el debilitamiento progresivo de Los Rastrojos en la costa pacífica y la practica desarticulación de las Águilas Negras en el norte de Nariño. En este proceso se aumentó la instalación de minas antipersona, francotiradores y hostigamientos que les permitieron salir hasta zonas medias de los ríos del departamento.

En el año 2012 se consolida nuevamente la presencia en ciudades como Tumaco, El Charco, y avanzan en el bajo Patía, a municipios de Policarpa y Cumbitara, al tiempo que sufren reveses estratégicos en municipios como Ricaurte e Ipiales. Las Farc cesan en la práctica del Secuestro como forma de financiar sus estructuras, y fortalecen el cobro de exacciones ilegales a actividades mineras de explotación aurífera y extracción de petróleo al Oleoducto Transandino.

La nueva entrada al casco urbano de Tumaco de las Farc vino acompañada de atentados a los puestos policiales y militares, del cual la bomba a la Estación de Policía fue el hito que marcó este momento. En este hecho se presumió que habrían participado las bandas criminales en retaliación al proceso de las operaciones “Troya Pacifico II” que debilitó las estructuras de los grupos a nivel local y capturó a algunos de sus principales jefes nacionales. De ser así, las Farc habrían sido las más beneficiadas de una alianza transitoria, ya que el hecho representó el posicionamiento de las Farc en el centro del escenario y la necesidad del Estado por reformular las estrategias de persecución a los cabecillas de la Columna Móvil “Daniel Aldana”.

La reformulación de las estrategias se hizo de dos maneras: la priorización de Tumaco como municipio de consolidación militar estratégica que se manifiesta con el arribo de la Fuerza de Tarea Pegaso y la creación del Batallón Fluvial de Infantería de Marina #4 con la puesta en funcionamiento de la Fuerza de Tarea Poseidón. Estas estrategias tan solo han logrado contener la acción de las Farc en el casco urbano y sitios estratégicos de la carretera al mar y durante el año 2013 hay un intenso trabajo de inteligencia buscando permear las compañías principales de las Farc y una presión representada en el aumento de capturas a miembros de las redes de apoyo que son familiares o hombres cercanos a los comandantes de la columna insurgente.

En otras columnas y frentes como la “Mariscal Antonio José de Sucre” y los Frentes 48 y 29, las Fuerzas Militares han logrado dar fuertes golpes a las Farc mediante operaciones de bombardeo a los campamentos de los cabecillas de estos grupos. Se hizo en Ricaurte y en Ipiales en el año 2012 y representó dos avances importantes para el Estado y reveses a las Farc, ya que perdieron el tránsito para el tráfico de armas desde Ecuador al Putumayo por el corregimiento La Victoria y presencia en la carretera al mar en el piedemonte.

En la dinámica actual en la costa pacífica, es probable que un ataque similar por parte de la Fuerza Pública se de en los próximos meses, para así completar un proceso de debilitamiento a los grupos de las Farc del sur de Nariño. Por lo pronto, la guerrilla de las Farc ha debido resguardarse y bajar su intensidad ofensiva, enfocar acciones en la extracción de petróleo al oleoducto e impedir el avance de la Fuerza Pública. Por su parte, el ELN que había sido reducido por la confrontación con las Farc y la desvinculación masiva de muchos de sus combatientes en todo el departamento, entra en un proceso de retomar corredores de movilidad que les permiten ubicarse en los municipios de Cumbal, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera.

Se crea la compañía Toño Obando como un plan para urbanizar la guerra en los municipios de Samaniego, Linares y Santacruz de Guachaves, en donde han tenido influencia histórica. De otro lado, se le observa acompañando ataques de las Farc dirigidos a retomar posicionamientos estratégicos en el piedemonte costero, en municipios como Barbacoas.

Este panorama visto en otra perspectiva, muestra un incremento significativo de las acciones armadas a partir del año 2005 hasta un punto máximo en el año 2007. Según la base de datos de CERAC, se pasó de 121 eventos de conflicto armado en el año 2005 a 179 en el año 2006 y luego a 259 eventos en el año 2007. Ya para los años 2008 y 2009 estos descienden a 179 y 135 respectivamente. Tendencias similares ocurren con indicadores como los combates, los ataques y las acciones unilaterales (Base de datos CERAC).

Algo que llama la atención en los datos reportados por CERAC, es que los números de todos los indicadores entre 2005 y 2009 se ubican muy por encima de los que se registraron durante el periodo paramilitar de las Auc entre 1999 y 2005. Esto indica que la disputa ha sido mayor por la multiplicidad de actores que buscan abrirse espacios, principalmente de corredores estratégicos para el narcotráfico sin que necesariamente se planteen como objetivos el control político de determinadas poblaciones, lo cual convierte estas zonas en lugares de constante disputa sin dominios claros sobre el territorio. Este ha sido básicamente el accionar de las denominadas Bacrim, diferente a sus antecesores grupos paramilitares de Auc.

Otro aspecto para resaltar es la marcada disminución de combates que se registran entre las fuerzas estatales y las guerrillas en los últimos años de los que se posee información (2008 y 2009), pasando de 47 en el año 2007, a 9 en el año 2009. Por su parte, aunque siguen siendo pocos, los combates de fuerzas estatales con paramilitares presentan un leve incremento, con 4, 6 y 2 casos para los años 2007, 2008 y 2009 respectivamente.

Hasta el año 2013, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, ha reportado un total de 334.761 personas víctimas de los diferentes hechos ocurridos por el conflicto armado en el Departamento de Nariño. De estos, Más del 80% han ocurrido entre 2005 y 2013, los años posteriores a la desmovilización paramilitar, lo cual indica del fracaso de dicho programa en la contención del conflicto.

La mayor parte de estas víctimas se da por el desplazamiento forzado, que en promedio representan cerca el 87% durante todo el periodo, aunque ha venido disminuyendo paulatinamente a partir del año 2007. Que los desplazamientos estén disminuyendo, significa un posible descenso en las confrontaciones entre numerosas estructuras armadas. Así mismo refuerza la idea de que algunos actores armados no ven como estrategia apoderarse de los territorios expulsando a la población civil, sino controlar los corredores que les resultan más útiles para sus fines (Ver cuadro 1).

La mayoría de hechos no representan ni el 2% de las víctimas cada uno, sin embargo, se observa incrementos abruptos de los actos terroristas y las amenazas durante los últimos tres años, es decir, entre 2011 y 2013. Esto es entendido por el aumento de las extorsiones, indicativo de un preocupante fenómeno que refleja la imposibilidad de un Estado para generar canales de incorporación a la economía legal, para, por ejemplo, los actores desmovilizados y colaboradores del narcotráfico, por ejemplo, ya que al reducirse significativamente las fuentes económicas provenientes del cultivo de coca y la exportación de cocaína, al mismo tiempo que se vislumbran algunos logros en materia de la presión de la fuerza pública, nacional e internacional sobre estas actividades, un amplio contingente de miembros de estos grupos han optado por buscar fuentes de ingreso en la economía legal a través de la extorsión, lo cual genera amenazas y atentados a comerciantes e instalaciones de los negocios legales² (Ver cuadro 1).

El homicidio, con el 4,4% del total de víctimas en promedio, es otro hecho victimizante significativo, que muestra una reducción en más de la mitad para el conjunto del periodo desde el año 2006 hasta 2010 (Ver cuadro 1). Sin embargo, los datos de UARIV al respecto, parecieran mostrar un sobre-registro de este indicador, dado que varias personas pueden declarar ser víctimas de una misma persona.

Cuadro 1

Víctimas por tipo de hecho victimizante en Nariño 2005-2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	Total	% Promedio 2005-2012
Desplazamiento	14195	23899	43977	36965	30099	24354	29190	22965	14490	240134	87,0%
Homicidio	1875	2603	2464	1640	1095	655	766	823	220	12141	4,4%
Perdida de bienes	1140	963	813	327	792	948	1803	2558	773	10117	3,7%
Acto terrorista	212	172	289	113	275	219	551	2926	807	5564	2,0%
Amenaza	129	157	143	127	126	183	770	2701	1130	5466	2,0%
Desaparición forzada	101	194	182	144	131	75	64	178	26	1095	0,4%
Minas antipersonales	59	96	102	86	103	76	131	107	16	776	0,3%
Secuestro	52	46	49	26	29	17	40	38	11	308	0,1%
Vinculación de niños	11	11	16	11	35	21	22	25		152	0,1%
Tortura	32	12	20	9	9	7	17	23	2	131	0,0%
Delitos sexuales	20	9	15	7	13	13	9	41	13	140	0,1%
Abandono o despojo de tierras		8	6	7		2	2	7		32	0,0%
Total	17826	28162	48070	39455	32707	26568	33363	32385	17488	276024	100,0%

Fuente: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Visto por las cinco subregiones en las que administrativamente la Gobernación de Nariño divide el territorio (Ver cuadro 2), en los doce municipios pertenecientes a la sub región de la costa pacífica, entre los cuales se encuentran Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, la cifra de víctimas por todos los hechos victimizantes contabilizada hasta el momento asciende desde el año 2005 y llega a 183.828 personas, representando dos terceras partes del total del departamento.

Seguidamente, los veinte municipios que conforman la subregión del norte, entre los que se encuentran los municipios de Taminango, Cumbitara y Policarpa, concentra la segunda mayor cantidad de víctimas en el departamento, ascendiendo a 54.409 personas, representando una quinta parte del departamento. La región que componen los nueve municipios de la subregión de occidente, entre los que se encuentran Samaniego, han tenido una participación menor en ese orden subregional, sin embargo, es la que más una marcado una tendencia creciente a lo largo del periodo 2005-2013.

Las sub regiones sur y centro, la primera conformada por diecisiete municipios, entre los que se encuentra Ipiales y Tuquerres, también conocida como la Ex Provincia de Obando, y la segunda conformada por seis municipios conformados alrededor de la capital urbana de Pasto, son las que tienen persistentemente en el tiempo una menor cantidad de

víctimas, representando cerca de una décima parte del departamento, ya que tienen parcialmente presencia de grupos armados ilegales.

Cuadro 2

TOTAL DE VÍCTIMAS POR SUBREGIONES DE NARIÑO (2005-2013*)

Año	SUBREGION					
	Costa Pacífica	Norte	Occidente	Sur	Centro	Total
2005	14059	3389	2718	708	972	21846
2006	15890	12257	2864	865	1203	33079
2007	36518	9301	4169	1388	1106	52482
2008	26015	8797	6501	1789	533	43635
2009	26075	4560	4264	919	431	36249
2010	22527	3407	3797	630	426	30787
2011	24883	5846	4196	1099	719	36743
2012	21934	4723	5032	1251	539	33479
2013	14008	2129	2874	484	256	19751
Total	183828	54409	18334	9133	6185	271889

Fuente: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

* Datos con corte al 1 de diciembre.

Si se compara la información con datos aportados por Policía Nacional, estos señalan menos de la mitad de víctimas reportadas por AURIV en el mismo periodo para el que se poseen los datos. Sin embargo, ambas fuentes se asemejan en la tendencia temporal señalada anteriormente (Ver cuadro 3). Este indicador, puede ser reflejo de la disminución de agentes del narcotráfico que se ha dado en los últimos años por vía del sometimiento

voluntario o forzado de varios jefes de las grandes organizaciones, que ha fragmentado estas redes y lanzado a los agentes violentos de las mismas a dedicarse a otras actividades, como las extorsivas. Por ello, esta violencia ya no es la masiva disputa con ajustes de cuentas, ni el reacomodo de nuevas grandes figuras del narcotráfico.

Cuadro 3

Homicidios en Nariño 2005-2011

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
738	797	778	723	647	636	579

Fuente: Policía Nacional

Así las cosas, tenemos un departamento que ha estado en el centro del desarrollo del conflicto colombiano por contener a muchos dinamizadores del conflicto que se ubican en el interés estratégicos de los actores que allí intervienen. Es despensa de cultivos de uso ilícito, en donde su ubicación geográfica facilita también la existencia de otras cadenas productivas del negocio, como el procesamiento y el transporte. Poseedora de recursos naturales de alto valor como el petróleo, con áreas de explotación en la zona de Jardines de Sucumbíos (Ipiales) y transporte de éste hacia el Mar Pacifico por medio del Oleoducto Transandino, que cruza el departamento por la zona sur de frontera, pero también con amplias zonas de exploración, que los estudios recientes han determinado un potencial extractivo, tales como la zona marítima de Tumaco. También es productora de oro, y aunque se desarrolla a pequeña escala principalmente y representa un bajo porcentaje del PIB, es una fuente de recursos del que se benefician los actores armados.

Movimiento social

En Nariño hay una larga trayectoria de movimientos sociales que han participado activamente en el escenario político y social del departamento, alcanzando niveles de movilización altamente significativa y ocupando instancias del Gobierno Departamental.

La condición pluriétnica de Nariño es un factor que le ha conferido sentido al desarrollo del movimiento social en el departamento, la cual muestra tres ejes importantes de organización y se expresan focalizados en las regiones de asentamiento de las comunidades que representan. Estas son las comunidades campesinas de la región de

cordillera, las comunidades indígenas de la costa, el piedemonte y la cordillera y las comunidades negras en la costa pacífica.

En cuanto al movimiento social campesino, este se expresa mediante organizaciones que integran a comunidades de regiones sobre la cordillera occidental con gran vocación agrícola dedicada al plátano, el café, el frijol, el maíz, la papa y la yuca, en donde predominan procesos de poblamiento caracterizados por el minifundio.

La forma básica de organización de estas comunidades se hace mediante los espacios locales de participación en las juntas de acción comunal, organizaciones de productores y grupos de mujeres y jóvenes. En la zona norte del departamento, ha habido experiencias organizativas aglutinadas en el Movimiento Social de la Cordillera Occidental del Alto Patía que nació en los años ochenta en los municipios de Cumbitara, El Rosario, EL Tambo, Leiva, Los Andes, Policarpa y Taminango, planteando mayor atención del Estado para el mejoramiento de las condiciones del campo en medio de una grave crisis económica y social que convocó a más de veinte mil personas en 1997 en una marcha hacia la carretera Panamericana.

Adicionalmente en Nariño las organizaciones campesinas estuvieron unidas alrededor del Movimiento de Integración Regional-MIR durante los años noventa y parte del 2000, en las que convergieron movimientos sociales de diferentes regiones del departamento. En ella se integraron movimientos como el Movimiento Social de Los Abades con presencia en los municipios de Samaniego, Ancuya, Linares, Santacruz, Providencia y La Llanada; el Frente Común Campesino con presencia en los municipios de Tuquerres, Sapuyes, Cumbal y Guachucal; el Movimiento Cívico del Piedemonte Costero con presencia en los municipios de Barbacoas, Ricaurte, Tumaco, Mallama, Magüi, Roberto Payán y Francisco Pizarro; y el Movimiento Social de la Circunvalar al Galeras con presencia en los municipios de Sandoná, Florida, Yacuanquer y Consacá.

El movimiento indígena tiene diversos grados de organización. El pueblo de los Pastos, el más numeroso que está asentado en la altillanura o la ex provincia de Obando, tiene procesos organizativos ancestrales por conservar y ampliar el territorio colectivo que está adjudicado a los diferentes resguardos indígenas y plantear oposición a las políticas económicas nacionales e internacionales sobre producción agrícola y preservación del medio ambiente.

El Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, buscando ser menos afectados por el reordenamiento territorial en los ochentas con la autonomía municipal se ha puesto en la tarea de redefinir los espacios de gobierno sobre el territorio, lo que ha conllevado a avanzar en la visión de los resguardos como espacio de producción

hasta una visión como espacios de legitimación y legalización absoluta de la autonomía étnica. Visiones que se disputan en espacios de organización política nacional al nivel de las leyes en el Congreso de la República a través de los representantes de las Autoridades Indígenas de Colombia por el reordenamiento territorial de aspectos que fueron formulados en la Constitución de 1991 sobre tierras y autonomía de los resguardos, pero no claramente reglamentados en el desarrollo jurídico posterior.

Y por su parte, los resguardos indígenas fortaleciéndose hacia el interior de los resguardos se han creado, por ejemplo, comisiones para recomponer las perspectivas del movimiento indígena como la Comisión de Reordenamiento Territorial Indígena de los Pastos. Se ha expresado por Mamiám de la siguiente manera *“esta discusión sobre el reordenamiento territorial estatal y la correspondiente constitución de las entidades territoriales indígenas ha generado entre los Pastos una fuerte reflexión sobre su propio reordenamiento interno, bajo el lema de que primero hay que comenzar por arreglar la propia casa antes de ver su encuadre en las estructuras macroestatales, lo cual ha sido significativo, pues esta reflexión se convierte en una relectura y reinención de su historia.”*

Un problema que afecta duramente esta discusión son las políticas económicas de libre comercio entradas en vigencia recientemente con los Estados Unidos y otros países. Esto pone en riesgo, a nivel de la producción agrícola minifundista, la propiedad y el poder de decisión sobre los cultivos, principal sustento de la economía indígena. Por este motivo, parte de la movilización social de los Pastos en los últimos años se ha destacado por reunir a miles de indígenas de varios resguardos alrededor de la ex provincia de Obando en oposición a los tratados de libre comercio y participar en los paros campesinos recientes para exigir medidas que protejan la producción de papa y lácteos, de la que adquieren su sustento miles de familias indígenas en la zona.

Por el lado del pueblo Awá la zona del piedemonte costero, la movilización social se desarrolla por medio de dos organizaciones, la Unidad del Pueblo Awá-UNIPA y el Cabildo Mayor Indígena de Ricaurte-CAMAWARI. Ambas, son organizaciones de segundo orden que integran como instancia centralizada de concertación a un conjunto de resguardos, la primera con 26 adscritos en los municipios de Barbacoas, Tumaco, Roberto Payán y Samaniego, mientras que la segunda integra a 11 resguardos, todos del municipio de Ricaurte.

Estas fueron creadas en 1985 y 1995 respectivamente, y años después fueron reconocidas como entidades especiales por el Ministerio del Interior. Surgieron como respuesta a la llegada de colonos, algunos de ellos asociados a las empresas de palma de aceite, que invadieron lo que consideran su territorio ancestral y sobre el cual se comienzan a reclamar derechos. Posteriormente, con la llegada de las Farc, el Eln y las bandas

criminales a finales del años noventa, el proceso organizativo se ve abocado a establecer mecanismos para enfrentar y atender las consecuencias del conflicto armado, estableciendo los Planes de vida, creando las Guardias indígenas y estableciendo acciones de rechazo a los grupos armados, legales e ilegales.

Si bien, la intervención de los grupos armados debilitó el movimiento social por la persecución política a sus líderes o la injerencia en sus procesos, la organización indígena ha recibido oportunidades especiales para soportar su fortalecimiento interno mediante la resolución defensorial N° 53 del año 2008 y los Planes de Salvaguarda en construcción, solicitados por la Corte Constitucional en los Autos 004 del año 2009, que ha puesto a las organizaciones indígenas a discutir la autonomía territorial desde el tema de la defensa a la vida y la protección al territorio.

En la actualidad, esta discusión pasa por el tema de la minería, a la cual han retornado los grupos armados de manera ilegal como fuente de financiamiento, empresarios foráneos que reclaman títulos sobre ellos o los explotan ilegalmente y las multinacionales mineras con intereses de iniciar exploraciones en las áreas que en el año 2012 se catalogaron como áreas estrategias para el sector por la Agencia Nacional Minera.

Por último, están las organizaciones sociales de comunidades negras que tienen una presencia mayoritaria en las regiones de la costa pacífica y una parte del norte del departamento. Los Concejos comunitarios fueron el mecanismo establecido para la protección de las comunidades negras estipulado en la Ley 70 de 1993 y reglamentado en 1995. Se les reconoce como la máxima autoridad en la administración del territorio y desde entonces estos han venido trabajando por hacer valer la autoridad propia y dar claridad a los territorios que les corresponden a que, como en el caso de la costa pacífica, han sido invadidos por empresas agrícolas de palma de aceite.

Los Concejos Comunitarios en el departamento se han integrado en asociaciones que los representan como órganos asesores para articular las problemáticas de las comunidades negras en la dispersión geográfica y política de los diferentes Concejos Comunitarios. En la costa sur está presente la Asociación de Concejos Comunitarios del Pacífico Sur – RECOMPAS, que agrupa a 15 Concejos Comunitarios de los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro y Mosquera. En la costa norte del departamento, la Asociación de Concejos Comunitarios y Entidades Territoriales del Pacífico Nariñense – ASOCOETNAR, quienes integran a 33 Concejos Comunitarios de los municipios de Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí. Finalmente, en el norte del municipio existe el Concejo de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental – COPDICONC en los municipios de Santa Bárbara y El Charco.

Los ejes de acción de los Concejos Comunitarios giran alrededor del territorio, la economía y el desarrollo comunitario. Respecto al territorio se han establecido procesos de delimitación de las tierras de titulación colectiva y recuperación de las tierras despojadas por grupos armados y empresas agrícolas. En esta problemática es de especial interés el caso del Concejo de Alto Mira en el municipio de Tumaco, donde los grupos armados, la minería ilegal y los cultivos ilícitos desplazaron gran cantidad de comunidades negras y las empresas de palma de aceite invadieron sus parcelas, lo cual ha derivado en conflictos jurídicos fallados a favor de los Concejos Comunitarios.

Respecto a la economía se presenta una apuesta por favorecer los cultivos ancestrales como el plátano, la yuca, el maíz, el chiro, el cacao, entre otros, los cuales perdieron vigencia por la expansión del cultivo de la palma de aceite. A raíz de los problemas ocasionados por la enfermedad de “pudrición del cogollo” a finales de la década del 2000, la propuesta de los Concejos Comunitarios es que no se lleven a cabo las renovaciones de la palma de aceite sino que se apoye el fortalecimiento de los cultivos ancestrales, como mecanismos de seguridad alimentaria y rescate de la identidad propia.

A nivel del desarrollo comunitario, el movimiento de comunidades negras en el pacífico nariñense le apuesta también a la articulación de la multiplicidad de organizaciones sociales que los representan, ya que está ausente una unidad de propósitos a nivel de las comunidades negras ha representado debilidad organizativa, ya que permite el espacio para la injerencia de intereses políticos distintos y los grupos armados ilegales. A su vez, los Concejos Comunitarios entienden la necesidad de fortalecerse organizativamente con planes a mediano y largo plazo que establezcan los elementos fundamentales del desarrollo comunitario. Para ello han construido un plan de Etnodesarrollo que contempla la titularidad de la tierra, el saneamiento de cultivos ilícitos, los procesos etno-educativos y los modelos productivos que garanticen la seguridad alimentaria y no amenacen los ecosistemas ancestrales.

EL MUNICIPIO DE TUMACO

Delimitación territorial y temporal del estudio.

El municipio de Tumaco tiene una extensión territorial de 3.778 Km² y está ubicado en la costa pacífica del suroccidente del Departamento de Nariño. Limita al norte con los municipios de Francisco Pizarro, Roberto Payán y Mosquera; al oriente con el municipio de Barbacoas; al sur con la República de Ecuador; al occidente con el Océano Pacífico. La cabecera municipal de Tumaco se encuentra ubicada en una isla, lo cual le confiere la particularidad de ser puerto marítimo, el segundo más importante sobre la costa pacífica colombiana después de Buenaventura (Ver mapa 1).

Mapa 1

Municipio de Tumaco



Fuente: Wikipedia.

La población de Tumaco está proyectada para el año 2013 en 191.218 habitantes, de los cuales 105.832 (55,3%) viven en la cabecera mientras que 85.386 (44,7%) viven en el resto. Teniendo en cuenta la fecha del último censo en el año 2005 donde se reportaban

159.955 habitantes, desde ese año hasta el presente la población ha venido creciendo a un ritmo del 2,4% promedio anual.

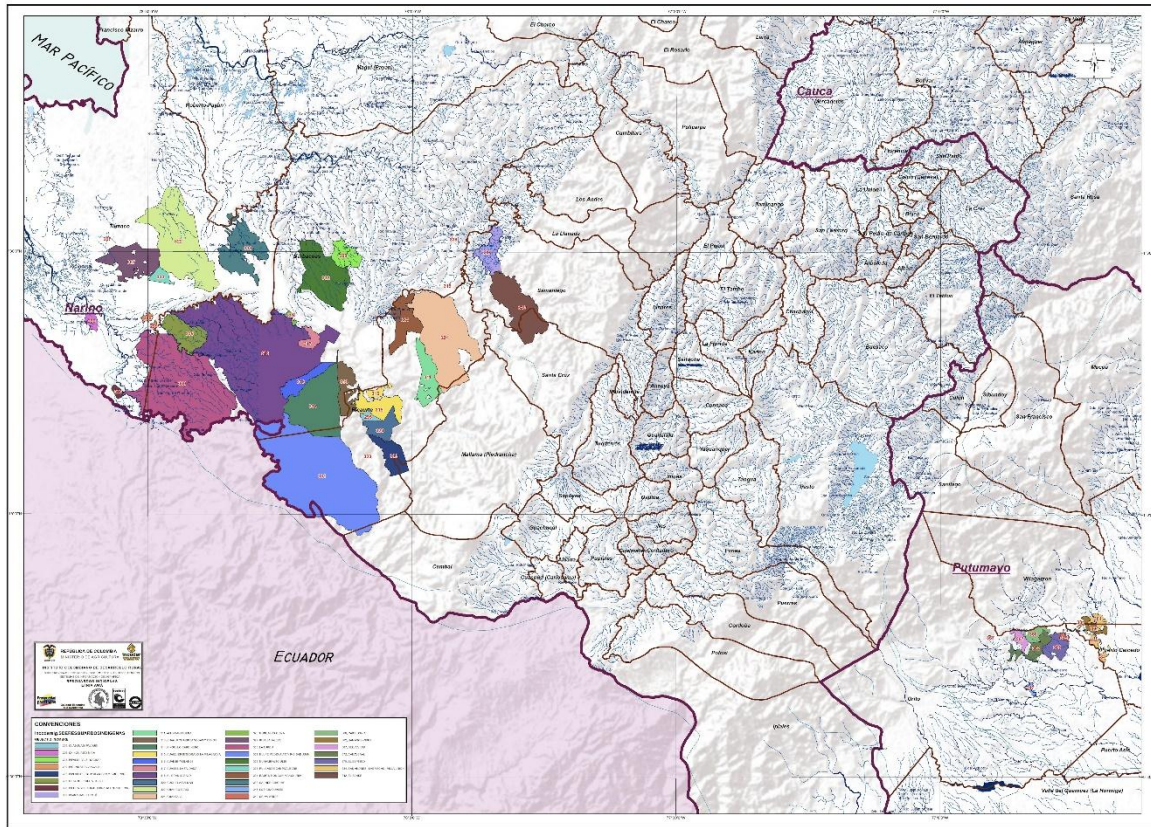
Según los datos de las proyecciones de población del DANE, en el año 2012 el 50,1% de la población eran hombres y el 49,9% restante eran mujeres. En cuanto a las edades, se puede decir que la población de Tumaco es muy joven, con una pirámide poblacional de base ancha, ya que el 47,3% se encuentran en edades entre los 0 y 19 años. De lo anterior se difiere que hay una tasa de dependencia juvenil alta, la cual llega al 63%, mientras que la población senil es poca, representado solo el 4,2% del total de la población y por lo tanto la tasa de dependencia senil igualmente es bastante baja del 7,1%.

La zona urbana de Tumaco está asentada sobre dos islas llamadas la Isla de Tumaco y la Isla El Morro, además de una pequeña parte en la zona continental. Se distribuye administrativamente en cinco comunas que comprenden un total de noventa y nueve barrios. Algunas zonas de la parte continental que pertenecen a la comuna 5 sufren problemas de licuación del suelo y otras zonas de las islas sufren riesgo de tsunami por estar frente al mar.

En la zona rural, la mayor parte del territorio pertenece a los 15 Consejos Comunitarios de Comunidades Negras existentes en Tumaco. Son 265.048 hectáreas reconocidas como tal (70% del área total), en donde habitan unas 53.674 personas. La población afro descendiente de Tumaco es mucho mayor, oscila alrededor del 90% del total, por lo que no todas las personas de etnia negra o afro descendiente hacen parte de los Consejos Comunitarios. Los Consejos Comunitarios se llaman así: Acapa, Bajo Mira Frontera, Alto Mira Frontera, Unión río Chagüi, Unión río Rosario, Cortina Verde Mandela, Rescate Las Varas, Veredas Unidas Un Bien Comun, Río Mejicano, Río Tablón Salado, Unión Vereda del río Cuanapí, Río Gualajo, Tablón Dulce, Imbilpi del Carmen y La Nupa.

Los pueblos indígenas Awá también forma parte importante del territorio de Tumaco, comprendiendo alrededor de 142.236 hectáreas, que conforman 17 resguardos y un total de población a 2012 de 11.408 personas, cerca del 6% de la población total de Tumaco. Llama la atención que en los pueblos indígenas de Tumaco hay una mayor cantidad de tierra por persona que en las comunidades negras. Los resguardos de Tumaco hacen parte de la organización Unidad del Pueblo Awá – UNIPA, y sus nombres son los siguientes: Alto Albi, Alto Ulbi Nunalbi, Chinguirito Mira, Gran Rosario, Gran Sábalo, Hojal La Turbia, Inda Guacaray, Inda Sabaleta, Kejuambi Feliciano, La Brava, Peña Alegría, Piedra Sellada, Piguambi Palangala, Palgande C.A., Sangulpi Palmar, Santa Rosita y San Agustín (Ver mapa 2).

Resguardos Indígenas Awá



Fuente: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. *Resguardos indígenas etnia Awá*. Sin fecha.

Las condiciones de servicios públicos en Tumaco son deficientes. Según datos citados en el Plan Municipal de Desarrollo, para el año 2008 la cobertura de acueducto en el municipio era sólo del 29,2% y el alcantarillado de 5,3%, a pesar de hacer parte del Plan Departamental de Agua. Para la zona urbana la mitad cuenta con el servicio de acueducto, mientras que la zona rural es casi inexistente. Por su parte, el servicio de energía eléctrica estaba presente en el año 2005 en 77,4% de las viviendas, conectado al sistema de interconexión eléctrica nacional del que sólo cuatro municipios del litoral pacífico nariñense hacen parte.

La condición educativa de la población de Tumaco presenta rezagos importantes en lo que tiene que ver con el analfabetismo, donde el 17,1% de los habitantes mayores de 15 años no saben leer y escribir. Un porcentaje similar suma la población con ningún nivel educativo, mientras que poco menos de la mitad, un 43,5% hizo sólo hasta niveles de

primaria. Una cuarta parte de la población llegó hasta el nivel de secundaria y sólo el 5% tiene estudios superiores.

La pobreza medida en Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI- de Tumaco es del 48,7%, siendo uno de los más bajos en Colombia. Sin embargo, respecto a éste indicador no hay mayores diferencias entre la zona urbana y la rural. De otro lado, la pobreza medida mediante el Índice de Pobreza Multidimensional – PI refleja un panorama más acentuado, ya que éste llega al 84,3%.

En cuanto a la economía de Tumaco en lo que tiene que ver con el sector agrícola, esta gira alrededor de dos aspectos principalmente: el cultivo de palma aceitera y el cultivo de hoja de coca. Otras actividades agrícolas de importancia en Tumaco son la caña panelera y el coco y en la parte pecuaria se destaca la pesca de camarón, el atún y peces de distinta especie, siendo esta una de los productos de exportación y abastecedor del consumo interno.

Respecto a la palma aceitera, esta cubre la mayor cantidad de hectáreas sembradas con un total en el año 2004 de 26.945, aunque esta cifra pudo haber descendido en la actualidad por efecto de la enfermedad de “pudrición del cogollo” que afectó más de la mitad de estos cultivos. El cultivo de la palma está ligado a un sector de grandes empresas y a pequeños cultivadores que es promovido como un modelo de producción desde sus inicios en los años sesenta, que recientemente adoptó la forma de alianzas productivas y es uno de los principales productos de exportación.

Ahora bien, es importante analizar esta situación en Tumaco bajo la situación en cuanto a la reducción de cultivos ilícitos en los territorios colectivos a nivel nacional, territorios colectivos que predominan en Tumaco. Según la Silla Vacía: “En la última década los cultivos de coca han disminuido de 163 mil hectáreas a las 48 mil actuales, pero no han variado demasiado dentro de los resguardos indígenas ni dentro de los consejos comunitarios. En resguardos, se han mantenido entre las 6 y 8 mil hectáreas. Y en los consejos afro ha aumentado casi todos los años desde que se comenzaron los censos en 2001, con un aumento significativo -y reciente- en Chocó.”³

Esta actividad está controlada por los grupos armados ilegales, quienes compran a los campesinos la hoja y luego la procesan para convertir en pasta de coca y cocaína en laboratorios clandestinos ubicados en la misma región. Por efecto de estas actividades ilegales, muchas personas fueron despojadas de sus tierras.

³ La Silla Vacía. <http://lasillavacia.com/historia/los-cultivos-de-coca-si-cayeron-pero-no-tanto-45362>

Además de ser el principal productor de hoja de coca, Tumaco también es el municipio con mayor cantidad de predios despojados, llegando a 8.264 según datos de la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura⁴. El factor que motivó muchos de estos despojos fue la siembra de coca por parte de los actores armados, aunque se señala que los métodos violentos de despojo fueron generados principalmente por los narcotraficantes y en segundo lugar por las empresas palmeras. Así lo enfatiza un miembro de RECOMPAS:

“En primer lugar, apoderarse de la tierra para sembrar coca, el narcotráfico fue lo más poderoso en la quitada de tierras, inmensidades, terrenos de 100 o 200 hectáreas sembradas por allá, eso no lo fomentaron tanto los poderosos ricos (empresas palmeras) sino más que todo los narcotraficantes, ellos traían sus grupos y los iban metiendo.” (Entrevista a miembro de RECOMPAS, Noviembre 19 de 2013).

Dinámicas de la seguridad y conflicto armado.

Hitos principales y sus efectos sobre la población.

Inicialmente fueron las Farc que llegaron a finales de los años noventa a Tumaco buscando consolidar un control sobre la producción de hoja de coca cuando los cultivos ilícitos se expandieron en la región del piedemonte costero. Luego, desde 1999 fueron las Auc quienes atraídos por las posibilidades de expandir el negocio del narcotráfico se instalaron en el casco urbano de Tumaco y algunos corregimientos a orillas de la vía al mar como Llorente y desde allí coordinaron la expansión hacia la costa pacífica nariñense y el aseguramiento de las rutas estratégicas por ríos, esteros y trochas.

De otra parte, el Eln tuvo una presencia reducida en Tumaco con la Compañía “Mártires de Barbacoas” y “José Toño Obando”, consistente sobretodo en tránsito por zonas de repliegue estratégico y una baja capacidad ofensiva que se ha limitado a las zonas de piedemonte al noroccidente del municipio, en corregimientos como El Rosario, Gualajo y Chagüi.

Sin embargo, a raíz de los diálogos exploratorios del Eln con el Gobierno nacional en Cuba, los líderes del Eln en diciembre de 2006 decidieron iniciar un plan de desminado unilateral en sus áreas de influencia del municipio de Samaniego y ofrecieron liberar a dos policías

⁴ Ver El Tiempo. “Los municipios con más despojo de tierras en el país”. Marzo 17 de 2012. Tomado de: <http://eltiempo.com> Recuperado el 8 de noviembre de 2013.

que habían sido retenidos en un área de Barbacoas sí el Ejército despejaba algunas zonas de la región.

Esto no fue bien recibido por las Farc, quienes respondieron duramente contra el Eln, atacando a finales del mismo mes a la Compañía “José Toño Obando” en el sitio El Azúcar de Tumaco, asesinando a 11 de sus hombres, entre ellos al cabecilla alias “José Luis”. Posteriormente se vendría una fuerte arremetida contra las áreas de control del Eln en la zona rural de Samaniego con combates que se extendieron por varias semanas durante los primeros días de enero del 2007. De esta manera se consolidó un proceso de reposicionamiento de las Farc, lo cual limitó aún más la escasa presencia del Eln en Tumaco.

Luego de la desmovilización del grupo del Bloque Libertadores del Sur de las Auc en el año 2005, el reciclaje de paramilitares en nuevas estructuras armadas es casi que inmediata, entrando en escena el grupo “Los Rastrojos”, liderado por Wilmer Varela, alias “Jabón”, quien asumió el control del casco urbano de Tumaco y consolidó un eje de operaciones sobre buena parte de la costa pacífica.

Entre los años 2006 a 2008, se evidencia un incremento significativo de la confrontación armada que se explica en la ofensiva de las Farc para recuperar los espacios dejados por las Auc, pero en el camino se encontraron con unos “Rastrojos” posicionados que limitaron dicho avance. Como resultado, las Farc deben dedicarse por un largo periodo con hacer un control sobre las áreas rurales de producción de la hoja de coca, mientras que Los Rastrojos dominan el casco urbano, los centros poblados sobre la vía al mar, sobre todo los más cercanos a Tumaco, y las desembocaduras de los principales ríos.

El dominio de “Los Rastrojos” en Tumaco ha sido muy superior al alcanzado por las Auc. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Los Refugiados - ACNUR comenta que éste grupo “se configuró como el actor armado paramilitar con más capacidad de coacción y ha llegado a alcanzar un dominio importante sobre las rutas del narcotráfico en Tumaco. Se puede afirmar que el accionar de «Los Rastrojos» en el municipio y en otras zonas de la región Pacífica ha alcanzado una magnitud similar —e incluso superior— a la que llegó a establecer el BLS (Bloque Libertadores del Sur).” (ACNUR; 2012).

En barrios de las comunas 4 y 5 del casco urbano (Zona de bajamar del occidente de la isla de Tumaco y la zona continental), el grupo armado ha logrado dictar toques de queda y controlar la entrada y salida de los barrios. Personas desconocidas no pueden transitar sin permiso de ellos y los propios habitantes tienen regulaciones horarias para entrar y salir. Una condición de confinamiento intra-urbana, según lo entiende ACNUR.

El dominio de “Los Rastrojos” se vio incluso fortalecida luego de la muerte de su máximo líder Wilber Varela alias “Jabón”, asesinado en Venezuela a comienzos del año 2008,

supuestamente asesinado con la participación de sus lugartenientes, los hermanos Javier y Luis Enrique Calle Serna alias “Comba”, quienes tomaron el dominio sobre las rutas de la organización y que posiblemente hicieron alianzas con Juan Carlos Rivera alias “06”, quien quedó al control de la organización de los denominados “Mellizos”, Manuel y Miguel Ángel Mejía Munera, muerto el primero y capturado el segundo, por la misma época.

Dicha versión se difundió al incautar un gigantesco cargamento de 7.600 kilos de cocaína a bordo de un semisumergible entre el río Mataje en junio de 2008, el cual evidenció dicha alianza para las autoridades de la Dijin. Sin embargo, dicha relación duró poco, ya que durante el año 2009 se presentan una serie de asesinatos múltiples entre los miembros de la banda que señalaban una disputa en el interior entre los hombres de alias “Comba” con los hombres de alias “06”, quien es entregado a la Policía en septiembre del año 2009 en Cali.

La influencia adquirida por “Los Rastrojos” en Tumaco también llegó hasta las instituciones de la Fuerza Pública. Militares de alto rango que fueron capturados por la Fiscalía señalados de colaborar con los líderes de la banda criminal en octubre de 2010 dan prueba de ello. En total tres oficiales y dos suboficiales del Ejército junto a un infante de la Marina, a los que se les imputan cargos de concierto para delinquir, cohecho y revelación de información confidencial por colaborar con “Los Rastrojos”, operativo llevado a cabo en la misma operación de captura en la que se aprehende a Iller Numar Trujillo Díaz alias “Apache IV”, hombre de confianza de Luis Enrique Calle Serna e incluido en el cartel de los más buscados en Tumaco⁵.

Otras bandas criminales que han hecho presencia en Tumaco son “Nueva Generación” y las “Águilas Negras”. Sobre la primera se puede establecer injerencia desde el año 2007, cuando en el mes de marzo amenazaron de muerte a diferentes organizaciones sociales entre las que se encontraban la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco y otras organizaciones de órdenes indígenas, sociales y humanitarias. Su accionar violento no se vio tan marcado en Tumaco como sí en otros municipios de cordillera como Policarpa, Cumbitara, el Rosario y Leiva.

De manera particular, su interés se manifestó en mantener los cultivos de coca impidiendo la movilización social por programas de sustitución de cultivos, para lo cual amenazó y asesinó a campesinos cultivadores de coca que protestaron para pedir programas en ese sentido y a las instituciones a favor de la labor. Sin embargo, a mediados del año 2009, algunas autoridades y organismos de derechos humanos ya

⁵ Diario del Sur. “*Caen seis militares con nexos con ‘Los Rastrojos’*” “*Aseguran a seis militares por colaborar con ‘Los Rastrojos’*”. Ediciones 10074-10080, Secs. Judicial, Págs. 8A.

hablaban de su práctico desmantelamiento y en algunas zonas se ha mencionado su integración a las “Águilas Negras”.

Sobre este último se puede indicar una presencia notable a partir del año 2009, manifestada inicialmente por la oposición que impuso la banda de “Los Rastrojos” que trató de impedir su ingreso, bajo una estrategia de señalamientos y asesinato a los miembros que recién se implantaban en la región. Uno de los primeros casos ocurrió en febrero del año 2009 y consistió en la masacre de cinco hombres que se transportaban en un bus intermunicipal, el cual es obligado a detenerse a la altura del corregimiento La Guayacana, al que se suben algunos integrantes de “Los Rastrojos” con un hombre con las manos amarradas quien señala a las cinco personas del automotor, los hacen descender del bus y los asesinan junto al señalador. La investigación de las autoridades determinó que eran personas que una semana atrás habían llegado a la región, algunos eran oriundos del Valle del Cauca y Cauca y tenían antecedentes penales.

A mediados del mismo año ya se notaba un posicionamiento de las “Águilas Negras” en Tumaco, quienes se disputaban el territorio con “Los Rastrojos” mediante combates y asesinatos de parte y parte, incluso provocan el desplazamiento de cientos de personas. Se ubican principalmente en el caso urbano y en veredas aledañas a éste en los contornos de la vía al mar, tales como Tindal y Chilvicio. Muchos de los homicidios registrados en la prensa y que se esconden bajo la delincuencia común son atribuibles a esta guerra entre las dos bandas. Entre sus prácticas estaban las de prestar servicios de sicariato como el ocurrido con el atentado hecho a la Secretaria de Educación Irma Liliana Cortés, por el que días después fue capturado el rector del Instituto Técnico Industrial Héctor Antonio Angulo, señalado de contratar a dos integrantes de las “Águilas Negras” para asesinarla debido a denuncias que la funcionaria había interpuesto ante presuntas irregularidades de contratación en la institución educativa.

Adicionalmente, el accionar de la banda criminal “Águilas Negras” estaba amparado en vínculos con autoridades judiciales y políticas, como las del Director de la Seccional Tumaco del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, Víctor Gonzalo Ojeda y un concejal, quienes suministraban información sobre operativos de la Fuerza Pública contra ellos y que fueron capturados en una de las primeras acciones en contra de éste grupo por parte de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía – DIJIN, que reportó la captura de 33 miembros más de la organización criminal el 9 de septiembre de 2009.

A nivel de las cifras del conflicto armado que proporciona la Unidad de Atención Integral y Reparación a las Víctimas – AURIV, se puede hacer una aproximación a las proporciones desbordadas que tiene el conflicto en esta parte del país. En primer lugar, impresiona el hecho que en sólo ocho años, 75.987 personas se han declarado como víctimas, es decir,

que poco menos de la mitad de los habitantes ha sufrido algún tipo de consecuencia por el conflicto armado.

Analizando la evolución de los casos año a año, se puede observar un incremento sustancial del total de víctimas a partir del año 2008, cuando la cifra superó las diez mil personas y no volvió a bajar de este nivel. En años posteriores la cantidad ha sido fluctuante, el año 2011 reportó un record de registros en 15.192 víctimas para bajar nuevamente al año siguiente (Ver cuadro 1).

El hecho victimizante que mayor incidencia ha tenido en Tumaco es el desplazamiento, en el cual 76.816 personas han tenido que dejar su hogar para irse a otro lugar en búsqueda de seguridad. Es tan grave el problema de desplazamiento que en el Plan Municipal de Desarrollo se incluye cómo el primer tema de los “Aspectos sociales” en las primeras páginas del documento. Allí, se citan datos del Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD, en las que se refiere un número muy superior de desplazados en relación a los datos aportados por UARIV, sumando las personas recibidas y las expulsadas.

Es así como en el periodo entre los años 2005 y 2011, por municipio receptor hubieron 41.692 personas desplazadas y por municipio expulsor hubieron 53.271, para un total de 94.693 personas víctimas de desplazamiento, consolidando un registro superior en más de treinta mil personas con referencia a UARIV. Tumaco es, de lejos, el municipio que genera la mayor cantidad de desplazados en Nariño y uno de los primeros en el país.

El homicidio es el hecho que afecta en segundo renglón al municipio y registró durante los ocho años un total de 1.251 víctimas directas. En términos generales se nota una leve disminución a lo largo del periodo. Si bien, luego de su punto más bajo en el año 2010 se dio un nuevo incremento los dos años siguientes, se puede decir que hubo periodos más críticos en los años siguientes a la desmovilización paramilitar del Bloque Libertadores del Sur de las Auc en 2005 mientras que la proyección del presente año es a la baja.

Los cambios que más llaman la atención están dados por la amenaza, el acto terrorista y la pérdida de bienes muebles e inmuebles, puesto que presentaron incrementos exponenciales durante los tres últimos años y de manera particular han crecido a un ritmo similar, lo cual hace pensar que posiblemente estén interconectados unos con otros.

Antes del año 2011 estos hechos eran aislados y marginales, sin pasar de 42 en un año, pero a partir de éste año se ha convertido en hechos sistemáticos de rápido aumento, los cuales, en el año 2012, sucedieron alrededor de dos diarios en promedio. En lo corrido del presente año, se proyecta una disminución, pero a pesar de esto sigue siendo una práctica sostenida.

Esto implica que se podría estar al frente de cambios notorios en la forma de operar de los grupos armados, principalmente en lo que tiene que ver con las formas de financiación, ya que se considera el aumento de estos hechos como reflejos de una mayor recurrencia a la extorsión sobre la economía legal para alimentar sus accionares violentos, hecho que conlleva amenazas contra la vida de sus víctimas para presionar el pago de dineros, atentados terroristas para generar terror contra quienes no acceden a la extorsión - cuando no el asesinato en muchas ocasiones- y abandono de los bienes por el temor y la disminuida rentabilidad que la presión violenta genera.

En razón a esta situación, a finales de 2011 la Cámara de Comercio de Tumaco afirmaba que 170 establecimientos comerciales habían cancelado la matricula mercantil para cerrar sus negocios debido a las extorsiones y la preocupación llegaba hasta la convocatoria de marchas entre los comerciantes para llamar la atención del fenómeno⁶.

Un último aspecto que llama la atención de las cifras de las víctimas del conflicto es el aumento significativo de las minas antipersonales en los años 2011 y 2012 cuando se presentaron 70 y 44 casos, mientras que en años anteriores ocurrían pocos. Igual que los anteriores hechos victimizantes, para el año actual hay una disminución, lo cual supone que durante éste corto periodo se han desarrollado dinámicas de intensificación del conflicto que vale la pena resaltar en un análisis más detallado para entender estas variaciones estadísticas.

Cuadro 1

VICTIMAS POR HECHO VICTIMIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TUMACO (2005-2012)

HECHO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	Total
Desplazamiento	2.131	3.850	5.477	9.906	14.086	11.952	14.397	9.504	5513	76816
Homicidio*	148	247	244	156	127	84	105	117	23	1251
Amenaza	7	9	12	19	20	42	262	761	265	1397
Acto terrorista	14	14	24	14	18	31	156	743	228	1242
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	3	5	10	9	19	12	178	735	68	1039
Minas Antipersonal	12	3	4	1		4	70	44	7	147

⁶ Diario del Sur. "Comerciantes no aguantan más y se lanzarán al paro". Ed. 10391, Sec. Tumaco, Pág. 7B, Septiembre 5 de 2011.

Desaparición forzada*	7	14	16	8	12	11	7	15	3	93
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes	2	5	5	2	4	5	11	6		40
Delitos contra la libertad y la integridad sexual		3	1		2	9	2	16	9	42
Secuestro*	9	4	1		6		2	3	1	26
Tortura				7			2	4		13
Total	2333	4154	5794	10122	14294	12150	15192	11948	6117	75987

Fuente: UARIV 2013. Elaboración propia.

* La cifra corresponde sólo a víctimas directas, ya que la unidad también contabiliza como víctimas indirectas a otras 2.679 personas por estos hechos (2.470 por homicidio; 205 por desaparición forzada; 4 por secuestro)

**Datos con corte a octubre 01.

En síntesis, hay toda una década de confrontación armada que ha transcurrido con el paso de varios grupos armados disputándose entre sí el control de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios de procesamiento de cocaína y las rutas fluviales de transporte de la droga hacia el Mar Pacífico.

En dicha disputa, quienes llegan más fortalecidos al final de la década son el grupo de “Los Rastrojos”, quienes lograron hacerse al dominio del casco urbano de Tumaco y las zonas bajas de los ríos con salida al mar, tales como el río Mira, el río Mataje y el río Cuanapí. Por su parte, las Farc mantienen una presencia fuerte y constante en las zonas rurales, principalmente en la parte media y alta del río Mira y en la zona más cercana al piedemonte.

Además de emplear el narcotráfico como principal fuente de financiación, recurren constantemente a la extracción de petróleo del Oleoducto Transandino y a retenes ilegales sobre la vía al mar. Sorprende durante este periodo la alta capacidad de reacomodo y rearticulación de estos grupos armados, quienes a pesar de la confrontación, entre sí y con la Fuerza Pública, no muestran señales de debilitamiento; antes más bien de continuo fortalecimiento.

Bajo este panorama entramos a la presente década, en la cual se analiza con mayor detalle los principales cambios recientes que ha tomado el conflicto. Para lograrlo, se

recurre a la base de información que se obtiene de la prensa regional Diario del Sur, consultada entre los años 2010 y 2012, así como noticias del diario El Tiempo en su versión digital y otra serie de fuentes periodísticas y analíticas de organizaciones sociales. Al igual que con los datos recogidos durante el trabajo en campo.

En un primer balance de la información recopilada se obtiene un total de 203 acciones asociadas al conflicto armado. De estos, 49 ocurrieron en el año 2010, 60 en el año 2011, 27 en el año 2012 y 65 en lo corrido hasta junio del año 2013.

En términos de los autores que llevan a cabo la acción, tenemos que en mayor medida estos se dieron por iniciativa de los diferentes organismos de la Fuerza Pública: la Policía en 55 ocasiones, el Ejército en 35, la Armada en 14 y 18 más en acciones conjuntas entre estos, algunas veces con participación de la Fiscalía.

Las Farc, con la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29, son responsables de 45 acciones, mientras que las bandas criminales participan en la iniciativa con 10 acciones, 7 de “Los Rastrojos” y 3 de las “Águilas Negras”. Una acción más es adjudicada a la delincuencia común y 23 acciones donde no es identificable el actor que la ejecuta.

Dos aspectos se resaltan de ésta primera mirada a la cantidad de acciones por cada actor: el predominio de la Fuerza Pública vista en su conjunto y la aparente participación disminuida de las bandas criminales.

La Fuerza Pública

Ahora bien, cruzando los casos en los que la Fuerza Pública ejecuta la acción frente al actor al cual va dirigida, se puede notar un cambio significativo a partir del año 2011, al pasar de centrar su atención en las bandas criminales para ponerla sobre las Farc (Ver cuadro 2). Dicho cambio obedece particularmente a una reconfiguración de la territorialidad del conflicto en el cual se ha desmantelado parcialmente a “Los Rastrojos” y las Farc han copado territorio que antes no tenían, siendo el principal de ellos, la presencia y capacidad de afectación en el casco urbano.

Cuadro 2

**ACTOR AL QUE SE DIRIGIERON LAS ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA
EN TUMACO (2010-2012)**

	Los Rastrojos	Águilas Negras	Farc	Sin Precisar	Total
2010	15	4	3	13	35
2011	6	3	15	8	32
2012	4	0	8	0	12
Total	25	7	26	21	79

Fuente: Diario del Sur

Esto trajo consigo varias reestructuraciones de la Fuerza Pública. Por parte de la Policía, desde mediados del año 2009 se había creado unidades descentralizadas de las regionales en regiones estratégicas como Tumaco y el Bajo Cauca Antioqueño para combatir zonas de confluencia de actores armados donde se estaban incrementando los indicadores delincuenciales. Para Tumaco se conformó el Comando Especial de Seguridad Ciudadana de Tumaco – COETU, el cual logra importantes avances dirigidos contra la banda “Los Rastrojos” y las “Águilas Negras”.

Este comando especial operó hasta los primeros meses del año 2011, cuando se eliminó a raíz de la puesta en marcha de la operación “Troya Pacífico II” de la Policía, estrategia del Estado para combatir las bandas criminales en zonas estratégicas del país, presentada por el propio Presidente Juan Manuel Santos en Tumaco a principios de mayo que destinó 1.500 policías y consolidó el trabajo del comando especial contra “Los Rastrojos”. Inmediatamente se puso en práctica, la Policía propinó algunas de las acciones más decididas en contra de esta banda criminal, consistente principalmente en capturas masivas a sus integrantes.

Por su parte, la Armada Nacional creó la Brigada Fluvial #4 de Infantería de Marina con sede en Tumaco para cubrir los municipios de Nariño y Cauca. Esta se planteó por el Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico Hernando Wills desde los primeros días de marzo de 2011 y finalmente se activó a partir del 23 de septiembre del mismo año, contando con un cuerpo de 1.200 hombres divididos en cuatro batallones: el Batallón Fluvial #70 que venía operando en Tumaco, el Batallón Fluvial #10 en el municipio de Guapi, un batallón aéreo y un batallón de apoyo que llegó en el mes de noviembre.

Adicionalmente, se trasladó un grupo del Gaula de la Armada para apoyar las operaciones contra la micro-extorsión ante el aumento de éstos delitos.

Los Rastrojos.

De las 25 acciones adelantadas contra “Los Rastrojos”, 18 de ellas corresponden a capturas de sus integrantes que arrojaron un total de 81 efectivos privados de la libertad. Algunas de las más significativas fue la ya mencionada de alias “Apache IV”, segundo al mando de la organización en Tumaco y con ésta se cortaron algunas redes de apoyo político y militar dentro de la institucionalidad oficial. Con la implementación del Plan “Troya Pacífico II” se da la captura simultánea de 13 miembros en Tumaco, el corregimiento Llorente y Barbacoas. Entre ellos estaba alias “Piny”, quien presuntamente había asumido el lugar de “Apache IV”. El siguiente golpe fuerte se dio en noviembre del mismo año, con la captura de 23 miembros de la banda en un operativo simultaneo en los municipios de Ipiales, Policarpa y Tumaco, de las cuales 14 se llevaron a cabo en este último, y más tarde, en abril del año 2012, se ejecuta otra captura masiva de 13 delincuentes.

Hasta el momento, la acción de “Los Rastrojos” mostraba señales de acomodo a la presencia de la fuerza pública intentado evitar confrontaciones directas, pero la arremetida de la Policía contra “Los Rastrojos” a raíz de la Operación “Troya Pacífico II” provocó una estrategia de mayor accionar bélico de la banda contra la Fuerza Pública, la cual recurrió a tácticas de atentados con explosivos sobre la vía al mar como el intento frustrado en marzo de 2011 en el que el Batallón de Combate Terrestre #53 ubicó y destruyó cuatro cilindros bomba que iban a ser detonados a su paso cerca al corregimiento La Guayacana, así como también la emboscada sufrida por la Policía Antinarcóticos en septiembre del mismo año cuando custodiaba la labor de erradicadores manuales de coca en el mismo sector, el cual fue repelido exitosamente, dando de baja a tres de los atacantes e hiriendo a dos más. Como se mostró en éste último hecho, la ineficiencia de la táctica militar es una razón para suponer el poco interés para desarrollar acciones directas contra la Fuerza Pública.

La serie de capturas contra “Los Rastrojos”, debilitó pero no desmanteló a la banda, antecedió la entrega a las autoridades estadounidenses en Aruba y Panamá de los máximos jefes de la organización Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna alias “Comba” en mayo y octubre del año 2012 respectivamente, así como la captura en Venezuela de uno de sus principales socios, Diego Pérez Henao alias “Diego Rastrojo” en junio del mismo año. Sin lugar a dudas, la presión ejercida en la Operación “Troya II” fue

fundamental, por lo menos para cortar conexión de estos cabecillas con quienes administraban las organizaciones localmente.

Los resultados contra la banda no fueron definitivos y posterior a esto se registraron nuevos hechos de menor envergadura. Sin embargo, en el fondo se estaría fomentando actualmente una reconfiguración con la entrada de la banda criminal de “Los Urabeños”. Su ingreso no se ha manifestado de una forma tan violenta en Tumaco como cuando lo hicieron las “Águilas Negras”, ya que ésta fue aparentemente negociada por los líderes locales de “Los Rastrojos” mientras los hermanos “Comba” preparaban su entrega a la justicia. Fuentes de El Tiempo señalaban en mayo del año 2012 que se habría producido una negociación con Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” por las rutas del narcotráfico de Tumaco⁷ y un año después analistas como Jorge Restrepo, según el mismo diario, afirmaba que la banda estaría absorbiendo algunas rutas y miembros de las Farc mediante dinero y dotación de armas⁸, aunque es posible que se estén dando formas de alianzas criminales para desestabilizar el escaso control territorial del Estado.

Las Águilas Negras

Una dinámica similar ocurre con los miembros de la banda criminal de las “Águilas Negras” en Tumaco. Todas las acciones de la Fuerza Pública dirigidas contra ellos consistieron en capturas de sus integrantes, la mayoría adelantadas en el casco urbano. De manera particular, en varios de los casos estas se efectuaban en momentos en que recibían pagos de extorsiones a comerciantes de la ciudad.

Varios de estos se dedicaban al moto-taxismo, lo cual ayuda a entender la alta cantidad de trabajadores de dicho “gremio” que son asesinados en Tumaco. Aparentemente una de las estrategias de las “Águilas Negras” para obtener información de la dinámica de la ciudad, cobrar el dinero de las extorsiones y manejar el micro-tráfico de estupefacientes se dio a través de personas que se vinculaban a la labor. Vale la pena resaltar que las últimas acciones adelantadas por o contra la banda se registraron hasta agosto del año 2011. En la actualidad parece haberse desmantelado totalmente esta agrupación. “Volaron” de Tumaco. A pesar de no haber operado con estructuras jerárquicas de manera visible que hayan sido subsumidos a la justicia o desaparecidos, la pretensión de las “Águilas Negras” por disputar el territorio a “Los Rastrojos” sucumbió ante la presión que desde un principio ésta le opuso.

⁷ El Tiempo. “Mientras los “Comba” se entregaban, sus hombres negociaban narcorutas”. Mayo 9 de 2012. Tomado de: <http://eltiempo.com> Recuperado el 13 de septiembre de 2013.

⁸ El Tiempo. “Los ‘Urabeños’ absorben rutas y hombres de las Farc”. Mayo 18 de 2013. Tomado de: <http://eltiempo.com> Recuperado el 13 de septiembre de 2013.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Contraria a la dinámica de las bandas criminales ha sido la de las Farc. Si bien la Fuerza Pública sólo a partir del año 2011 vuelve a centrar su atención en avanzar contra la organización subversiva, según los datos vistos anteriormente en el cuadro 2, esta situación responde en buena medida a que las Farc han logrado extender su presencia en territorios del municipio donde antes no la tenían, principalmente el casco urbano.

De las 29 acciones registradas como ejecutadas por parte de las Farc, dos corresponden al año 2010, quince al año 2011 y diez al año 2012, lo cual muestra el notable aumento de su capacidad ofensiva en la época reciente. El declive de “Los Rastrojos” es un marco de oportunidad para el despliegue de la guerrilla, pero también el conocimiento del territorio más una importante destreza táctica militar le ha significado asestar duros golpes a la Policía y al Ejército en los últimos años en Tumaco.

Durante el año 2010 hasta junio de 2011, las acciones de la Fuerza Pública contra la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29 de las Farc consistieron en destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína y destrucción de refinerías clandestinas para procesamiento de crudo. Todas estas fueron llevadas a cabo por el Batallón de Combate Terrestre #113 y el Batallón de Selva #53 en zonas rurales. De manera particular, todas las refinerías clandestinas estaban ubicadas en el corregimiento La Guayacana. También hay algunas incautaciones poco relevantes por parte de la Policía de armas y droga. Durante ese mismo periodo de tiempo hay acciones esporádicas de las Farc que consisten básicamente en ataques contra la Policía, algunos desarrollados a manera de emboscada sobre la vía al mar y otros atentados con explosivos contra la Estación Policial del corregimiento Llorente y la base militar de coordinación de erradicaciones de coca en la vereda Gualtal.

A partir de junio de 2011, se emprende la ofensiva de las Farc dirigida a copar territorios hacia el casco urbano y frenar el avance de las erradicaciones manuales de cultivos de coca. Este periodo marca los mayores reveses estratégicos por parte de la Fuerza Pública. Entre agosto y septiembre, las Farc emboscan en 3 ocasiones a patrullas de la Policía Antinarcóticos que apoyaban labores de erradicación en inmediaciones del resguardo Inda Sabaleta, en la vereda el Guayabo y el corregimiento La Guayacana, provocando la muerte de once uniformados e hiriendo a ocho más. También los militares sufrieron duros golpes, siendo emboscados cuando pernoctaban en inmediaciones a la planta palmera de Astorga en la vereda Tangaral, provocando la muerte de diez integrantes del Batallón de Selva #53 e hiriendo a otros seis, hecho sucedido a finales de octubre. Adicionalmente hay un incremento en las minas antipersonales. Sitio estratégicos son minados para impedir el avance de las autoridades. Varios civiles y militares perecen en estas trampas mortales.

La presencia en el casco urbano comienza a manifestarse desde agosto del año 2011. Las primeras acciones registradas corresponden a ataques terroristas con granadas que son lanzadas contra patrullas motorizadas de la Policía y establecimientos comerciales. Así mismo las primeras acciones de la Fuerza Pública contra las Farc en el casco urbano se dan en septiembre del mismo año.

El volumen de las capturas da cuenta de la entrada frontal de milicianos a la ciudad. En una de ellas fueron aprehendidos ocho subversivos, entre los cuales estaba uno sindicado del ataque con granada contra la patrulla de la Policía. Un aspecto no confirmado que se desprende de estas capturas, es la posibilidad que antiguos miembros de las “Águilas Negras” hayan pasado a ser parte de las milicias de las Farc, ya que aparentemente algunos de los capturados se hacían pasar por integrantes de la banda criminal para acometer extorsiones, pero además, en meses anteriores habían sido capturados cuatro hombres que se movilizaban en un taxi repartiendo revistas alusivas a las Farc pero eran presentados como “Águilas Negras”.

El año 2012 refleja la consolidación de las Farc en el puerto de Tumaco con acciones de gran envergadura dirigidas al corazón de la Fuerza Pública. La madrugada de año nuevo fue recibida con un atentado fallido contra la base de la Cuarta Brigada de la Infantería de Marina en la Isla El Morro, lanzando 3 cilindros bomba, que no dieron en su objetivo inicial, pero si afectó una vivienda aledaña del barrio Florida y la pista del aeropuerto. Quince días después, fue detonada una carga explosiva de alto poder que estaba dirigida contra la Policía utilizando un maletín abandonado en un andén del barrio Viento Libre. Nuevamente el atentado fue fallido por un error al momento de activar la carga, ya que detonó segundos después de que pasara una patrulla antiexplosivos de la Policía que había sido advertida del sospechoso maletín.

Sin embargo, el resultado de estos hechos no fue sino “señales” que las Farc persistirían en afectar duramente a la Fuerza Pública y dejar un claro mensaje de haber tomado control en la ciudad. El “mensaje” se consumió el 1 de febrero con el estallido de una moto-bomba cargada con 50 kilos de pentolita contra la Estación de Policía de Tumaco en el centro de la ciudad. La explosión causó la muerte a 9 personas entre policías y civiles y provocó heridas a 79 personas, así como cuantiosos daños materiales en varias cuadras a la redonda que se contabilizaron en cerca de \$5 mil millones.

El hecho generó la reacción de autoridades nacionales, el aumentó el pie de fuerza con la presencia de la Fuerza de Tarea Pegaso y el trasladó el buque ARC 20 de Julio al municipio, se ofrecieron millonarias recompensas por los cabecillas “Oliver”, “Rambo” y “El Doctor” de las Farc, se señaló una presunta alianza con “Los Rastrojos” para cometer el atentado aunque sólo las Farc reconoció el hecho, se hicieron llamados de la comunidad

internacional en rechazo al terrorismo de parte de la ONU y Human Right Watch, la sociedad se movilizó enérgicamente para solicitar la paz en el municipio.

Aunque las autoridades insistentemente señalaban la acción como una retaliación de la guerrilla y las bandas criminales por golpes dados a la estructura financiera por los decomisos de droga e insumos, la información recopilada muestra que solamente en el pasado diciembre se había dado la destrucción de dos cocinas artesanales para procesamiento de cocaína en las veredas La Hondita y La Milagrosa donde sólo se hallaron insumos líquidos. Más bien, es la fragilidad del Estado para contener el avance de las Farc lo que explica en mayor medida la serie de ataques que ésta desarrolló para notar su presencia en el casco urbano.

En los seis meses siguientes al atentado la actividad de las Farc declinó notoriamente. El repliegue para aguardar la ofensiva que se podría venir luego de tan despampanante evento era apenas comprensible. Sin embargo, la respuesta de la Fuerza Pública no fue contundente. Sólo hasta el mes de junio del mismo año se logró la captura de un presunto implicado de dejar la moto-bomba usada para el atentado. Algunas otras capturas se dieron en el casco urbano y La Guayacana, pero ninguna de alta importancia.

Por su parte las Farc regresaron al “ruedo” en octubre con una ofensiva dirigida a tomar el control del corregimiento La Espriella. Decretaron un paro armado en la población impidiendo abrir los negocios durante varios días. Detonaron algunos petardos para amedrentar a la población que no acató la advertencia e intentaron detonar un carro-bomba contra la Fuerza Pública, el cual fue desactivado por la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército y el Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía. Finalmente atacaron la Subestación de Policía del corregimiento, pero este fue repelido. A pesar que no lograron desplazar a la Policía ni causarle mayores daños, la prolongación del paro armado durante cerca de un mes da muestra evidente del posicionamiento territorial que las Farc han logrado obtener en sitio estratégicos durante los últimos tiempos en la zona urbana y rural de Tumaco.

Durante el año 2013 las Farc han continuado la arremetida en el casco urbano de Tumaco y la estrategia se ha mantenido en atentar con explosivos las sedes institucionales del municipio, ahora no sólo las militares sino también las productivas y administrativas. Es así como a comienzos de marzo se detonó un carro bomba muy cerca de la sede de Ecopetrol, que está ubicada a la entrada de la ciudad, en la zona continental. La explosión no causó daños a la sede pero sí afectó algunas viviendas aledañas del barrio Nuevo Milenio. Ese mismo día, dos cilindros bomba fueron lanzados contra la base de la Infantería de Marina en la Isla El Morro, aunque la afectación sólo fue a las mallas de contención perimetrales. Posteriormente, a mediados de abril una nueva oleada terrorista

se llevó a cabo con granadas de fragmentación lanzadas al CAI del barrio La Ciudadela, a la base antinarcóticos del Ejército que está ubicado al interior del aeropuerto y se desactivaron dos cargas explosivas que fueron dejadas en horas de la madrugada junto a las sedes de la Fiscalía Seccional y la Alcaldía Municipal.

En el mismo sentido de desestabilización a la institucionalidad local, otra de las estrategias que han tomado fuerza en el último año es el derribamiento de torres de conducción de energía eléctrica. Anteriormente, esta actividad estuvo ligada a interferir en el desarrollo de actividades precisas como las elecciones y las visitas de autoridades políticas al municipio. Ahora se llevan a cabo en cualquier momento del año y se busca simplemente dejar sin energía eléctrica a la ciudad. Recientemente, en octubre del presente año 2013, fueron derribadas 8 torres de energía, lo cual dejó a la población sin luz durante 20 días.

Otra actividad que parece ir en aumento durante éste año es la extracción de petróleo del Oleoducto Transandino. No más en el mes de abril se logró el hallazgo de una de las refinerías más grandes y mimetizadas ubicadas hasta el momento en Tumaco, cuando el Ejército ubicó un complejo de aproximadamente 600 m², que contenía 4 pozos con 64.000 barriles de petróleo a cuatro metros de profundidad bajo la tierra y el cual era refinado artesanalmente para producir gasolina y acpm. En ese momento se hablaba de 30 refinerías destruidas en lo corrido del año, muy por encima comparativamente de las 60 que presuntamente se habrían hallado en el año 2012.

En definitiva, el escenario de actores armados que se observa en Tumaco en los últimos cuatro años es un arrinconamiento de las instituciones militares y políticas ante la ofensiva de las Farc, quienes han aprovechado el espacio dejado por el debilitamiento progresivo de la banda criminal “Los Rastrojos” para posicionarse territorialmente en zonas rurales y urbanas a las cuales no tenía acceso mientras estos dominaban. La estrategia ha sido clara: hacer volar por los aires el corazón de las instituciones locales a toda costa, sin mayores consideraciones sobre los efectos perversos de ésta estrategia, en términos de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Al ser zonas de iniciativa en la confrontación, Tumaco es en la actualidad “vitrina” para mostrar el poderío político y militar de las Farc.

Si en algunas regiones del país se ha constatado la reducción de acciones militares a raíz del inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana (Cuba), en Nariño y especialmente en Tumaco estas no se han reducido de la misma manera. Con lo que está ocurriendo actualmente en Tumaco con la Columna Móvil Daniel Aldana y en general con el Frente 29 y el Bloque Sur de las Farc, surge la preocupación de la alineación que localmente se dé con los acuerdos de paz que puedan surgir. El Secretario de Gobierno de Nariño, José Rodríguez, manifestó recientemente que el Bloque

Sur “aún no ha hecho pública su postura frente al desarrollo de las conversaciones en Cuba” y menciona el rumor de posibles disidencias⁹, que a juzgar por los hechos, puede manejarse como una hipótesis que con el tiempo se definirá.

Dinámicas de la protesta social y del movimiento social. Línea de tiempo de hitos asociados con la violencia colectiva en el territorio.

Hitos principales y sus efectos sobre la dinámica de violencia colectiva.

Movilizaciones por la Paz.

La movilización social en Tumaco en buena medida se define por la dinámica del conflicto armado, social y político que se vive en el municipio. Responde por lo tanto a momentos álgidos de la confrontación donde la población civil es la directamente afectada. Se basa fundamentalmente en marchas que recorren las principales calles de la ciudad. El número de participantes depende del impacto del hecho que se vaya a rechazar. En ellas participan todo tipo de personas sin distinciones de ninguna clase. Por lo general son acompañadas por el conjunto de la institucionalidad local y en los casos de mayor impacto la acompañan los representantes de la institucionalidad departamental.

Durante el periodo de tiempo entre los años 2010 y 2012 se presentaron nueve movilizaciones de esta naturaleza. La primera de ellas se dio en septiembre del año 2010 a raíz del asesinato de un joven estudiante de administración pública en un atentado sicarial en la ciudad. Aunque el atentado iba dirigido contra otra persona, este pereció en el hecho de manera indiscriminada. A su entierro asistieron un gran número de personas, que alentados por la Diócesis de Tumaco, acompañaron las honras fúnebres con carteles y arengas solicitando el cese del accionar violento y la acogencia de planes de vida ofrecido por las instituciones. A los pocos días, en el marco de la Semana por la Paz, la sociedad se manifestó nuevamente con una marcha, portando camisetas y banderas blancas, pidiendo la reconciliación. Así mismo se exhibió la denominada “Galería de la memoria” en el Parque Nariño, donde uno de las fotos centrales era el estudiante recién asesinado.

⁹ HBS Noticias. “Bloque Sur de las Farc sería obstáculo para la paz en Nariño”. Noviembre 8 de 2013. Tomado de <http://hsbnoticias.com> Recuperado el 9 de noviembre de 2013.

Sólo dos meses después la ciudadanía tumaqueña volvió a convocarse en las calles para realizar una marcha con un motivo similar. En esta ocasión el evento propiciador fue el secuestro del exalcalde de Tumaco, Nilo Del Castillo y su esposa Gioconda Segovia. Cerca de 2.000 personas participaron de la actividad y al finalizar se celebró una eucaristía presidida por el Obispo de Tumaco, Monseñor Gustavo Girón.

En junio del siguiente año, la violencia homicida se manifestó en las instalaciones del Sena y produjo la muerte de un vigilante de la institución, para lo cual se manifestaron sus estudiantes con una nueva marcha. En esa misma semana, unos sicarios atacaron de muerte al rector de la Institución Educativa “Faustino Arias Reinel” del corregimiento La Guayacana, presuntamente ultimado por una extorsión que no quiso pagar. Esto generó la indignación del Sindicato Municipal de Maestros de Tumaco y la sociedad en general, quienes se movilizaron en una marcha que contó con la participación de unas 2.000 personas. Los docentes amenazaron con parar sus actividades y enviaron una misiva al Presidente Juan Manuel Santos, solicitando mayor atención a su gremio, en un contexto en el que varios más estaban siendo amenazados.

La serie de sucesos acontecidos y el contexto general que se vivía en ese momento, llevó a que las instituciones públicas y privadas de Tumaco tomaran la iniciativa de convocar a una nueva marcha en agosto para manifestar el rechazo a la violencia. Inicialmente la convocatoria se hizo a nivel local desde la Iglesia Católica, la Alcaldía, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los medios de comunicación y las Fuerzas Militares, obteniendo una respuesta positiva de la comunidad que salió a las calles.

Seguidamente fue la Gobernación de Nariño y candidatos a la misma, que aprovecharon la oportunidad para arroparse en la sociedad movilizada contra el principal problema de Tumaco, la violencia, y exigir un “paquete de soluciones” al Gobierno Nacional, obteniendo una multitudinaria acogida que desbordó todas las marchas realizadas hasta el momento, con cerca de 30.000 participantes.

Indiscutidamente, la bomba en la Estación de Policía en febrero del año 2012 estimuló una nueva marcha en rechazo a la violencia. En ella participaron cerca de 10.000 personas y contó con la presencia del Gobernador de Nariño, el Obispo de la Diócesis, El Defensor Regional del Pueblo y el Comandante de la Regional Cuatro de Policía. En esta ocasión el tradicional recorrido tuvo una modificación especial: pasar por enfrente del lugar del atentado terrorista. Mensajes de apoyo de organismos de cooperación internacional y gobiernos extranjeros se hicieron escuchar en la marcha.

Finalmente, en junio de ese mismo año, la Alcaldía Municipal organizó una manifestación por las calles de la ciudad en contra del conflicto. La ocasión se justificó en los atentados a

unas torres de energía por parte de las Farc, que dejaron a la ciudad por cerca de diez días sin el servicio. Sin embargo, en esta oportunidad se hizo notorio un poco de uso político de la marcha. El Alcalde se quejó de la baja participación de la gente. No era para menos, sí desde el momento de la bomba en febrero, la dinámica del conflicto había entrado en una especie de apaciguamiento, ante el repliegue de las Farc por la respuesta que se viniera por parte de la Fuerza Pública. Respuesta que, además, fue muy débil.

Toda esta serie de movilizaciones se inscriben dentro de lo que se podría denominar acciones para la paz. Si bien algunas organizaciones son importantes a la hora de convocarlas y apoyarlas -tales como la Diócesis de Tumaco y la administración municipal-, es la propia ciudadana la principal protagonista de éstas.

En ese sentido, su desarrollo es paparentemente circunstancial. No obedece a una práctica prolongada y sistemática, sino más bien a las pasiones que despierta determinado hecho de violencia, o la *“desesperación”*, para ponerlo en palabras de cómo se denominó una de las iniciativas. Claro está que convocar y participar de ellas, de alguna manera genera réditos políticos, pero emplearla con ese fin, sin tener un detonante que la motive, no logra la participación social masiva, y por lo tanto, sus objetivos sucumben.

Ahora bien, se identifica en Tumaco otro tipo de movilizaciones relacionada con el conflicto, pero en cuyo centro no está el tema de la paz sino el de condiciones dignas de vida. Se podría decir que tiene una relación *“indirecta”* con el conflicto. La cabecera municipal de Tumaco es lugar de llegada de un gran número de personas en situación de desplazamiento de las zonas rurales del municipio, pero también de otros municipios de la costa pacífica. En ocasiones se trata de grupos de personas que no cuentan con recursos para pagar un arriendo y por lo tanto llevan a cabo la invasión de predios urbanos desocupados y exigen a la administración municipal que se les sean adjudicados. Esta situación se presenta, por ejemplo, en un asentamiento que se bautizó como *“12 de octubre”* por parte de unas 50 familias.

Movilización cívica urbana.

De igual manera, hay movilizaciones por el tema del déficit de vivienda a raíz de que algunos barrios se han tenido que desalojar por orden judicial, al estar en terrenos de bajamar con alto riesgo de emergencias por tsunamis. De allí que habitantes del barrio Brisas del Aeropuerto, generaron en junio del año 2010, la toma de la pista del aeropuerto para presionar a la Dirección General Marítima – DIMAR, que entregara un lote del barrio La Ciudadela para ser reubicados en un nuevo proyecto de vivienda con subsidios que en años anteriores había entregado el Gobierno Nacional y estaban a punto de vencerse por la dilatación de DIMAR para cederlo.

Asociado a los problemas de vivienda están los de servicios públicos. De manera esporádica, los habitantes de determinados barrios como Los Ángeles y California y zonas rurales como las veredas del río Mira han tomado acciones para reclamar ser incluidos en proyectos de electrificación o pedir mejoras en la prestación del servicio. La modalidad de acción específica para dichas reclamaciones es el bloqueo de vías en donde participan grupos medianos de unas 100 o 200 personas.

En Tumaco la movilización por los servicios públicos tiene una fuerte tradición y responde en parte al abandono en el que el Estado central ha dejado a la población y a la falta de voluntad de gobiernos locales para desarrollar políticas decididas de ampliar las coberturas de servicios básicos. Vale la pena recordar el llamado “*Tumacazo*” en 1988, en la que se conformó un fuerte movimiento social denominado el “Comité Cívico” que impulsó la construcción del acueducto y la interconexión eléctrica nacional oponiéndose a la clase dirigente tradicional del municipio y logrando ganar un espacio importante en la ciudadanía local (Oviedo; 2009).

Movilización por el territorio.

Cambiando la mirada hacia los sectores productivos de Tumaco como es el de la palma aceitera, se encuentra con movilizaciones sociales significativas que ponen de presente una de las mayores crisis sufridas en Tumaco en los últimos tiempos: la pérdida de miles de hectáreas de palma aceitera por una enfermedad reconocida como “pudrición del cogollo” o “PC”. La enfermedad dejó a su paso una gran cantidad de plantas enfermas que debían ser reemplazadas por nuevas plántulas de una nueva variedad resistente a ésta que la Federación de Palma – FEDEPALMA desarrolló en investigaciones científicas.

Para ello aportaban 60% el Gobierno y 40% las empresas palmeras. Se debía contratar a personas que erradicaran manualmente cada palma y el gobierno a través del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA lo hizo con una empresa privada. Esto generó la reacción de los pequeños cultivadores, quienes solicitaban que la labor se hiciera por ellos mismos. Además, está presente la molestia por la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito que afecta también los cultivos lícitos de palma y la falta de socialización de la federación sobre los resultados de los estudios sobre la enfermedad “PC”.

En razón a la situación, un grupo de por lo menos 3.000 cultivadores de palma salen a bloquear la vía al mar durante dos días a finales de noviembre del año 2011. El bloqueo se produce a la altura de la vereda Tangaral, en donde funciona la empresa Astorga. La protesta se levanta el acordar una mesa de trabajo con funcionarios del Gobierno Nacional, el ICA y FEDEPALMA, en donde se acuerda un reencuentro el 6 de diciembre con

la participación, además, del INCODER y las empresas palmeras. Para ese día, la discusión no logró acuerdos sobre el valor a pagar por cada palma enferma erradicada. Mientras los cultivadores exigían un valor de \$15 mil, al gobierno este monto le parecía excesivo, ante lo cual los palmicultores se levantaron de la mesa y fueron directamente a bloquear nuevamente la vía al mar.

El conflicto por los cultivos de la palma aceitera también va más allá. En su seno, están planteados muchos casos de despojo de tierras promovidas por las empresas palmicultoras para extender sus cultivos en territorios adjudicados a los consejos comunitarios de comunidades negras. Despojos que fueron llevados a cabo mediante métodos violentos y no violentos. Ante esto, algunos consejos comunitarios han fortalecido su proceso organizativo para entablar acciones legales solicitando la devolución de las tierras. Al respecto dice uno de los miembros de RECOMPAS:

“Aquí en Colombia está claro que el conflicto es debido a la tierra. Aquí en Tumaco que apsa: las grandes compañías, digamos así, las palmeras, cuando llegan a un territorio no vienen solas, vienen con todo. Compañías que compran éste predio y necesitan expandirse, lo llaman al dueño y le ofrecen por el predio, y sí él dice ‘no quiero’ o ‘no vendo’, a los pocos días están negociando con la viuda. Así de sencillo, eso se dio ahora en Aguaclara y el corregimiento de Llorente. Vienen acompañados de grupos armados o se alían con los que hay en la zona.” (Entrevista a miembro 1 de RECOMPAS, Noviembre 18 de 2013).

Actualmente, uno de los conflictos más importantes está entablado entre el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera con la empresa Palmas de Tumaco S.A., ya que ésta última fue favorecida con la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco para desalojar tierras que son habitadas por las comunidades negras. Sin embargo, posteriormente, en noviembre del año 2012, el Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras suspendió dicha acción y cualquier otra acción judicial sobre las 46.000 hectáreas del consejo comunitario, solicitando al INCODER hacer claridad sobre los linderos de la tierra perteneciente a ambas partes¹⁰. Adicionalmente, se ha logrado ganar un pleito contra la empresa Palmeiras S.A. por 800 hectáreas que se encontraban al interior del Concejo.

Un inconveniente más al que enfrentan los cultivadores de palma aceitera y otros productos tiene que ver con las fumigaciones aéreas con glifosato que también destruyen sus cultivos lícitos. No es comprensible por ejemplo, como de manera incongruente se llevan a cabo fumigaciones aéreas sobre territorios que hacen parte de procesos de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos dentro de programas adelantados por el

¹⁰ Ver: Comunicado de prensa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura “*Juez dicta medida cautelar histórica a favor de las comunidades negras del Pacífico*”. Bogotá, 14 de noviembre de 2012.

Gobierno Departamental de Nariño como el denominado “Si Se Puede” y apoyados por la cooperación internacional de los planes ADAM y MIDAS, programas que además son reconocidos como casos exitosos por las organizaciones sociales y agencia multilaterales, tales como el desarrollado a partir del año 2011 en el Consejo Comunitario Rescate-Las Varas (RECOMPAS).

Al respecto de la situación de fumigación a los programas de sustitución voluntaria afirma lo siguiente uno de los dirigentes de RECOMPAS:

“Aquí llevamos 12 años recibiendo fumigaciones y según estadísticas, la coca no merma. Nosotros en los 3 Concejos Comunitarios (Las Varas, Rio Gualajo y Gran Rosario) hemos logrado reducir la coca. En Las Varas, con el ‘Si Se Puede’, estuvo hasta Navarro Wolff (Gobernador de Nariño 2008-2011) porque no pueden ser políticas de Gobierno sino de Estado. Vea Las Varas, iban bien, un 99% casi de la coca que tenían en el territorio la gente salió de eso. Terminó Navarro Wolff su periodo, se fue al cooperación y quedo la gente abandonada, sin asistencia técnica; hubo mucha gente que volvió a sembrar (coca).” (Entrevista a dirigente de RECOMPAS, Noviembre 19 de 2013).

Movilización por la minería.

Por último, uno de los conflictos recientes que ha llevado a la movilización social de las comunidades indígenas es la explotación minera en sus territorios. La minería no es una actividad extendida en el municipio de Tumaco. Sólo tres minas existen en el municipio sin cumplir con todos los requisitos de ley, más otras explotaciones de material de arrastre. Sin embargo, el gremio minero ha comenzado a plantear en el año 2012, la necesidad de asociarse para solicitar nuevos títulos mineros. Es así como conformaron una mesa de trabajo con el apoyo de la Oficina del Pacífico y de allí se desprendió una hoja de ruta donde se establecieron las acciones a seguir para incorporar otras entidades al propósito de ampliar la explotación minera en Tumaco. Se establece, por ejemplo, solicitar al Gobierno Nacional la reducción de trámites necesarios para legalizar una mina.

Pocos días después, se hace el cierre negociado de 20 minas como una aparente medida para presionar el otorgamiento de títulos mineros al Gobierno Nacional y posteriormente solicitar la licencia ambiental. Los propietarios y la Secretaría de Gobierno firman actas de acuerdo para clausurarlas, aunque estas contemplan excepciones en la medida de la necesidad de material para las obras públicas del municipio, es decir, se trataba de cierres parciales y ambiguos que no afectaran totalmente a los comerciantes y propietarios mineros.

Por esos mismos días, la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA denuncia en un comunicado el asesinato de dos miembros de la organización ocurrido por sicarios en el corregimiento Llorente. Allí culpabilizan del hecho a los grupos armados ilegales y las empresas mineras, ya que estos venían adelantando una serie de denuncias por el daño ambiental que la actividad estaba provocando en sus territorios.

Este contexto ha sido el detonante para que la comunidad indígena Awá lleva a cabo acciones de movilización en contra de las empresas mineras. Un grupo de miembros de la comunidad de Peña Caraño del resguardo Hojal La Turbia, de Tumaco, desalojaron la maquinaria de la empresa minera "La Esperanza" que realizaba explotación de oro de aluvión sobre el río Mayasquer.

Para UNIPA, la actividad de la minería, aparte de destruir los territorios estaba adelantando estrategias en la comunidad para ponerla en contra de la organización indígena, lo que motivó a adelantar un proceso para hacer retirar la explotación en ese sitio. Uno de los impactos sociales es descrito por uno de los dirigentes de UNIPA así:

“Hubo fractura del tejido social, trataron de colocar en contra a la comunidad con la organización. Una de las ventajas (estrategias) de ellos era que les daban un mercado de alimentación, entonces a las 30 o 40 familias que estaban allá (comunidad Peña Caraño), les daban remesas de \$500 mil mensuales y sí estaban enfermos les ponían todo. Esa era una forma de mantener a la gente contenta mientras ellos sacaban el oro, y más, el daño ambiental. Entonces empezaron a presionar duro a la gente ‘que la UNIPA nunca viene por acá’ ‘la UNIPA no les da esto’.” (Entrevista a Dirigente de UNIPA, El Diviso, Noviembre 19 de 2013).

La empresa operaba desde inicios del año 2009 y en agosto de 2011, en una asamblea, la organización indígena había advertido a su representante legal que debían retirarse del territorio indígena. Dicha asamblea se llevó a cabo con dirigentes indígenas, autoridades municipales, líderes comunitarios, la Defensoría del Pueblo, la Federación del Centro Awá de Ecuador y la comunidad del resguardo, donde los representantes de la empresa habrían prometido desalojar en un plazo de dos meses, el cual no se cumplió. Así lo relata el dirigente de UNIPA:

“Nosotros (UNIPA) le metimos duro la mano a eso, hablamos con el propietario de la mina, el señor muy terco, muy necio, no quería entender. Entonces a lo último convocamos a una audiencia pública donde estuvo un Fiscal delegado para el tema ambiental a nivel nacional y estuvieron muchas instituciones: Corponariño, el Ministerio de Ambiente, etc. Ya se iban a cumplir 3 años y desde unos días antes veníamos planificando toda la acción, en el marco de nuestra autonomía, como lo confiere la constitución, el artículo 46: las

autoridades indígenas... estamos dentro de nuestro territorio y podemos hacer justicia dentro de nuestro territorio. Hicimos eso, se las retiró el día de la audiencia, mientras estábamos denunciando y no pasaba nada, la Guardia (Indígena) estaba adentro desalojando todo eso.” (Entrevista a Dirigente de UNIPA, El Diviso, Noviembre 19 de 2013).

Aseguraban los indígenas que los representantes de la empresa los habían amenazado posteriormente de irlos acabando uno por uno. Las acciones de denuncia y presión por parte de los grupos indígenas han continuado, por ejemplo, en el resguardo Gran Rosario, donde se impidió el paso de dos máquinas retroexcavadoras que iban pasando por el territorio.

Se evidencia entonces, un conflicto reciente que en un futuro cercano puede generar nuevas movilizaciones sociales, así como también situaciones de violencia colectiva. Aparentemente, la administración local y algunas entidades del orden departamental, son partidarias de fortalecer la explotación minera en Tumaco. Sin embargo, las comunidades indígenas, con un proceso organizativo fuerte en la UNIPA, se oponen al desarrollo de la actividad. Las decisiones que tomen la Agencia Nacional Minera y las corporaciones ambientales son decisorias para definir éste conflicto. Se necesita concertar con las comunidades indígenas inicialmente para establecer las condiciones de otorgamiento de títulos mineros y establecer controles efectivos para impedir explotaciones ilegales.

Actores protagónicos asociados.

Unidad de Pueblo Awá – UNIPA

En el municipio de Tumaco se encuentra el proceso organizativo de la población indígena Awá, expresada en la organización Unidad del Pueblo Awá – UNIPA, proceso de comunidades que trabaja desde el año 1985, inicialmente con el nombre Proyecto Awá y posteriormente en 1995 tomando su nombre actual. Un trabajo que inició con el influjo de la Federación de Centros Awá del Ecuador-FECADE, el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y la Diócesis de Tumaco. Una de las principales motivaciones para organizarse estuvo dada por la invasión de tierras de las empresas palmicultoras.

UNIPA integra a cerca de 26.000 indígenas de la etnia Awá, pertenecientes a 26 resguardos indígenas de los municipios de Barbacoas (12 resguardos), Tumaco (14 resguardos), Roberto Payán (1 resguardo) y Samaniego (1 resguardo). En total, el territorio cobijado bajo la organización es de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados.

La estructura organizacional de UNIPA está conformada por 14 consejerías que corresponden a los puestos directivos y los encargados de los programas en los que trabaja la organización. Estos son los consejeros directivos: Consejero Mayor, Consejero Secretario General, Consejero de Planeación, Consejero Fiscal y Consejero Administrativo. Por su parte, los consejeros de los programas son: Consejería de Salud, Consejería de Educación, Consejería de Niñez y Juventud, Consejería de Mujer y Familia, Consejería de Economía y Producción, Consejería de Organización y Territorio, Consejería de Comunicaciones, Consejería de la Guardia Indígena y Consejería Binacional.

Entre los logros para mencionar de la organización se encuentran la legalización del territorio, la elaboración de un Plan de Vida, la emisora indígena “La Voz de los Awá”, un centro de capacitación, la Institución Educativa Bilingüe IETABA, la Institución Prestadora de Salud Indígena IPSI, proyectos productivos, entre otros.

La relación con la administración local de Barbacoas para los miembros de la organización ha sido de abandono y apoyo mínimo. Sólo recientemente la actual administración ha tenido gestos de inversión a las comunidades indígenas mediante la entrega de un bus para el transporte de los estudiantes de la IETABA.

De manera general, la UNIPA es una organización seria y fortalecida con alta presencia en el territorio y con estructuras organizacionales sólidas que permiten el liderazgo de sus miembros frente a la comunidad y la participación diversa en las instancias de decisión. Muchos retos tienen la organización por superar y metas por cumplir, que dependen en gran medida de que las barreras del conflicto lo permitan. Sin embargo, su fortaleza está dada, también, por haber surgido y posicionado en un contexto altamente desfavorable donde la protesta social y la organización social alternativa es perseguida insistentemente.

Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – RECOMPAS

La Red es una organización de segundo nivel sin ánimo de lucro creada en el año 2007 que nace como una instancia de interlocución política entre los Consejos Comunitarios con el Gobierno y Organizaciones No Gubernamentales. De ella hacen parte los 15 Consejos Comunitarios ubicados en Tumaco.

La Junta Directiva de RECOMPAS está integrada por 15 personas que representan a cada uno de los Consejos Comunitarios.

Las líneas de acción que ha llevado a cabo están orientadas en 3 ejes principales: el fortalecimiento de la organización mediante la capacitación de líderes; la etno-educación donde hay un proceso de formación que ha dejado 248 jóvenes graduados con buenos

rendimientos y se ha construido una propuesta etno-educativa presentada al Ministerio de Educación, presentado en otros espacios de discusión académica como el evento “África en la Escuela” en Medellín.

La tercera línea de acción está vinculada a lo productivo por la condición tradicional de agricultores y pescadores de la población. Se prioriza en el desarrollo de cultivos propios como cacao, coco, maíz, plátano, arroz, rascadera, yuca, papaya, banano, piña criolla, frijol nativo y la practica responsable de caza y pesca. Esto lleva consigo otra faceta del conflicto con las empresas palmeras por la tierra, ya que hay un rechazo desde la organización a lo que se considera “la cultura impuesta”, entre lo que está la palma africana.

La situación del conflicto y los cultivos de uso ilícito ha hecho también que se lleve a cabo otro eje de acción por parte de los Consejos Comunitarios que se deba atender como prioridad. Para RECOMPAS, la posición y la propuesta para una posible solución a la problemática, está en la entrega de los procesos de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos por parte de los propios campesinos que la tienen sembrada en sus parcelas a cambio de apoyos congruentes y sostenidos desde el Estado para fortalecer los cultivos sustitutivos tradicionales de las Comunidades Negras, eliminación de las fumigaciones aéreas y erradicación manual forzosa.

Una de las implicaciones es esto, es que haya un rechazo a la siembra o resiembra de palma africana. Más bien, se apoya la siembra de productos tradicionales como el cacao, sectores donde además hay alta rentabilidad pero poca inversión de fomento y con monopolios de su comercialización que frenan otras iniciativas venidas desde los sectores campesinos. Implica también, y esto es algo que para el Estado le significa mayores preocupaciones, la capacidad de autogobierno e independencia de los Consejos Comunitarios para el manejo en sus territorios y la no injerencia de actores armados ilegales, que tienen presencia y algún grado de dominio en ellos.

Ante esto, la posición de RECOMPAS ha estado centrada en el fortalecimiento de las capacidades locales y en intentar establecer diálogos con los actores armados ilegales como las Farc permitan que la población erradique voluntariamente los cultivos de coca. Ante esto, según los miembros de RECOMPAS, los actores armados ilegales en los casos exitosos han cedido en buena parte, pero establecen exigencias a la administración y cumplimientos de los programas. Así lo manifiesta uno de sus miembros:

“El que empezó eso (la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito) es el Concejo Comunitario Las Varas, y donde con propuesta nuestra, que se la presentamos al Director Nacional de Antinarcóticos (General Pérez), nos comprometemos a sacar la coca sin

arriesgar la vida de los erradicadores, los policías y soldados; usted sabe que eso es un riesgo, donde se meten automáticamente hay enfrentamientos.

Nos comprometemos, de una forma mucho más barata donde no se contamina el ambiente, no se daña la naturaleza, no se hace daño a la fauna, no se contamina la quebrada, a salir de lo ilícito a programas serios de sustitución de cultivos, que sea cumplido, por decir, a cada familia que saque lo ilícito se le dé para sembrar licito y mientras que eso le produzca se le invierta con unos recursos, que sale mucho más barato que lo que está haciendo el Gobierno hoy en día y el Gobierno no quiere jalarle a eso.”
(Entrevista a dirigente de RECOMPAS, Noviembre 19 de 2013).

EL MUNICIPIO DE RICAURTE

Introducción.

Este trabajo responde al interés de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz – RED PRODEPAZ, por identificar las estrategias idóneas para adelantar un trabajo de intervención socio-política en el territorio de los municipios de Ipiales, Ricaurte, Tumaco y Barbacoas del Departamento de Nariño, enmarcados en un contexto de proyectos de explotación de gran minería y petróleo que se llevan a cabo en la zona, los cuales generan impactos sobre los derechos humanos de la población.

Para ello, se adelantó un trabajo que gira alrededor de dos ejes: la protesta social y el conflicto armado. El primero, busca identificar la dinámica de protesta social desarrollada en los últimos 10 años, identificando los temas en los que se inscribe la protesta social, los actores que la desencadenan, los actores a los que se oponen, los mecanismos de negociación, los impactos generados y el reconocimiento institucional otorgado a la protesta social y a quienes la llevan a cabo.

El segundo eje busca identificar los principales hitos históricos que marcan la evolución del conflicto armado en los territorios, tomando como punto de partida la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC en el año 2005, prestando especial atención a los actores presentes en el territorio, los tipos de acciones que desarrollan, la relación con la población civil, el involucramiento en las economías ilegales.

En un tercer momento, se analiza la relación que puede existir entre ambos ejes, es decir, si las dinámicas de conflicto armado inciden o intervienen en las de protesta social, enfocándose particularmente en los conflictos sociales que tienen que ver con minería y petróleo. En este sentido, se intenta determinar si en estos contextos específicos, la actividad de empresas mineras o petroleras, incide sobre la presencia de grupos armados ilegales y la violencia.

Para llevar a feliz término este análisis, la metodología empleada determinó hacer uso de diversas técnicas de investigación y fuentes de información. Se hizo necesario construir una base de datos sobre protesta social y conflicto armado a partir de la revisión de prensa nacional y regional, así como también con instituciones que se han encargado de realizar un seguimiento a estos fenómenos, tales como la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV y la Diócesis de Tumaco.

Adicionalmente, se hicieron entrevistas a profundidad a algunos representantes de las organizaciones sociales involucradas en algunas de las protestas sociales identificadas con la revisión de prensa y/o que llevan a cabo algún tipo de trabajo socio-político con la población. Entre estas se pueden destacar a la Diócesis de Tumaco, la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, la Unidad del Pueblo Awá y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte. También se consultó a los personeros municipales de Tumaco e Ipiales y a actores protagónicos de los hitos de conflictividad social entre los que se encuentran un representante del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y el Gobernador del Resguardo Indígena de Yaramal.

Algunas situaciones de contexto general de los municipios se complementan con información estadística tomada de fuentes como el Dane, los reportes de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, los planes de desarrollo municipal, entre otras fuentes secundarias.

El documento consta de cinco partes. En la primera se describe el territorio y los rasgos generales de la temporalidad del estudio. En la segunda se hace un análisis a profundidad de las dinámicas de seguridad y conflicto armado, destacando sus hitos, sus impactos y los actores protagónicos. La tercera parte está dedicada a las dinámicas de la protesta social en la que se analizan los hitos principales, los actores protagónicos, los impactos generados en las motivaciones que la hacen posible. En la cuarta parte se recogen los dos puntos anteriores, conflicto armado y protesta social, únicamente referido a los temas de minería y petróleo, para observar cómo operan allí los aspectos de derechos humanos e integridad cultural de las comunidades, el uso del suelo y la violencia colectiva o de actores armados. Por último, la sexta parte describe brevemente los factores y actores determinantes en tres escenarios de riesgo de violencia colectiva intensa, moderada y leve.

Por último, recogiendo los aspectos centrales de cada uno de los ejes y los escenarios posibles, se emiten una serie de recomendaciones a la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz – RED PRODEPAZ a manera de alternativas a la intervención socio-política en el territorio y algunas conclusiones generales a manera de aprendizajes, limitaciones y perspectivas de análisis que deja el trabajo realizado en el proyecto.

Delimitación territorial y temporal del estudio.

El municipio de Ricaurte fue fundado en el año de 1880 por el señor Antonio Rosero. Tiene una superficie de 1.211 Km² y una extensión territorial de 2.422 Km². La altitud es de 1.181 m.s.n.m. y está ubicado en la subregión del piedemonte costero, al sur occidente del Departamento de Nariño. Limita al norte con los municipios de Barbacoas; al este con los municipios de Samaniego, Santacruz y Mallama; al sur con el municipio de Cumbal y la República de Ecuador; al oeste con el municipio de Barbacoas. La cabecera municipal de Ricaurte se encuentra ubicada sobre el corredor vial Pasto-Tumaco, lo cual le confiere la particularidad de ser punto de conexión entre el interior del departamento y la salida al mar en la costa pacífica.

La población de Ricaurte está proyectada para el año 2013 en 17.862 habitantes, de los cuales 2.409 (13,5%) viven en la cabecera urbana mientras que 15.453 (86,5%) viven en el resto rural. Teniendo en cuenta la fecha del último censo, el año 2005, en donde se reportaban 14.862 habitantes, desde ese año hasta el presente la población ha venido creciendo a un ritmo del 2,5% promedio anual.

Según los datos del censo 2005, el 51,4% de la población son hombres y el 48,6% restante son mujeres. En cuanto a las edades, se puede decir que la población de Ricaurte es muy joven, ya que el 49,9% se encuentran entre los 0 y 19 años. De lo anterior, se difiere que hay una tasa de dependencia juvenil bastante alta, la cual llega al 72%. En cambio, la población senil es muy baja, representa solo el 5,4% del total de población y la tasa de dependencia igualmente es baja, el 10%.

La zona urbana de Ricaurte está dividida administrativamente en 8 barrios llamados Santander, La Pola, Avenida Estudiantes, Las Palmas, Primavera, El Comercio, El Guayabal y Cartagena. Existe además un asentamiento urbano llamado La Floresta que aún se encuentra sin legalizar.

De otra parte, la zona rural está compuesta por 11 veredas y 11 resguardos indígenas. Las veredas se denominan como Alto Cartagena, Chambú Guadual, Alemania, 8 de Marzo, Ospina Pérez, San Pablo, Pilispí, San Francisco, Villanueva, San Isidro y El Palmar.

En cuanto a los resguardos, estos ocupan 1.170 Km², cerca de la mitad de la extensión territorial del municipio. Los 11 resguardos se hacen llamar Ramos Mongón-Manchuria, Gualcalá, Alto Cartagena, Cuaiquier Integrado Milagroso, Vegas Changüi Chimbuza, Cuascuabí-Paldubi, Cuchilla-El Palmar, Pualapí-Pueblo Viejo, Palmar Imbí Medio, Nulpe Medio Alto y Río San Juan y Magüi. (Ver Mapa 1). Adicionalmente hay un proceso de constitución de resguardo urbano en el barrio Cartagena, el cual lleva por nombre El Edén. Los resguardos están dirigidos por 16 cabildos, los que a su vez integran 93 comunidades.

Resguardos indígenas del pueblo Awá



La presencia indígena en el territorio que actualmente compone el municipio de Ricaurte ha sido de asentamiento prehispánico de grupos indígenas, básicamente del grupo awá, en las riberas de los ríos San Juan y Guiza. A pesar de la antigua y alta presencia indígena persistente, se evidencian altos efectos de la desculturización que ha llevado a que sólo un 15% hable su lengua propia. Por su parte la población mestiza asentada en Ricaurte, arribó principalmente con la construcción de la carretera Pasto-Tumaco y se instaló en

diferentes poblados al borde de ésta, entre ellos la cabecera municipal, en donde se levantaron restaurantes y hospedajes para los viajeros.

En lo concerniente a la condición educativa de la población de Ricaurte, se puede decir que hay altos niveles de analfabetismo, ya que el 41% de la población no sabe leer y escribir. Esto se refleja en el hecho que un 40% de la población no tiene ningún nivel educativo, mientras que otro 41% tiene un nivel de básica primaria, la mayoría con edades escolares superiores a la edad promedio para cursar estos años, es decir, población que ha desertado del sistema educativo (Dane, 2005). En Ricaurte existen 3 instituciones educativas, las cuales administran 69 establecimientos educativos, la gran mayoría ubicados en las zonas rurales y tienen una cobertura del 82,5% (PDM). Uno de los limitantes principales para el sector educativo es la falta de dotación en los establecimientos, la mal infraestructura física y la poca posibilidad de capacitación permanente a los docentes. En cuanto a éste último aspecto, cerca de la mitad de los docentes han ingresado a la universidad a adelantar la licenciatura y reciben los programas que ofrece la organización CAMAWARI de formación en educación propia.

En cuanto al tema de salud, hay retos importantes por cubrir una cuarta parte de la población, ya que en Ricaurte el 70% tiene afiliación al régimen subsidiado y otro 4% está afiliado al régimen contributivo. El municipio cuenta con un centro de salud en el casco urbano y ocho puestos de salud en las zonas rurales. El servicio es prestado por 18 promotores de salud y la calidad de la prestación del servicio llega al 78%. (PDM, 2012)

Los servicios públicos en Ricaurte son limitados y colocan a la población en situaciones de precariedad y mala calidad de vida. En el año 2005, más de la mitad de las viviendas, el 54,5%, no tenían energía eléctrica, el 67,6% no tenían acueducto y el 78,2% sin alcantarillado.

La condición de pobreza es un denominador común entre la población de Ricaurte, la cual está presente en dos terceras partes del municipio, teniendo un fuerte arrastre de la zona rural. Así las cosas, el NBI alcanza el nivel de 66%, pero en la zona rural es de 72% mientras que en la zona urbana se reduce a 28%. El indicador que tiene más peso para un NBI tan alto son los servicios públicos. Ahora bien, si se tiene en cuenta el Índice de Pobreza Multidimensional-IPM, la situación es más acentuada, puesto que se calcula que el 85% se encuentra en dicha condición.

La principal actividad económica de Ricaurte es la agricultura, pero está es escasa si se tiene en cuenta el área apta para agricultura que no se emplea en estas actividades. Se calcula que Ricaurte solo tiene cultivado algo más del 2% de la tierra apta y la mayor parte de estos es en cereales, que según en el año 2009 llegaban a las 4.015 Hc. Otros cultivos

significativos son la caña panelera con 850 Hc, el bananito con 400 Hc y el platano con 100 Hc. (USAID-CCAI). Adicionalmente se destaca el cultivo de tetera, la cual es usada para elaboración de sombreros artesanales y se calcula que unas 113 Hc estaban sembradas con este producto. (PDM, 2012)

En un informe del Plan Panelero de Nariño, se presenta a Ricaurte como una municipalidad que aporta alrededor de 800 Hc cultivadas en caña panelera y, aunque son pocas, -sólo el 5% dentro del Plan- si contribuye con una alta cantidad de trapiches, 75 en total, que son cerca de una tercera parte de las que conforman el Plan, las cuales se encuentran en una adecuación parcial o nula, todas con hornillas de tipo tradicional. La participación se hace a través de las organizaciones ADPAS y ASOCAÑA, la primera dedicada a la producción de panela y la segunda a la producción de caña, que integran, ambas, un total 125 afiliados activos.

La extensa área de pastos que existe en el municipio permitiría emplearse más a fondo en la ganadería de doble propósito, pero contradictoriamente resulta siendo un sector marginal de la economía local, señalado en el Plan de Desarrollo Municipal como “de bajo rendimiento, con acceso tecnológico en la producción muy limitado, escaso mejoramiento genético y casi en su totalidad se produce para el consumo doméstico y eventualmente para la venta. La carne abátese el consumo local y se comercializa al Municipio de Tumaco y municipios cercanos. En este sector hemos mirado algunos problemas como: la falta de conformación de un comité de ganaderos y problemas de orden público.” (PDM, 2012: 73).

En definitiva, la economía agropecuaria en Ricaurte es básica y limitada, tal como lo deja conocer el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 al afirmar que: “Existen problemas estructurales como predios en falsa tradición que limitan acceso al crédito financiero, la producción de alimentos está dedicada, especialmente, al mercado interno y regional; casi a ningún producto se le hace proceso de transformación y así generar mayor valor agregado, y por consiguiente incrementar el ingreso y empleo, por lo que se refleja en su bajo capital de trabajo, los procesos de comercialización están fuertemente influenciadas por cadenas de intermediarios que limitan el acceso de los productores a mercados terminales reduciendo el ingreso al productor.” (PDM, 2012: 72).

La escasa producción agrícola está basada en una estructura de la propiedad fragmentada y subutilizada, donde se ha generado una alta concentración de la tierra, aunque ésta concentración puede deberse a territorios de resguardo. Según el cuadro 1, en el año 2005 existía un total de 2.474 predios con 3.474 propietarios, comprendiendo 208.883 Hc, lo cual quiere decir, que hay cerca de 1,4 propietarios por predio y aproximadamente 60 hectáreas por propietario. Sin embargo, al discriminar por los tamaños de superficie de

cada predio, se puede observar cómo menos del 1% de los propietarios controlan el 90% de la tierra, teniendo que 24 predios están en manos de 29 propietarios, con propiedades que superan las 500 Hc de superficie cada una.

CUADRO 1						
DISTRIBUCION DE PREDIOS, PROPIETARIOS Y HECTAREAS POR RANGOS DE SUPERFICIE						
	PREDIOS	%	PROPIETARIOS	%	HECTAREAS	%
Menos de 10 Hc	1921	77,6%	2694	77,5%	4417	2,1%
Entre 10 y 50 Hc	454	18,4%	630	18,1%	8973	4,3%
Entre 51 y 500 Hc	75	3,0%	121	3,5%	7183	3,4%
Más de 500 Hc	24	1,0%	29	0,8%	188310	90,2%
Total	2474	100,0%	3474	100,0%	208883	100,0%

Fuente: IGAC. Subdirección Nacional de Catastro, 2005.

Tomado de: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 (PDM, 2012). Cálculos propios.

El uso del suelo en Ricaurte está dividido entre bosques naturales y pastos naturales y/o naturalizados. Sin embargo, en el aprovechamiento que se le da al suelo, principalmente en las áreas de pastos naturales y/ naturalizados, se presentan condiciones de utilización de intensidad severa y también de subutilización, lo cual indica que su aprovechamiento está por debajo de su función social productiva. (USAID-CCAI, 2010). Muchas áreas son improductivas por el temor de sus propietarios a transitar en ellas, debido a que abundan los campos minados.

Ricaurte también es afectado por la ocupación de tierras por colonos, que vienen de diferentes departamentos como Putumayo, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Meta y Caquetá. Algunos llegan a cultivar coca en tierras apropiadas por la fuerza, principalmente en la parte occidental del municipio. Esto ha impulsado la presencia de actores armados y el despojo a algunos campesinos e indígenas de sus parcelas.

Dinámicas de la seguridad y conflicto armado.

Hitos principales y sus efectos sobre la población de cada una de las zonas.

Los datos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV (Ver Cuadro 2), deja evidenciar ciertos momentos significativos que llaman la atención por la magnitud de la afectación a la población durante los últimos 8 años. Específicamente, se hace relevante el rompimiento en el año 2012 de la tendencia general decreciente del total de víctimas que se venía dando progresivamente desde el año 2005. Este cambio en la tendencia es percibido en la mayoría de hechos victimizantes, pero se destaca el del acto terrorista, que pasó de ocurrir en promedio menos de una vez al mes a estar presente aproximadamente una vez todos los días durante el año 2012.

El desplazamiento se multiplica aproximadamente en cuatro veces del año 2011 a 2012, luego de experimentar su año más bajo se dispara nuevamente a uno de sus niveles más altos durante el periodo analizado. La pérdida de bienes muebles e inmuebles llega a su nivel más alto y su tendencia ha sido constantemente creciente en el periodo. La desaparición forzada, aunque es un hecho que aporta una pequeña parte de las víctimas, vuelve a tener un incremento que lo pone a niveles que tenía en los años 2006 y 2007. Por último, la amenaza también sufre un incremento inusitado en el año 2012, luego de que prácticamente no existía en el municipio.

En segundo lugar, si se analiza año por año el peso relativo que tienen algunos delitos dentro del total anual de víctimas, se puede notar como el desplazamiento ha ido perdiendo representación, dejando de aportar casi la totalidad de causas de victimización en los primeros años 2005 y 2006 a representar aproximadamente la mitad o más en los últimos años entre 2010 y 2013.

En sentido contrario se comportan los hechos de la pérdida de bienes muebles e inmuebles, el cual ha pasado a representar entre una cuarta y quinta parte de los hechos victimizantes que ocurren a partir del año 2008, o así mismo los actos terroristas, que en el año 2012 se convierten en una cuarta parte de las víctimas que se generan.

En tercer lugar, la actualidad del año 2013 parece mostrar una situación de aparente calma al llegar a su nivel más bajo en todo el periodo en cuanto a total de víctimas se refiere, lo cual indica claramente que el aumento inusitado del año 2012 y su posterior caída, tiene que ver con los efectos del repliegue y relativa desarticulación de una de las

partes involucradas en el conflicto como son las Farc, generada por el desenvolvimiento de la fuerte confrontación.

CUADRO										
VICTIMAS POR TIPO DE HECHO VICTIMIZANTE EN RICAURTE 2005-2012										
HECHO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TOTAL
Desplazamiento	1.866	717	388	366	220	193	172	741	81	4744
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	28	13	29	98	84	107	76	190	1	626
Homicidio	29	79	130	50	48	25	17	25		403
Acto terrorista	4	17	4	3	5	6	10	330	8	387
Minas Antipersonal	4	9	38	15	13		17	10		106
Desaparición forzada	4	25	28	10	3	4	1	29		104
Amenaza			1		1	1	4	30	10	47
Secuestro		1	3	1		1	5	5		16
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes					6	1	1	5		13
Total	1935	861	621	543	380	338	303	1365	100	6446
Fuente: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV										
* Datos con corte al 01 de diciembre.										

Lo visto en el cuadro de hechos victimizantes es visto como momentos de irrupción en la dinámica del conflicto que se han dado en los últimos años y que entraremos a analizar con mayor detenimiento a continuación, cuando se observe lo que ha acontecido en el accionar de los actores armados protagónicos y las transformaciones vistas durante el periodo.

Actores protagónicos: su evolución y transformación en el periodo objeto de estudio.

El estado de confrontación exasperado por la proliferación de grupos armados en Ricaurte a principios de la década del 2000, se verifica con la información de combates que presenta USAID-CCAI (2011) en los que analiza cómo se pasó de tener entre uno o dos combates al año antes del 2002 a tener entre cinco y diez combates al año entre 2003 y 2007, para luego volver a descender en años posteriores.

El procesamiento y análisis del material recopilado para la este trabajo, da cuenta de un total de 83 acciones de conflicto armado en el municipio de Ricaurte entre el año 2010 y junio de 2013, que corresponde a una gama diversa de hechos adelantados por actores armados ilegales o miembros de la fuerza pública, ya sea dirigidos entre sí, contra la población civil o infraestructuras. En algunos casos la fuente no identifica a quienes desarrollan la acción y por lo tanto se ha dejado sin precisar.

Del conjunto de acciones identificadas, 28 fueron adelantadas por alguno de los grupos del Ejército Nacional y 19 por la Policía Nacional. Por su parte, 21 acciones fueron adelantadas por alguna de las columnas de las Farc y sólo 1 por el Eln. En las restantes 14 acciones no fueron posibles identificar el actor que las lleva a cabo.

Este resultado deja una primera conclusión: la maniobra militar del Eln se ha visto reducida considerablemente durante este periodo. Ya no se reflejan acciones de gran envergadura, como los señalados en años anteriores y al contrario lo que se observa es la esporádica desmovilización de miembros de sus tropas.

Un testimonio directo de una líder habitante de Ricaurte señala como el municipio fue inicialmente el dominio del Eln y posteriormente se presentó la llegada de las Farc. Dice ella: “Aunque ya hace varios años ejercía presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que había originado una fuerte presencia de Policía y Ejército en toda la región, sobre todo en la carretera en dirección al Pacífico, la situación resultaba de alguna manera soportable. No obstante, hacía un tiempo que, tanto en el municipio de Barbacoas como en el corregimiento de Llorente, en la vía al puerto de Tumaco, se venían proliferando las siembras de coca y se sabía de la presencia de otros grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se venían desplazando hacia Ricaurte, lo cual complicaba muchísimo la vida en el municipio, ya que, al parecer llegaban con mucha fuerza armada.” (Montenegro, 2013).

El Ejército de Liberación Nacional

Para iniciar, vale la pena hacer un recorrido por lo que la literatura ha señalado acerca de los grupos armados que han hecho presencia en el territorio de Ricaurte.

Algo en que parecen coincidir varios analistas como Ávila (2009) y USAID-CCAI (2010), es que uno de los primeros grupos que hace presencia en Ricaurte es el Eln con el Frente Comuneros del Sur, el cual ha mantenido sus cuarteles generales en el vecino municipio de Samaniego y ha desarrollado un fuerte trabajo político en sus zonas de influencia. Como antecedente de ello, en 1997 llevan a cabo el secuestro del Alcalde municipal de Ricaurte, junto a sus homólogos de Mallama, Cumbal e Ipiales, en claras acciones de presión a las administraciones locales para impedir que se involucrasen con los paramilitares, lo que da cuenta de su capacidad de penetración política y presión sobre la institucionalidad regional.

A su vez, se puede identificar una fortaleza militar del Eln en la región a finales de los años noventa, expresado en el desarrollo de paros armados que logran suspender sostenidamente el tránsito por la vía al mar durante varios días, tales como el acontecido desde los primeros días de noviembre del año 2000, el cual se extendió hasta mediados de diciembre y llamó la atención, entre otros, por el secuestro del Jefe de prensa de la Gobernación de Nariño, hecho que tuvo lugar en la jurisdicción de Ricaurte (El Tiempo). Otro aspecto destacado es que el Eln tiene en la zona uno de los planes de minado que podría considerarse más grande en el país, los cuales presentan afectaciones a partir del año 2003 (ODDR, 2010).

Sin embargo, de los únicos hechos adjudicados al Eln durante el periodo analizado de 2005 a 2013 estuvo el secuestro de dos trabajadores -una gestora social y un ingeniero- del consorcio que adelantaba la adecuación de la vía Tumaco-Pasto-Mocoa, más un empleado del hotel dónde se hospedaban, ocurrido en mayo del 2011. Para cometer el secuestro, se habría violado el Derecho Internacional Humanitario-DIH, puesto que se menciona que los secuestradores hicieron presencia en una camioneta que portaba logos de misión médica.

Otros hechos que se pueden rastrear en el Centro de Documentación de Movimientos Armados-CEDEMA, a partir de los denominados “partes de combate”, indican una capacidad ofensiva del Eln reducida, que se concentra en ataques esporádicos a la Fuerza Pública y el trabajo político.

Estos ataques consistieron en minados, un hostigamiento y una emboscada, éste último de mediana envergadura, el cual fue perpetrado por el Frente “Comuneros del Sur” contra un camión del Ejército cuando transitaba cerca de la cabecera de Ricaurte en septiembre de 2010, con un saldo de 4 muertos y 19 heridos. El trabajo político, como una de las constantes del grupo, se hace presente con incursiones esporádicas a la cabecera urbana de Ricaurte en donde se distribuyen videos y volantes llamando a la incorporación o simpatía con las ideas del Eln. Una de estas incursiones se presentó en Julio del año 2010.

A pesar de esto, las estructuras del Eln en la población de Ricaurte no han sufrido mayores golpes y pareciera existir una actitud pasiva en el conflicto. Las únicas acciones propinadas en contra de la organización fueron la destrucción de un laboratorio de cocaína en abril de 2012, y recientemente, a finales de abril del presente año 2013, se destruyó un campamento de entrenamiento. Según se reporta, el campamento tenía una capacidad para 70 personas, estaba dotado de polígonos, plaza de armas y fueron hallados fusiles de madera.

Quizá el mayor golpe que sí puede estar sufriendo el Eln es la desmovilización de algunos de sus miembros, aunque en el municipio de Ricaurte se registran sólo 3 casos, ocurridos en marzo y junio de 2011 y otro más en enero de 2013, pertenecientes a las Compañías “Mártires de Barbacoas” y a la Compañía “José Luis Cabrera”. Aunque en Ricaurte no hay evidenciadas de entregas masivas o continuas de sus miembros, es de señalar que esto ocurre en un contexto de aumento de las deserciones en la organización, donde, al parecer, hacia el año 2010 el Frente “Comuneros del Sur” hubiera reducido sus hombres en más de la mitad debido a esta situación.¹¹

Los paramilitares.

La llegada de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia-Auc a la región se da desde Llorente, corregimiento de Tumaco y con influencia en Barbacoas, quienes entablaron desde el primer momento una disputa a muerte con las Farc por el control de algunos sitios y corredores estratégicos. El desplazamiento de las Farc hacia Ricaurte fue un efecto de repliegue de

¹¹ Ver: <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/desmovilizaciones-jaque-del-eln>. Recuperado el 11 de octubre de 2013.

estos últimos ante la ofensiva militar de las Auc, disputándoles las zonas cultivos de hoja de coca y los principales ríos empleados para el tráfico de cocaína.

Ahora bien, la presencia de paramilitares en Ricaurte no se ha documentado desde los analistas académicos e institucionales. Solamente se encuentra en el testimonio de una líder campesina que ha dejado entrever que llegó a haber alguna injerencia de las Auc en su momento dirigido a la estigmatización y amenaza a las organizaciones sociales, ya que lamenta como se deterioraba la seguridad en su municipio y se desprestigiaba a los líderes sociales como ella que desarrollaban su labor en la Reserva Forestal La Planada.

Al respecto dice lo siguiente: “más o menos en el año 2002, momento en el que asumió la presidencia Álvaro Uribe Vélez, a Ricaurte empezaron a llegar algunos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo cual hizo ya casi imposible el trabajo que venían llevando a cabo muchas organizaciones sociales y el grupo de trabajo de La Planada. (...) tras la llegada de las FARC y las AUC y con el nuevo panorama que esto plantea tanto para la población civil y las comunidades indígenas como para las personas que trabajan en diferentes espacios reconocidos social y políticamente del municipio, como era el caso del equipo de La Planada, la situación comenzó a tornarse cada vez más difícil. Se presentan las primeras incursiones a La Planada por parte de los grupos armados y la Reserva Natural empieza a asumirse como enemigo por cada uno de los grupos” (Montenegro, 2013).

En esas circunstancias, se puede decir que en el municipio de Ricaurte ha habido una poca presencia y una escasa injerencia de los grupos paramilitares, consistente en alguna estigmatización a las organizaciones sociales y sus líderes, más no se da cuenta de dominios territoriales o partes en la confrontación bélica indiscriminada o exacerbada como sí se da entre la insurgencia y la Fuerza Pública.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

De otra parte las Farc si han sido reconocidas como un actor armado ilegal con alta injerencia en Ricaurte. El mapa de presencia de las Farc en el año 2002 que presenta Ávila (2009), indica que éste municipio hace parte del eje de acción en el piedemonte costero, al margen izquierdo de la cordillera occidental, de la Columna “Mariscal Antonio José de Sucre” que se extiende desde Cumbitara hasta Ricaurte, pasando por Los Andes, La Llanada, Samaniego y Barbacoas.

También el ODDR (2011) verifica qué, basados en información de OCHA y la Vicepresidencia de la República, Ricaurte hace parte de los municipios en los que el Frente 29 de las Farc opera a partir del año 2001 y progresivamente y en determinadas épocas fue disputando territorios al Eln. Al respecto señalan que: “Así, la lucha por los territorios que representan ingresos económicos ha configurado confrontaciones en la mayor parte del territorio nariñense. Por esta razón, no ha existido una presencia estática de actores armados, por el contrario, ha sido el resultado de conflictos y alianzas entre las diferentes OAI y actores no armados.”

En el periodo analizado entre 2005 y 2013 las Farc mantienen una actividad intensa de confrontación desde que se replegó hacia el municipio de Ricaurte en épocas de la avanzada paramilitar en la costa pacífica. De las 21 acciones en que se identifica claramente a las Farc como las promotoras, se obtienen que 7 son ataques a la Fuerza Pública mediante atentados con explosivos, emboscadas y hostigamientos; 4 más son atentados a la infraestructura energética; 3 más son minas antipersonales; 6 se refieren a retenes ilegales en la vía pública en diferentes puntos de la carretera al mar y 1 es la ejecución de civiles. En las acciones de las Farc, más de la mitad son atribuidas a la Columna Móvil “Mariscal Antonio José de Sucre”; 3 al Frente 29; 1 a la Columna Móvil “Daniel Aldana” y en 5 oportunidades no se precisa que frente o columna es la que comete el acto y se adjudican genéricamente a las Farc.

Algunos de los ataques a la Fuerza Pública en Ricaurte se llevan a cabo en la carretera que comunica a la costa pacífica. Estos fueron desarrollados en los años 2005 y 2007, dos de ellos adjudicados directamente a las Farc y uno sin precisar los autores. Estos ataques fueron dirigidos contra la Policía, en uno de los casos contra el Escuadrón Móvil de Carabineros. Estos fueron los hechos que más daño le causaron a la Fuerza Pública, contabilizando un total de 6 muertos y 8 heridos. En dos de estas ocasiones, los uniformados se dirigían a atender presuntas quemas de buses o cargas dinamiteras instaladas sobre la vía al mar.

A partir del último ataque ocurrido en agosto de 2007, no se vuelven a presentar acciones de ésta naturaleza, a pesar de que por lo menos en seis ocasiones diferentes lo volvieron a intentar. Posiblemente por ajustes al modo de acción de la Fuerza Pública se lograba desactivar las cargas explosivas instaladas en los alrededores de los sitios donde se montaban retenes ilegales, se incineraban vehículos, principalmente de transporte público o simplemente se ubicaban los explosivos en las cunetas de la vía.

Lo que se observa en cuanto a cambios en la modalidad de ataques a la Fuerza Pública, es que en los últimos años estos se direccionan principalmente contra los puestos de control policial y militar o las subestaciones de Policía, especialmente el puesto de control de la Policía del Cerro La Cruz en la vereda San Pablo, en el cual las Farc han mostrado especial interés en destruirlo, ya que representa un punto estratégico desde donde se realiza vigilancia a la cabecera urbana de Ricaurte y a un tramo de la vía al mar.

En esta lógica, en abril del año 2010 la Columna Móvil “Mariscal Antonio José de Sucre” intentó atacar contra el puesto de control mediante 5 cilindros bomba que estaban instalados en rampas de lanzamiento con 12 kilos de amonal y metralla cada uno, el cual lograron desactivar los técnicos antiexplosivos. Similarmente, en junio del año 2012 se lleva a cabo un hostigamiento que debe ser repelido con la ayuda de helicópteros artillados de la Fuerza Aérea.

Los atentados contra infraestructura de la red eléctrica por parte de las Farc en Ricaurte se han llevado a cabo principalmente en el corregimiento Ospina Pérez entre los años 2005 y 2008. Desde entonces no se han vuelto a presentar eventos de este tipo. La infraestructura petrolera se ha visto menormente afectada por ataques contra el Oleoducto Transandino, registrando durante el periodo un solo atentado en agosto del año 2012 en la vereda Berlín.

La información recopilada parece indicar que el aprovechamiento mediante extracción ilegal de crudo del Oleoducto Transandino por parte de los actores armados ilegales ha sido más bien reciente en la zona de Ricaurte, ya que sólo a partir del año 2009 se presentan destrucciones de refinerías clandestinas por parte de la Policía y el Ejército, situación que se da principalmente hacia el occidente del municipio, en donde la cercanía a los cultivos de hoja de coca y laboratorios de procesamiento permite emplear más eficientemente éste recurso.

La situación de las Farc en la actualidad respecto a su capacidad ofensiva se vio ampliamente debilitada a partir de la entrada en operaciones de la Fuerza de Tarea Pegaso, esencialmente a raíz de la muerte de su máximo comandante alias “Guillermo Cortico”, hecho consumado con un Comando Conjunto de Operaciones Especiales de la Tercera División que bombardeó los campamentos donde se refugiaban los máximos cabecillas de la organización en la Vereda Arrayán.

Esto ha traído consigo dos situaciones particulares. Por un lado, las Farc perdieron buena parte del dominio territorial que habían logrado sobre el sector de la vía al mar, el corregimiento de Ospina Pérez, los sectores de Pueblo Viejo y Cuchilla-El Palmar y la proximidad al casco urbano. Sus acciones a partir de ese momento han mostrado la defensa y la urgencia de contención a la Fuerza Pública, quien continuó las operaciones terrestres por parte de la Fuerza de Tarea Pegaso llegando a desestabilizar el material bélico con incautaciones importantes de explosivos y elementos similares. Más recientemente, en el mes de octubre dieron de baja a otro importante jefe de la organización, jefe de escuadra de la Columna Movil Mariscal Antonio José de Sucre con más de 15 años en la organización, que estaba liderando las nuevas acciones emprendidas por la guerrilla de extracción de recursos al petróleo en el Oleoducto Transandino y la afectación a la red eléctrica.¹²

Por otro lado, las Farc ha debido replegarse y contraerse hacia otras zonas aledañas al río Nulpe que habían sido de retaguardia y en ese propósito han re-asegurado fuertemente el territorio con medidas indiscriminadas sobre la población civil como el incremento de campos minados y endurecimiento a los controles de movilidad, principalmente de indígenas, que provocado una difícil situación humanitaria de confinamiento de las comunidades y restricciones a la movilidad, máxime, si se tiene en cuenta las versiones que indicarían que el campamento de “Guillermo el Pequeño o Cortico” fue delatado por algunas personas que dieron información de su ubicación¹³.

A pesar de esto, la recomposición por parte de las Farc es un proceso que se viene dando y no se descarta que logren incrementar nuevamente su capacidad ofensiva. Su presencia política y militar se mantiene y para los miembros de las organizaciones sociales esta es totalmente vigente: “Ha habido muchas operaciones, ha habido bajas de la guerrilla y también por parte de la Fuerza

¹² Ver <http://www.elspectador.com/noticias/judicial/abatido-jefe-de-farc-responsable-de-atentados-narino-articulo-454865>

¹³ Ver <http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-cayo-guillermo-pequeno-gran-terror-narino/268817-3>;

Pública, y no, yo pienso que la guerrilla, no solamente acá sino en Colombia, está vigente, no podemos decir que matan a una persona y termina el proceso que tienen ellos.”¹⁴

La Fuerza Pública.

La Fuerza Pública ha tenido una capacidad ofensiva creciente a lo largo del periodo 2005-2013, después de haber sufrido importantes reveses o despliegues ofensivos sin producir resultados significativos en los primeros años analizados. En términos generales se puede rastrear un cambio de actitud hacia la cautela por haber sido víctima de duros ataques por parte de las Farc en las vías terrestres, pero por otro lado hay procesos significativos de avance territorial contra los actores armados ilegales y duros golpes a las cabezas visibles de la Columna Móvil “Mariscal Antonio José de Sucre” de las Farc que se consolidan en los últimos años.

Llama la atención que a mediados de los años 2005 y 2006 se desplegaron grandes operaciones militares en la zona de Ricaurte que no arrojaron resultados de significación, pero que sí dejaron un costo social muy elevado en la afectación que se hizo a la población civil.

Por ejemplo, en junio del año 2005, la Brigada 29 del Ejército desplegó una gran cantidad de tropas que buscaban ir tras los cabecillas de la Columna Móvil “Mariscal Antonio José de Sucre” de las Farc, sin que se lograra resultado alguno. En cambio, sí hubo errores militares que le costaron la vida a civiles, como el caso de un indígena de la vereda Pailapí, el cual fue reconocido como tal por el Ejército.

Así mismo, la situación de desplazamiento fue notoria, el Personero de Ricaurte en su momento denunciaba la presencia de 728 indígenas Awá desplazados en el casco urbano, mientras que organismos de cooperación internacional hablaban de 1.600 personas que permanecían hacinadas en las veredas de Chucunés, Altaquer y Arenal.

Al año siguiente la situación se volvió a manifestar cuando la Brigada 29 del Ejército lanzó la Operación “Tornado” que concentró sus operaciones en la vereda Cumbás, buscando dar con la captura o neutralización de alias “Rambo”, máximo cabecilla de la Columna Móvil “Daniel Aldana” de las Farc al que se le perseguía en un repliegue estratégico desde Tumaco. Nuevamente los resultados no fueron los esperados: en cerca de quince días de combates sólo algunas bajas y el decomiso de pequeñas cantidades de armas, munición y material de guerra; pero las consecuencias en la población sí fueron altamente negativas, ya que nuevamente las escuelas de Ricaurte se ocuparon por cientos de desplazados, tanto así que ameritó la visita de verificación de los representantes de Acnur en Colombia y se hablaba de unos 1.700 desplazados entre Ricaurte y Altaquer.

Desde ese momento, y por cerca de cinco años, el Ejército no había vuelto a tener una entrada decidida en el municipio, que se había dedicado a sostener un dominio territorial sobre el casco urbano y mantener despejada la vía al mar. Desde el año 2012, en desarrollo de la estrategia

¹⁴ Entrevista a un miembro del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte-CAMAWARI en noviembre de 2013.

“Espada de Honor” y bajo el traslado de la Fuerza de Tarea Pegaso, hay un incremento de la iniciativa de la Fuerza Pública por copar espacios que mantenía consolidados la Columna Móvil “Mariscal Antonio José de Sucre” entre el corregimiento Ospina Pérez y la zona sur occidental de Ricaurte.

La primera incursión de la Fuerza de Tarea Pegaso se refiere al desminado en octubre de 2012 y posteriormente, en diciembre, se lleva a cabo el bombardeo a tres campamentos de la estructura guerrillera por parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales o la Fuerza de Tarea Pegaso, en donde dan de baja al cabecilla de la columna, alias “Guillermo Pequeño”, al tercero al mando alias “Mario” y a 18 guerrilleros más, constituyéndose en uno de los más duros golpes dados a la columna de las Farc.

Posterior a esto, lo que se observa es una serie de acciones de consolidación de la Fuerza Pública en el propio corregimiento Ospina Pérez, consistente en acciones de incautación de explosivos, captura de redes de apoyo proveedoras de explosivos y desminados.

También se produce el ingreso a la zona de la vereda Nulpe Alto, sitio que por primera vez durante todo el periodo analizado comienza a aparecer recurrentemente como escenario de las acciones de la Fuerza Pública, área que las Farc aseguró, al salir replegadas desde los campamentos bombardeados hacia zonas más apartadas del eje de la vía al mar, incrementando los mecanismos de coerción a la población civil, aumentando el asesinato de líderes y señalamientos contra las comunidades y organizaciones indígenas.

De las veredas Nulpe Alto y Medio, entre otras aledañas, se destacan los principales hitos en la discusión de prensa durante todo el año 2013, una de las emergencias humanitarias más grandes generadas por el aseguramiento territorial de las Farc que entró en conflictos con las organizaciones indígenas y los fuertes combates entre la insurgencia y la Fuerza de Tarea Pegaso.

Dinámicas de la protesta social y del movimiento social (Zona objeto de estudio). Línea de tiempo de hitos asociados con la violencia colectiva en el territorio.

Hitos principales y sus efectos sobre la dinámica de violencia colectiva.

En términos de la protesta social, el municipio de Ricaurte sólo recientemente ha encontrado expresión real, a pesar de la existencia de procesos organizativos fuertes que han tenido lugar desde mucho tiempo atrás, sobre todo desde la población indígena y que se encuentran en un contexto de fortalecimiento con algunos hitos asociados que afectan positiva o negativamente los procesos.

En la línea de tiempo, las expresiones de protesta social de cualquier naturaleza han estado asociadas principalmente a la organización indígena. En nuestra base primaria inicial de información sólo se ubican 3 hitos importantes, todos ocurridos en lo corrido del año 2013. Consistieron básicamente en una marcha asociada a la paz, denuncias contra la afectación de lugares sagrados y la concentración con bloqueo a la carretera al mar, motivada por los requerimientos de la Fuerza Pública a algunos líderes indígenas.

En la marcha consistió en una "Minga por la Paz" hecha por las calles del casco urbano de Ricaurte al mes de ocurridos los hechos del bombardeo a máximo cabecilla de las Farc, a la que asisten representantes de los municipios de Mallama, Barbacoas, Tumaco, Magüi y Roberto Payán, quienes solicitan un pronunciamiento del Gobierno Nacional para que cesen los actos violentos en la región. En el evento hubo grupos musicales, se hicieron pronunciamientos sobre la protección de las tierras por abusos e invasiones a los lugares sagrados de todos los actores armados.

El hecho fue seguido por un trabajo de inspección de los territorios para evidenciar los efectos de trabajos de exploración minera que una multinacional adelantó en el territorio del resguardo indígena de Alto Cartagena, demandando protección de lugares sagrados y sentando posición de rechazo a nivel organizativo frente a la gran minería.

Al respecto uno de los miembros de CAMAWARI plantea lo siguiente sobre las acciones de la organización en ese sentido:

“Estuvo una multinacional pidiendo un aval de CAMAWARI para poder ingresar al territorio, molestaron hasta que entraron allá y el Gobernador (indígena) les habría dado el aval, realmente hasta dónde, no sé si es cierto. Nosotros (CAMAWARI) llegamos a saber que habían entrado allá y como organización nos manifestamos, llamamos al Gobernador y le preguntamos por qué estaban allá esos señores, quién los autorizó. Hemos dicho nosotros, que no sólo puede ser el permiso del Gobernador, que para eso se tiene que haber consultado con la organización CAMAWARI, además que sea consultado con las comunidades y con todo el resguardo, por medio de la asamblea.”

En Ricaurte hasta la actualidad no hay explotaciones mineras y la organización indígena ha sentado posición y encaminado acciones para regular el trabajo de exploraciones mineras. Mecanismos como el Plan de Vida y los reglamentos internos consignan y reflejan el rechazo que tienen a la gran minería por el temor a la intensificación del conflicto, la afectación de lugares sagrados y los daños ambientales.

“Algunos resguardos tenemos nuestros reglamentos internos, y dice una frase, un artículo, ‘que toda empresa minera debe ser consultada por medio de la asamblea y la organización CAMAWARI’, mientras desde acá no se dé un aval, no hay nada; y si se meten a la fuerza, para eso está la guardia.”

En la confluencia reciente del conflicto armado de Ricaurte con la protesta social, uno de los impactos que se pueden identificar es que la respuesta, que por un lado a debido atender los estragos del conflicto armado en situaciones que aún no son tenidos en cuenta o muy bien

atendidos tanto del que los grupos ilegales cometen contra la humanidad con masacre de civiles y una fuerte presión a la movilidad, la cual se ha soportado con las herramientas en los Autos de la Corte Constitucional 004 y 174 para la protección del pueblo awá, los Planes de Salvaguarda.

Pero por otro lado, son enfáticos contra los dos grandes momentos en que la Fuerza Pública intentó avanzar o avanzó, en el territorio: en los años 2006 – 2007 sin mucho éxito y ahora recién, en el año 2012 y 2013, con el golpe estratégico comentado en el capítulo anterior. Este último momento, que ha significado el retiro o desalojo de la guerrilla de los territorios de resguardo ubicados sobre el eje de la carretera al mar, ha abierto la posibilidad de que organizativamente la organización indígena fortalezca su presencia y comience a manifestarse exigiendo sus derechos para decidir sobre los intereses que consideran legítimos, sobre la vida y el territorio, referentes a la gran minería, pero que están amenazados con las propias incursiones de la Fuerza Pública.

“(…) la presencia de los actores, en particular la Fuerza Pública, creemos que la persecución a la guerrilla de las Farc es un factor distractor, porque sabemos que el territorio es rico en muchos minerales, de hecho Ricaurte está declarado como zona estratégica minera y en el 80% de los resguardos está identificada la minería. Esa es una amenaza latente y nosotros hemos rechazado este tema, porque si hay la posibilidad de trasnacionales y multinacionales, créame que aquí estamos rechazando esas cosas. No a la minería porque eso va a afectar mucho a los territorios.”

Esta dinámica de protesta, llevada a cabo por la organización indígena gracias a mayores garantías de actividad social en el territorio, ya sin la presencia dominante de las Farc, ha encontrado otras dificultades en el involucramiento que se le ha hecho mediante coacción y señalamiento por parte de los organismos judiciales y la Fuerza Pública al trabajo que adelanta en los territorios, del cual, la oposición a la minería ha sido uno de los más visibles recientemente, entre todos los que la organización lleva a cabo.

Con el giro en la dinámica del conflicto actual en el que la Fuerza Pública se ha dirigido a desarticular las redes de colaboración a la insurgencia, esta ha inmiscuido a líderes indígenas, lo que activó la tercer protesta social en julio del año 2013, en la que durante una semana, la organización llevó a cabo una asamblea permanente y el bloqueo a la vía Pasto-Tumaco en la cabecera municipal de Ricaurte, para solicitar medidas frente a los efectos que tiene el conflicto armado entre sus miembros con un especial énfasis en la detención en abril del mismo año de tres comuneros señalados de hacer parte de las Farc, el atentado contra un gobernador de la guardia indígena en mayo y el allanamiento a la vivienda de un consejero mayor y exgobernador de cabildo.¹⁵

“En julio tuvimos que movilizarnos, defendiendo la vida y el territorio. El problema era que muchos compañeros teníamos orden de captura, estábamos en manos de la Fiscalía, el problema es que nosotros como organización a cada hora entramos a las comunidades; el trabajo no es solamente

¹⁵ Ver CAMAWARI, hoy inicia la movilización awá. Comunicado CAMAWARI 004-2013. Julio 1 de 2013. Consultado en: <http://www.cric-colombia.org/portal/camawari-hoy-inicia-la-movilizacion-awa/> Recuperado el 12 de octubre de 2013.

de oficina, el trabajo es siempre ir a los territorios, cuando hay mingas, ir a solucionar los problemas porque los gobernadores de pronto no están en la capacidad, entonces la gente piensa que como nosotros estamos allá, que los líderes se van a charlar con los actores armados.”

En ese sentido, la protesta social indígena se percibe en proceso continuo de fortalecimiento con los procesos que se han emanado de los autos constitucionales, los planes de salvaguarda, la construcción de la jurisdicción especial indígena, la creación de la guardia indígena desde hace unos cuatro años, entre otros elementos. Se ha aprovechado espacios para llevar a cabo la protesta social y el trabajo en los territorios, pero la dinámica actual de conflicto los obliga a dirigir sus esfuerzos en marcar una distancia respecto a todos los actores armados y posicionar una actitud de rechazo a la gran minería.

Por otro lado, también recientemente, hay evidenciada una protesta social en junio de 2013 contra la empresa MK, una contratista de Ecopetrol para el mantenimiento del Oleoducto Transandino, la cual consistió en el bloqueo a los trabajos de los operarios por parte de habitantes de la Vereda San Pablo, descontentos con el manejo de la empresa y el incumplimiento de algunas obras para la comunidad. En un pliego de peticiones los habitantes solicitaban tres cosas: que la empresa contratara personal de la comunidad, cofinanciar un puente que une a la vereda con el casco urbano y el mantenimiento de las vías por las que transitan los vehículos de la empresa.

En los reclamos de la comunidad por este tema, se identifica un respaldo institucional de la alcaldía local mediante pronunciamientos dirigidos a la empresa cuestionando su manejo en la socialización de proyectos y avances de las obras y contratación de personal, solicitando que cualquier tipo de trabajo que se realice, sea consultado con la autoridad municipal.

De la serie de hitos de protesta social se puede destacar un último elemento: la posición de las organizaciones sociales indígenas y no indígenas y la institucionalidad local, reclama insistentemente ser consultada e incorporada a las actividades de las cadenas productivas de los procesos mineros y petroleros, por lo que ponen de presente los derechos a la consulta previa, la incorporación laboral y la distribución de los beneficios en obras sociales.

Actores protagónicos asociados.

El municipio de Ricaurte, por el hecho de tener una mayoría de población indígena, su base organizativa principal se manifiesta en formas de organización indígena del tipo cabildo, representado en el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI, el cual integra 11 resguardos indígenas con 16 cabildos que los administran.

CAMAWARI es una organización creada en 1992 creada para rescatar la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía con el influjo de la necesidad de establecer procesos organizativos de la población indígena promovida desde los años ochenta por el Consejo Regional Indígena del Cauca

- CRIC y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, en donde se gestaron movimientos históricos de recuperación de tierras, la cultura y la autonomía indígena.

CAMAWARI se ha consolidado como la organización legítima que representa a las comunidades y resguardos de Ricaurte. Su estructura organizacional se ha definido como una serie de elementos básicos que coadyuvan a garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento, representados de esta manera:

-La Asamblea General.

-El Consejo de Autoridades Indígenas.

-El Equipo de Coordinadores.

La estructura administrativa está integrada por el Coordinador general, el Tesorero, el Secretario, el Asistente contable y los Coordinadores de los programas: Etno-salud, Etno-educación, Producción tradicional y sostenible, Territorio, Organización y justicia, Cultura y comunicación, Mujer y familia y Plan de Salvaguarda.

La reglamentación interna basada en el Plan de Vida Awá para fortalecimiento para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mismas a corto, mediano y largo plazo; los estatutos establecidos por la Asamblea general para el funcionamiento de CAMAWARI; el Manual de Funciones; el manual de procedimiento contable, para la regulación y el manejo de los recursos económicos de la organización; el Reglamento Interno de Trabajo, que son las normas a seguir dentro de los procesos desarrollados por el equipo de coordinadores y el Reglamento Interno o Derecho Propio, que son normas construidas por la comunidad para la aplicación de la justicia al interior de los resguardos (CAMAWARI, 2009).

En el año 2002 se elabora el “Plan de Vida” de CAMAWARI, que viene siendo como la “hoja de ruta” que guía las acciones y los intereses de la organización. En ella se establece como misión lo siguiente: “luchamos por la defensa (sic) nuestro territorio, la cultura, los principios, las reivindicaciones de los derechos propios mediante el trabajo, formación y capacitación en diferentes programas elaborando y gestionando proyectos a nivel Regional, Nacional e Internacional para mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades indígenas Awa del Municipio de Ricaurte.”.

Las orientaciones emanadas del Plan de Vida CAMAWARI, están enfocadas a un nivel de acción que se desarrolla por la vía del aprendizaje y la implementación de iniciativas propias o venidas de fuera, que pasan por la generación de recursos que se distribuyen entre la comunidad. En otras palabras, se percibe desde el plano misional de la organización, un encauzamiento hacia la cooperación, concibiéndose de alguna manera como un ejecutor de recursos que con la vía para lograr el fortalecimiento del territorio, la cultura y el derecho propio.

Los canales que se llevan a cabo para sentar posición frente a los efectos de la confrontación armada se llevan a cabo por canales informativos en los que se difunde la denuncia de

determinados impactos sufridos en el desarrollo de acciones militares de los grupos armados, por ejemplo, con los comunicados que dan cuenta de los daños ambientales ocasionados por parte del Ejército Nacional en la Reserva Natural La Planada en el año 2011, en la que se realizó audiencia Pública el día 26 de mayo de 2011 con el objetivo de dar a conocer a todas las Entidades del orden Municipal, Departamental, Nacional e Internacional la forma como el Ejército Nacional durante su estadía tumbó el bosque primario, destruyó las parcelas de investigación que viene desarrollando el Instituto Alexander Von Humboldt y arrojó gran cantidad de desechos no degradables.¹⁶

En definitiva, se podría señalar que entre los efectos recientes que las dinámicas propias de la confrontación armada ha tenido en Ricaurte, si bien ha golpeado duramente a la población indígena mediante el asesinato, el desplazamiento, la confinación, la pobreza, entre muchos otros, por otro lado como comunidad le ha permitido ir fortaleciendo su organización para exigir la atención del Estado y llamar la atención de otras instituciones u organismos multilaterales, logrando alguna interlocución y acceder a espacios de representación local como la Alcaldía, la que han ganado desde hace cuatro periodos y actualmente un consejero mayor de CAMAWARI ocupa el cargo.

Se vislumbra hacia el futuro cercano una perspectiva de mayor concierto de la organización social en Ricaurte representada en el Cabildo Mayor Indígena de Ricaurte – CAMAWARI en el escenario de la protesta y la movilización social, que no solamente sentará posición frente a los embates del conflicto armado en sus territorios, sino que además puede llegar a plantear direccionamientos en temas referentes a la economía local y la participación social y política, entre otros.

¹⁶ Ver Comunicado a la Opinión Pública. CAMAWARI. Sin fecha. Consultado en: www.cms.onic.org.co/wp-content/.../comunicado-pialapi-JULIO-16-2012.pdf Recuperado el 12 de octubre de 2013.

EL MUNICIPIO DE IPIALES

Delimitación territorial y temporal del estudio.

El municipio de Ipiales está ubicado en el sur del Departamento de Nariño, en la subregión denominada la Ex provincia de Obando, formando parte del denominado altiplano Tuquerres-Ipiales, en la cordillera centro oriental de los Andes. Tiene una extensión territorial de 1.646 Km², en un terreno ondulado. Su cabecera municipal tiene una altitud de 2.900 m.s.n.m. (PBOT)

La posición de Ipiales le permite tener límites municipales, departamentales y nacionales. Al occidente limita con los municipios de Aldana y Carlosama; al norte con los municipios de Pupiales, Gualmatán y Contadero; al oriente con los municipios de Puerres, Córdoba, Potosí y con el Departamento de Putumayo; al sur con la República de Ecuador. La población de Ipiales se encuentra ubicada sobre la vía Panamericana que conecta el interior del país con la República de Ecuador, a través del puente internacional de Rumichaca.

La población de Ipiales está proyectada para el año 2013 en 132.438 habitantes, de los cuales 93.858 (70,8%) viven en la cabecera, mientras que 38.580 (29,2%) viven en el resto. Teniendo en cuenta la fecha del último censo, el año 2005, en donde se reportaban 109.127 habitantes, desde ese año hasta el presente la población ha venido creciendo a un ritmo del 2,6% promedio anual. (DANE, 2005)

Según los datos del censo 2005, el 48,3% de la población son hombres y el 51,7% restante son mujeres. En cuanto a las edades, se puede decir que la población de Ipiales es joven en transición, ya que el 40,5% se encuentran entre los 0 y 19 años, pero las edades mayores tienden a mostrar un engrosamiento paulatino. De lo anterior, se infiere que hay una tasa de dependencia juvenil bastante moderada, la cual llega al 50%. Por su parte, la población senil, aunque es baja, representa solo el 6,5% del total de población y la tasa de dependencia igualmente es bastante baja, en el 10%.

La zona urbana de Ipiales está dividida en 11 comunas y la zona rural comprende 6 corregimientos que se denominan San Juan, Las Lajas, Yaramal, La Victoria, Las Cruces y Jardines de Sucumbíos. A su vez existen 53 veredas, las cuales están agrupadas de la siguiente manera:

Corregimiento San Juan: Lomas de Suras, Camellones, Laguna de Bacca y Boquerón.

Corregimiento Las Lajas: El Placer, Tola de Las Lajas, Cofradía.

Corregimiento Yaramal: Santafé, Puente Nuevo, El Rosario, Tequez, La Floresta, Llano Grande y El Mirador.

Corregimiento La Victoria: El Salado, El Cultún, San Antonio, Villamoreno, El Teliz, Arrayán, Villaflores, San José Alto, San José Bajo, Exfloría, Anzuay, San Jorge, La Estrella, Brisas, Santa Lucía y

Fuente: Contraloría Municipal. 2006.

Nota: El área identificada en el mapa 1 como área de bosque al suroriente del municipio en el año 2006, corresponde actualmente al corregimiento Jardines de Sucumbíos, creado en el año 2006.

Las coberturas de servicios públicos son buenas en términos generales. Hay una cobertura casi universal de energía eléctrica, la cual en 2005 llegaba al 97% de las viviendas. El único pequeño rezago que se presenta en Ipiales es a nivel del acueducto y el alcantarillado en las zonas rurales, ya que esta llegaba al 83,1% y el alcantarillado a 71,8%. Adicionalmente, cerca de la mitad de viviendas, un 43,6%, contaban con servicio telefónico.

A pesar de estos indicadores positivos en cuanto a educación y servicios públicos, la condición de pobreza en las Necesidades Básicas Insatisfechas, aunque es moderado, resulta siendo alto para los valores ya mencionados, puesto que el 30,6% presentan NBI, y este se reduce a la mitad en la zona urbana a 17,7% y se incrementa el doble en la zona rural a 57,7%.

Dinámicas de la seguridad y el conflicto armado.

Hitos principales y sus efectos sobre la población de cada una de las zonas.

Las cifras estadísticas de impactos del conflicto armado a la población de Ipiales entre los años 2005 y 2013, suministrados por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, muestran que, en términos generales, del total de víctimas durante el periodo ha habido una menguada afectación a la población civil y que hubo un incremento notorio en los años 2007 y 2008, para descender un poco en 2009 y 2010 y presentarse de nuevo un incremento en 2011 y 2012, siendo estos últimos los años de más alto impacto del conflicto armado, con cifras que superan las 700 personas víctimas. Para el año 2013 la proyección es hacia un descenso significativo.

Por el tipo de hecho, el desplazamiento es el que concentra la mayor parte de víctimas, representando dos terceras partes del total aproximadamente. Sin embargo se observa que dentro del total de delitos este ha ido perdiendo participación a lo largo del periodo, puesto que en el año 2005 respondía a cerca del 90% de los casos totales, pero en el año 2012 su incidencia ha bajado a cerca del 50%. El desplazamiento tiene un comportamiento similar a la dinámica general de víctimas con las variaciones temporales que vimos anteriormente.

Al tiempo que el desplazamiento ha venido perdiendo participación en el total general de víctimas, otros hechos como la amenaza y los actos terroristas se han disparado en los

últimos años, ganando participación sobre una quinta parte del total de víctimas, cuando en los primeros años del periodo raramente se presentaba. Por su parte, hechos como el homicidio y la perdida de bienes muebles o inmuebles y las minas antipersonales se incrementaron en el año 2011, pero rápidamente volvieron a descender significativamente al año siguiente, sin mostrar tendencias definidas en su evolución. Otros hechos como la desaparición forzada, el secuestro, los delitos sexuales y la vinculación de niños se presentan marginalmente.

CUADRO 1

VICTIMAS POR HECHO VICTIMIZANTE EN EL MUNICIPIO DE IPIALES 2005-2013										
HECHOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TOTAL
Desplazamiento	284	229	454	503	324	298	386	394	120	2992
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	2	28	58	1	92	19	146	41	67	454
Homicidio	20	72	89	76	40	11	59	8		375
Amenaza		14	10	21	25	36	52	173	23	354
Acto terrorista	7	27	5	2	57	38	44	119	74	373
Minas Antipersonal	6	1		1		6	15	2		31
Desaparición forzada		16	3	2	4			5		30
Secuestro	2	1	2				1	1		7
Delitos contra la libertad y la integridad sexual	1							1		2
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes		2								2
Total	322	390	621	606	542	408	703	744	284	4620

Fuente: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV

* Datos con corte al 01 de diciembre de 2013.

Lo visto en las cifras de víctimas durante el periodo 2005-2013 deja entrever que pueden estar ocurriendo cambios cualitativos en la forma de operar de los grupos armados según el tipo de afectación que están generando en la población civil. Una hipótesis que surge, es que posiblemente los grupos armados ilegales estén recurriendo a la extorsión como fuente de financiación, mediante amenazas contra la vida de empleados y comerciantes ligados al sector formal e informal de la economía, cometiendo atentados, muchas veces con explosivos, a los locales comerciales donde se desarrollan las actividades económicas, cuando no se produce el pago de la extorsión.

La revisión de información está delimitada para el periodo correspondido entre los años 2009 y junio del año 2013, del cual se obtuvo el reconocimiento de 36 hechos que hacen parte del conflicto armado. De éste total, 18 fueron promovidos por la guerrilla de las Farc, principalmente por el Frente 48; 8 hechos obedecieron al Ejército Nacional; 4 a la Policía Nacional; 2 a la delincuencia común y otras 2 más no precisa sobre los autores del hecho. A continuación se describirá la historia y la dinámica de cada uno.

Actores protagónicos: su evolución y transformación en el periodo objeto de estudio.

En el municipio de Ipiales, la acción de los grupos armados se comienza a manifestar desde el año 1987, con la creación del Frente 32 de las Farc, perteneciente al Bloque Sur, que motivó el traslado del Frente 2 desde el sur del Departamento del Caquetá a Nariño, considerado junto a Putumayo por Ávila (2009) la retaguardia de las Farc que eran empleadas como sitios de descanso y entrenamiento.

Más tarde, en el año 1993, a raíz de la Octava Conferencia, las Farc oficializaron el traslado definitivo del Frente a los límites entre Putumayo, Nariño y Cauca y su paso a conformar el Comando Conjunto de Occidente, mientras que una comisión de esta, la Omar Quintero, había logrado consolidar el paso hacia el pacífico por el sur del departamento y se convirtió en el Frente 48.

El Frente 48 de las Farc tiene su principal operación en el Departamento del Putumayo, pero el municipio de Ipiales, por sus condiciones geográficas y por tener las mayores facilidades de movilidad fronteriza, permitía el tráfico de armas desde el Ecuador, y su transporte directo hacia el Putumayo, sin atravesar centros urbanos o zonas de dominio

de la Fuerza Pública, así como la conexión con la Columna Móvil “Mariscal Antonio José de Sucre”.

De esta manera, se configuró en Ipiales una presencia de las Farc que se concentró en dominar las zonas rurales desde el Corregimiento La Victoria hacia el suroriente del municipio, dominando los pasos fronterizos y atacando la zona petrolera en el Vereda El Empalme del Corregimiento de Cofanía –hasta ese momento sin definir administrativamente- o Jardines de Sucumbíos -como se le llamó con su constitución formal y anexión a Ipiales en 2010. En estas regiones se consolidó un dominio territorial que se posibilitaba por la ausencia de la Fuerza Pública. Uno de sus logros fue suspender la explotación petrolera por muchos años en El Empalme.

Sólo hasta mediados de la década del 2000, el Estado toma la iniciativa por ganar el control de la región con la creación de subestaciones de Policía en La Victoria y la reactivación de la producción petrolera en los pozos, operados directamente por Ecopetrol, para lo cual se conforma un grupo especial para la protección de la infraestructura petrolera llamado el Batallón Especial Vial y Energético #9.

Totalmente desligado de lo anterior, se observa un conflicto promovido por bandas dedicadas al narcotráfico y el contrabando que tienen particular influencia en el casco urbano de Ipiales y los pasos fronterizos en las zonas más cercanas a esta. De allí han estado participando desde el año 2010 grupos como “Los Urabeños” y narcotraficantes venidos de otras regiones y países. Algunos integrantes de estos grupos, también se han dedicado a la extorsión y el homicidio a los comerciantes, acarreando situaciones de violencia impactante en el casco urbano.

Esto ha motivado que la dinámica de este conflicto evolucione actualmente como un esfuerzo binacional de la Policía aduanera para cerrar pasos fronterizos ilegales por donde transita la droga, las armas, los explosivos y el contrabando; pero también por allí transitan las comunidades indígenas que históricamente han estado asentadas en los límites binacionales y aprovechan los mercados de ambas naciones para comercializar sus productos, lo cual ha derivado en otros actores que se suman al conflicto y la emergencia de protestas sociales.

A continuación se describirá la dinámica de cada uno de estos actores involucrados en el conflicto durante el periodo de análisis 2010-2013.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

El análisis de conflicto social en Ipiales a través de la recopilación de información documental permite identificar un eje principal: el control de zonas rurales por parte del Frente 48 de las Farc, específicamente el corregimiento La Victoria. El escenario en el que se desarrolla el conflicto en Ipiales es esencialmente rural, ya que 31 de las acciones se llevan a cabo en áreas rurales, lo cual deja ver una fragmentación del poder territorial en el municipio, con un contraste fuerte entre el dominio estatal en el área urbana frente a un dominio de la guerrilla en el área rural más alejada del centro urbano.

Las acciones de las Farc consistieron básicamente en hostigamientos y atentados con explosivos a la Fuerza Pública. Una de las acciones más recurrentes consiste en el hostigamiento rápido y sin mucha capacidad ofensiva contra la subestación de Policía del corregimiento La Victoria utilizando francotiradores. Se trata de disparos y, en determinadas ocasiones, lanzamientos de rockets, que se hacen desde los alrededores del centro poblado contra la subestación policial que no producen mayores daños, pero que sí permiten contener a la Fuerza Pública mientras se realizan traslados de las tropas guerrilleras a través de la frontera internacional que está ubicada a un costado del lugar, por el cual se mueven armas y drogas desde y hacia el Ecuador.

Vale la pena resaltar que desde mediados del año 2011 no se volvieron a presentar los hostigamientos, que fueron generalizados entre desde el año 2007. Esto puede obedecer al repliegue o la pérdida de dominio territorial que tuvo la estructura guerrillera luego de la serie de bombardeos a los campamentos centrales del frente que efectuó la Fuerza Aérea en operación conjunta con el Ejército y la Policía desde noviembre del año 2010.

El primero se produjo en la vereda La Estrella que también hace parte del corregimiento La Victoria. El resultado de la operación fue la destrucción del campamento y la baja de diecisiete guerrilleros, entre ellos nueve mujeres y ocho hombres, más dos capturados. Para las autoridades, en el campamento habrían unos 35 hombres comandados por alias “Euclides, quien no resultó afectado en la operación. Los soldados de contraguerrilla aseguraron la zona y dieron un paso fundamental en el control territorial. El impacto de la operación generó un desplazamiento masivo de personas hacia el Ecuador y la cabecera urbana de Ipiales de unas 115 familias, lo cual llamó la atención de algunos organismos de control que advirtieron falta de cuidado en las operaciones desarrolladas cerca de las viviendas de la población civil.

Casi un año después, en septiembre del año 2011, en la vereda San Jorge, la cual hace parte del corregimiento La Victoria, se efectuó un segundo bombardeo, con menos resultados en cuanto al número de bajas, ya que murieron por lo menos cuatro guerrilleros, en esta ocasión alias “Euclides”, estaba entre los fallecidos. La operación

significó el desplazamiento definitivo de los campamentos del frente en la zona, se vio altamente debilitada, aunque no desarticulada.

En este proceso de recuperación del control territorial, el elemento de la coacción sobre la población civil ha sido uno de los factores que, por un lado han mantenido la influencia de las Farc para obtener apoyo social y, por otro lado, una de las dificultades que ha debido sortear el intento de la Fuerza Pública por establecer un poder local y cortar las bases de apoyo social a la guerrilla, cayendo en errores judiciales y prácticas de violación de Derechos Humanos.

En algunos episodios se ha dejado entrever la complejidad del orden local allí impuesto, dejando a la población a merced de amenazas de todos los actores armados. Algunos notoriamente sentidos en la comunidad el mero señalamiento que en marzo de 2011 realizó el Ejército con nombre y apodo propio a habitantes de la zona, sindicándolos de pertenecer al Frente 48 de las Farc. Esto generó sensación de rechazo entre los habitantes de la comunidad, quienes manifestaron su reconocimiento a las personas que los volantes emitidos por el Ejército señalaban. Esto tuvo un llamado de atención del Comité Permanente por los Derechos Humanos para advertir las violaciones que se infringían con este tipo de acciones y la amenaza que representaba para los implicados.

Así mismo, se registran acciones de la población de algunos barrios en rechazo a las instalaciones de la subestación de Policía de La Victoria, argumentando el temor que sienten de ser afectados en algún ataque que se llegare a efectuar contra la Fuerza Pública allí asentada. A pesar de los llamados hechos a diferentes organismos de control y la advertencia de que podrían desplazarse en protesta a la Plaza 20 de Julio de Ipiales, estos llamados no parecen haber tenido mayores consecuencias o resultados.

Ahora bien, ya sin capacidad ofensiva, la presencia de las Farc continúa en la zona mediante el sostenimiento de laboratorios de producción de cocaína e intentando reacomodarse con la adopción de estrategias para combatir la afectación sufrida por los ataques aéreos consistentes en la adquisición de armamento con munición antiaérea, lo que demuestra la reciente incautación en mayo del año 2013 de 500 cartuchos calibre punto 50 para derribar aeronaves. La insistencia por parte de las Farc en mantener la presencia en esta zona, da cuenta de la importancia estratégica que reviste. Sin embargo, luego del segundo bombardeo en julio de 2011, la actividad de confrontación de las Farc hacia la Fuerza Pública se reduce notoriamente.

La Fuerza Pública.

En el municipio de Ipiales hay una importante presencia de la Fuerza Pública dada por la existencia del Batallón Mecanizado #3 José María Cabal en el casco urbano. Esto ha permitido mantener asegurado el paso fronterizo binacional de Rumichaca y las vías principales de tránsito hacia el interior del país, al Ecuador y la carretera al mar.

Adicionalmente, desde hace 6 años se ubicó la presencia de Policía en el Corregimiento La Victoria con la creación de una subestación policial en febrero del año 2007. A su ingreso, se lanzó una ofensiva para debilitar económicamente a las Farc con la incautación de grandes volúmenes de munición y droga. Unas de las primeras acciones registradas fueron la incautación de más de 3.000 cartuchos de diferentes calibres, 150 kilos de cocaína y latex producidas en el mes de marzo del mismo año.

Sin embargo el nuevo puesto de Policía se convirtió en uno de los objetivos primordiales de confrontación de las Farc, que insistentemente atacaron la sede y aprovechaban los movimientos de sus unidades para prepararles atentados y emboscadas en la carretera. Tan sólo a tres meses de instalada la subestación, un grupo de policías fue atacado con cilindros bomba y ráfagas de fusil cuando transitaban dieciséis miembros de la Policía por la carretera a Ipiales a bordo de un camión alquilado, dejando como saldo tres muertos y diez heridos. En ese momento se señalaba el ataque como “previsible” o “cantado” por el dominio que mantenían los insurgentes en la zona.

En esas circunstancias, la subestación de Policía del Corregimiento La Victoria y sus unidades se convirtió en un blanco fácil y su acción terminó limitándose a intentar asegurar el centro poblado. La acción ofensiva de la Fuerza Pública estuvo a cargo principalmente del Grupo de Caballería Mecanizado #3 José María Cabal y el Batallón de Contraguerrilla #90 con las Operaciones “Frontera” y “Marcial” siendo esporádicamente objeto de ataques.

Sólo recientemente se ha dado la iniciativa por ingresar a las zonas que dominaba el Frente 48 de las Farc desde el Corregimiento La Victoria hacía el suroriente del municipio. Actualmente, debido a la serie de bombardeos contra los campamentos centrales, se ha logrado consolidar un dominio en esta zona. Inicialmente se trató de la Operación “Fortaleza III” en el que la Fuerza Aérea atacó un campamento central de las Farc y por tierra los Comandos Jungla entraron a asegurar el área. Posteriormente se efectuó el bombardeo en el que dieron de baja a alias “Euclides”, cabecilla de la comisión encargada del control al paso fronterizo y con esto se consolidó el dominio de la Fuerza Pública en este territorio, expresado también en el anuncio del traslado de tropa del Grupo de Caballería Mecanizada General José María Cabal al corregimiento de forma permanente, hecho en febrero de 2012. Al respecto comenta lo siguiente el Personero municipal:

“La Victoria la ha recuperado la Fuerza Pública, porque antes no había presencia, ni siquiera del Ejército; ahora es permanente.” (Entrevista al Personero Municipal de Ipiales, 21 de noviembre de 2013).

De otra parte, en Jardines de Sucumbíos está presente el Batallón Especial Energético y Vial #9, que hace parte de la Sexta División del Ejército, el cual cumple un papel particular de protección a la infraestructura de los 4 o 5 pozos petroleros que hay en explotación en la vereda El Empalme de Jardines de Sucumbíos. Al ser de protección de la infraestructura, se ha configurado una situación en la que las Farc dominan el territorio, pero el Batallón protege con algún grado de éxito la infraestructura petrolera. Allí la disputa había sido baja por ausencia del Ejército en misión de control territorial y sólo recientemente se ha activado con el ingreso parcial que desde el Batallón de Infantería #25 y el Grupo Cabal de Ipiales se ha dado en el posterior avance desde La Victoria hacia el suroriente del municipio.

A comienzos del año 2013 se comienza a hacer notorio el minado de algunas zonas del municipio que por primera vez en nuestra información aparecen como epicentros de la disputa pero que han sido de dominio territorial de la guerrilla, tales como la vereda El Empalme del Corregimiento de Jardines de Sucumbíos, donde un miembro del Batallón Especial Energético y Vial N° 9 pierde la vida al activar un artefacto en medio de una operación de desminado que se desarrollaba con técnicos antiexplosivos, también se presentan intentos de atentar contra la Fuerza Pública instalando explosivos sobre las vías, como uno de los sucesos en febrero de 2013, donde tropas del Batallón de Infantería N° 25 logran hallar y desactivar dos recipientes llenos de explosivos y metralla con activación eléctrica.

De otra parte, la Fuerza Pública ha proseguido en la estrategia de los bombardeos, aunque no han tenido éxito en afectar directamente al Frente 48 de las Farc. El único reconocido en los medios de comunicación se habría presentado en abril del año 2013 por la información suministrada por la Personería municipal de Ipiales, que dejó dos civiles heridos y viviendas averiadas.

La presencia militar de la Fuerza Pública hasta el momento, básicamente está dada por el cuidado a la infraestructura petrolera, sin embargo, la comunidad que se ha asentado allí, no ha encontrado hasta el momento una presencia del Estado a nivel de la coerción ni mucho menos el Estado social. Así describe la situación el Personero municipal:

“Yo creo que el Estado, la presencia del Ejército, en esa zona, es para cuidar el petróleo, mejor dicho, la infraestructura de Ecopetrol; la población, abandonada por el Estado. Yo creo que si hay influjo de grupos armados (ilegales) sobre la población civil, yo creo que si

hay algún tipo de presión. Se siente fuerte cuando uno ingresa allá, nadie le dice nada pero uno sabe que está en el terreno que no pueda tener garantía con el Ejército o la Policía, obviamente si uno está en la base es otra cosa. Uno entra a un sitio donde el Estado no tiene fuerza... lógicamente, si a uno se lo quieren llevar, ¡se lo llevan! no necesita estar a unos 50 metros de la base y se lo llevan.” (Entrevista a Personero Municipal, 21 de Noviembre de 2013).

La escasa presencia del Estado en Jardines de Sucumbíos es una de las motivaciones más importantes para la protesta social como veremos en el capítulo siguiente. Lo importante de destacar aquí, es que en el desarrollo reciente del conflicto armado, se han activado zonas de confrontación surgidas a partir del avance de la Fuerza Pública sobre el corregimiento La Victoria y los repliegues a los que se vio sometida las Farc mediante el accionar de los ataques aéreos a puntos que eran considerados estratégicos para desenvolverse en la lógica fronteriza que se contempla en esta zona del país.

Las Bandas Criminales y el narcotráfico.

La presencia de las bandas criminales en Ipiales ha sido poco documentada, ya que no hay un reporte claro sobre el momento de la llegada, la permanencia y el accionar de estos grupos, aunque ha estado presente de muchas maneras principalmente en el área urbana. En la información recopilada para este trabajo, se puede establecer la presencia de miembros de distintos grupos ejecutando acciones esporádicas a lo largo del periodo. Por ejemplo, a finales del año 2007, se identifica el accionar de la “Organización Nueva Generación” u Ong, secuestrando a comerciantes de productos agrícolas y manejando cocinas de producción de alcaloides en viviendas del casco urbano.

El análisis de Ávila (2009), establece en el año 2008 la presencia del grupo “Águilas Negras” en Ipiales, lo cual indica que aquí como en otras regiones de Nariño, se pudo presentar una absorción del grupo Ong a las “Águilas Negras”. Sin embargo, no es claramente identificable una presencia sostenida y mucho menos señales de dominio territorial.

Por otro lado, a partir del año 2011 se determina la presencia de miembros de la banda criminal “Los Urabeños” en Ipiales, dedicados principalmente a la logística del narcotráfico a través de los pasos fronterizos como el puente de Rumichaca, entre otros¹⁷. Los niveles de violencia en el casco urbano de Ipiales ha sido reducida, de ello da cuenta una

¹⁷ Ver El Espectador
<http://static.elespectador.com/archivos/2011/01/d73ad3d228bb863d677149a103aff41b.pdf> recuperado el 12 de diciembre de 2013.

tendencia general a bajos niveles de violencia, sin embargo, la entrada de “Los Urabeños” pudo haber detonado una disputa a finales del año 2012 reflejada en una exacerbación del homicidio selectivo, la cual llamó la preocupación del gobierno departamental y nacional para contenerlo y movilizó a la población civil pidiendo el cese a la violencia.

Se manejó igualmente ciertas hipótesis en los medios y algunos habitantes de la ciudad, que comentaban de un ajuste de cuentas de narcotraficantes miembros de un cartel mexicano que habían sido robados por un taxista, o también, por parte de la policía departamental, que contempló la posibilidad de la existencia de asesinos en serie, descartando tajantemente la presencia de bandas criminales en Ipiales y que estuvieran involucradas con la situación, lo cual generó la crítica de diversos sectores.

Sin embargo, donde se ha hecho más notorio el accionar de estos es en la extorsión a comerciantes, de los cuales se ha conocido la captura de algunos de sus miembros durante el año 2013 recibiendo dineros producto de extorsiones.

Esto se puede reflejar, también desde tiempo atrás, en la preocupación que manifiesta el gremio de comerciantes de las plazas de mercado de Ipiales en septiembre del 2011, debido a que varios de sus integrantes fueron víctimas de extorsiones, lo que aparentemente llevó a algunos a abandonar la ciudad.

La ligazón entre extorsiones y actos terroristas se deja ver en algunos casos de atentados que se presentan en el casco urbano de Ipiales. A pesar los pocos registros recopilados, se puede mencionar uno ocurrido en junio de 2011 en el barrio Los Chilcos, dirigido contra comerciantes que desde tiempo anterior son presionados para acceder a algunas presiones económicas.

Ahora bien, faltaría un acervo documental más amplio para confirmar está hipótesis, pero hay indicios para señalar que algo similar puede estar ocurriendo en Ipiales, con especial incidencia en la zona urbana, así como cuáles son las motivaciones que han llevado a que diferentes grupos armados ilegales o de delincuentes se dediquen a centrar sus actividades en este tipo de hechos.

En conclusión, el tema del conflicto en Ipiales pasa específicamente por el control que el Frente 48 de las Farc ha ejercido sobre pasos fronterizos con Ecuador que están aledaños al corregimiento La Victoria. Sin embargo, en la época reciente se asiste a un cambio de posiciones, tanto de las Farc como de la Fuerza Pública, que se han dado a raíz de los golpes que éste último ha propinado empleando el bombardeo por la vía aérea. De otro lado, ha tomado fuerza una situación de alza significativa de amenazas y actos terroristas que por el momento es interpretado como la extensión de fuentes de financiación de

diversos grupos armados ilegales sobre extorsión a la economía formal e informal y prácticas de terror cuando estas no se logran concretar.

Dinámicas de la protesta social y del movimiento social (Zona objeto de estudio). Línea de tiempo de hitos asociados con la violencia colectiva en el territorio.

Hitos principales y sus efectos sobre la dinámica de violencia colectiva.

Tres movimientos específicos concentran la mayor parte y las más connotadas movilizaciones en base a estas razones: aparecen a lo largo del periodo analizado en diferentes momentos, convocan a grupos numerosos de población, confrontan y alcanzan interlocución con las autoridades civiles de los niveles local, departamental y nacional, muestran una dinámica organizativa interna en la coordinación de acciones y se representan en líderes claramente distinguidos que toman la vocería del movimiento.

La comunidad de Jardines de Sucumbíos.

El primero de ellos tiene como protagonista a los habitantes de una zona rural de Ipiales que es conocida como Cofanía o Jardines de Sucumbíos, ubicado al extremo suroriental del municipio, el punto más alejado de la cabecera urbana, por el municipio de Ipiales desde el año 2010. Cofanía o Jardines de Sucumbíos es un área de difícil acceso, altamente selvático, que hasta hace poco no era reconocido administrativamente por ningún ente territorial. Allí habitan cerca de 3.500 personas, entre ellos colonos campesinos que llegaron desde los años setenta e integrantes de comunidades indígenas de las etnias Kofan y Awá que hacen parte de Nariño. En la zona hay cinco resguardos indígenas: uno de ellos es Ukhumari Kankhe de la etnia Kofan, con cerca de 45.000 hectáreas y otro es una parte de Santa Rosa de Sucumbíos, de la etnia Awá, que en total tiene alrededor de 1.140 hectáreas.

Cofanía o Jardines de Sucumbíos se conformó a partir de la explotación petrolera puesta en práctica a mediados de los años setenta, alrededor de los cuales se conformaron los caseríos más antiguos y más poblados como El Empalme. La explotación petrolera se abandonó a comienzos de la década del 2000 debido a la presión de constantes atentados y hostigamientos. Hasta hace poco, se pusieron en refuncionamiento tres de los pozos ya existentes y fueron hallados dos pozos nuevos. Se calcula que la producción de petróleo está cercana a los 230 barriles diarios y se prevé que con la exploración de 62 puntos con 36 de certeza de existencia de petróleo hasta el momento, la producción podría llegar a los 1.500 barriles al día.

Sin embargo, la comunidad de Cofanía o Jardines de Sucumbíos, que ha estado en un estado de “desconocimiento” para el Estado, se ha organizado internamente y tomado carácter de fundación para hacer requerimientos al Estado, antes en su única manifestación que habían tenido en la empresa Ecopetrol y ahora con el municipio de Ipiales, en el sentido de percibir mayor participación e inversión efectiva de los recursos que genera la explotación petrolera en el territorio.

Las movilizaciones se han manifestado en bloqueo a los pozos, manifestación en recintos políticos y paros de actividad en las instituciones oficiales que allí tienen presencia. La primera de estas movilizaciones se llevó a cabo en octubre de 2009 y consistió en el bloqueo a las vías de acceso que conducen a los pozos. Las peticiones de los manifestantes giraron alrededor de la inversión en educación, salud y vías, pero también se incluía la anexión al Departamento de Putumayo, convirtiendo el poblado en municipio.

Los manifestantes exigían la presencia de los Gobernadores de Nariño y Putumayo, desconociendo en un primer momento una comisión de la Gobernación de Nariño que se desplazó a la zona para intentar solucionar la protesta. Finalmente, el Gobernador de Nariño Antonio Navarro, asistió al lugar junto al Alcalde de Ipiales y se firmaron algunos compromisos de inversión. Pocos meses después, en marzo de 2010, la comunidad se manifiesta nuevamente por lo que denominaban el incumplimiento de los acuerdos convenidos con la gobernación. Declaran algunos líderes que sólo un 10% se había cumplido de las promesas de construir una ciudadela educativa, abrir vías, llevar médicos, enfermeras y ambulancias y hasta donar zapatos para los niños.

La población de Jardines de Sucumbíos se reúne para discutir las acciones a seguir, vislumbrándose la posibilidad de nuevos bloqueos a los pozos. Simultáneamente, un grupo de coterráneos realizan una toma pacífica a sus instalaciones en la Asamblea Departamental en Pasto. Adicionalmente, se pone de manifiesto la afectación a los cultivos lícitos por la fumigación aérea con glifosato en varias veredas como Brisas del Gavilán, Frontera del Amarradero, Nueva Argentina, Ranchería y Santa Lucía, lo cual introduce un nuevo elemento a la movilización, llevando a los líderes a proponer planes de sustitución de cultivos. De nuevo se pone de presente la cercanía con el Departamento de Putumayo, recogida en esta consigna: “Nariño nos abandonó, el Putumayo nos acogió; por eso nos sentimos, putumayenses de corazón”.

En Pasto se llevó a cabo una reunión entre las partes, donde quedan establecidos desacuerdos acerca de los cumplimientos a los compromisos emanados de la movilización de octubre de 2009, Mientras que el vocero de la fundación sólo reconoció el nombramiento de personal médico y la entrega de una ambulancia, el Alcalde de Ipiales afirmaba haber cumplido con el 90% de sus compromisos.

En esa oportunidad, se avizoró un cambio en los planteamientos de la comunidad, quienes manifestaron la necesidad de ser reconocidos como corregimiento de Ipiales. Uno de los avances que parecen resultar de la reunión, es que en días siguientes, delegados de la Oficina de Derechos Humanos y Coordinación Humanitaria de las Naciones Unidas anunciaron una visita de verificación, con el aparente objetivo de determinar las ayudas humanitarias necesarias para la población.

Se desarrolló también una nueva reunión denominada cabildo abierto, esta vez en Cofanía o Jardines de Sucumbíos, organizada por el Gobernador de Nariño de ese momento, Antonio Navarro Wolff, para evaluar los avances de la construcción del colegio y entregar una cuantía de \$300 millones para atender otras problemáticas.

La disposición complaciente mostrada por la institucionalidad nariñense, generó rápidamente la reacción del Gobernador de Putumayo, quien en el mes de diciembre de 2010, salió a declarar a los medios de comunicación su intención de desarrollar planes para defender a Cofanía o Jardines de Sucumbíos como parte de su departamento. En sus palabras manifestó que: “Jardines de Sucumbíos pertenece históricamente a Putumayo, tenemos unos derechos adquiridos y Nariño no nos lo puede quitar (...) Todo el tiempo hemos atendido a esta zona. Allá existen escuelas, centro de salud, que se han mantenido con recursos del departamento”¹⁸.

Las intenciones del gobierno nariñense van más allá y llevan a que en mayo de 2011, el Alcalde de Ipiales visite nuevamente la zona para anunciar proyectos de infraestructura como la construcción de un acueducto, promesas que no se habían vislumbrado entre las exigencias de la comunidad en sus movilizaciones y que posiblemente responde a la tensión con el departamento del Putumayo.

En este propósito cumple un papel importante la empresa Ecopetrol, quien invierte parte de los recursos para sacar adelante los programas y fue invitada imprescindible de las reuniones que se ejecutaron. Junto a esta iniciativa, se mencionó algo que indicaría que el sector en ese momento ya se había legalizado como corregimiento por parte del gobernador, lo que definitivamente cerró el paso a la pretendida intervención del gobernador de Putumayo.

Durante un largo periodo de exitosa movilización y al vaivén de encuentros y compromisos, la dinámica se desactivó parcialmente, teniendo como fondo el afianzamiento de la institucionalidad de Ipiales en Jardines de Sucumbíos, estimulada con actividades como la creación de nuevos cabildos como “Aric del Sur Cristalina Dos”, la

¹⁸ Diario del Sur. “Gobernador advirtió que recuperará a Sucumbíos”. Diciembre 4 de 2010, Ed. 10124, Sec. Putumayo, Pág. 6B.

promoción de derechos étnicos que lleva a cabo la Personería municipal y la elaboración de un Plan de Desarrollo Integral propio para Jardines de Sucumbíos –ya no Cofanía- que se publicó en el año 2012 y que elaboró la Fundación.

En este año llega también el cambio de gobiernos territoriales y en los primeros días de mayo se hizo la primera visita oficial por parte del Gobernador Raúl Delgado y funcionarios de la Alcaldía de Ipiales, donde anunciaron los montos de inversión definidos en el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal, ratificaron la voluntad del Gobernador por presionar a Ecopetrol en la realización de consulta previa con las comunidades, así como fijar mayor inversión social y firmar un contrato para entrega de una retroexcavadora destinada a la adecuación de la malla vial.

Al mes siguiente, en junio del año 2012, resurge la movilización de la comunidad por medio de los docentes y estudiantes que deciden entrar en cese de actividades debido a la falta de pago del transporte escolar durante la vigencia en curso. Rápidamente, otras demandas se sumaron a la anterior, lo que constituyó no solo un paro del sector educativo, sino también de la comunidad en general, pasando por los servicios de salud e inspección de policía. Entre los temas adicionales estaba la reconstrucción de un puente derribado por las lluvias desde el año 2011, las promesas de adecuar dos kilómetros de una vía por parte de Ecopetrol y la retroexcavadora, entregada pero nunca vista, que el gobernador ofreció dar a la comunidad.

Esta movilización se extendió por más de una semana y obligó a funcionarios del gobierno local y regional a trasladarse a la zona para negociar nuevos acuerdos. Más tarde, en octubre del año 2012, durante doce días estuvo bloqueada la salida de crudo de los pozos petroleros¹⁹. Esta manifestación se levantó sólo hasta que se firmó un acta de acuerdos con el Gobernador de Nariño y la empresa Ecopetrol, según se dice *“para continuar inversiones sociales”*. Se podría decir, que estas nuevas movilizaciones, buscaban principalmente ponerle de presente a los gobiernos entrantes, la dinámica de acuerdo que venían trabajando con los gobiernos salientes y por el cual querían continuar. De esta manera, durante el año 2013, es evidenciable el avance de los compromisos que se venían discutiendo; “llegó la retroexcavadora”, pero más que eso, se inició la pavimentación de la vía, se logró nombramientos de docentes, entre otros.

En definitiva, hay algunos aspectos que llaman la atención de la movilización de Jardines de Sucumbíos. En primer lugar, la comunidad que la lleva a cabo, aprovecha con éxito la ventana de oportunidades que se abren ante la reanudación de la producción de petróleo

¹⁹ RCN Radio. “Tras acuerdos con Ecopetrol, levantan protesta en Jardín (Sic) de Sucumbíos”. Octubre 29 de 2012. Ver: <http://www.rcnradio.com/noticias/tras-acuerdos-con-ecopetrol-levantan-protesta-en-jardin-de-sucumbios-29705> recuperado el 17 de octubre de 2013.

en la zona y la indefinición administrativa de reconocimiento legal del territorio, anclada en una tensión interdepartamental entre Nariño y Putumayo, presionando al primero con sentirse más cercano al segundo para así estimularlo a agilizar las inversiones sociales que están en el centro de los objetivos de la movilización.

En segundo lugar, el énfasis puesto por la movilización en demandar atención del Estado para la distribución efectiva de los recursos generados por la extracción, sin plantear necesariamente el rechazo a las actividades extractivas, existentes o futuras, que se hacen a través de los pozos petroleros operados por Ecopetrol. En ese sentido, es una movilización que se caracteriza por fortalecer el Estado, reconociéndolo, más no por confrontarlo, negándolo en principio.

En tercer lugar, llama la atención que durante el periodo de tiempo analizado entre los años 2005 y 2013, no se hace evidente situaciones de injerencia de los grupos armados, ya sea atacando las instalaciones de los pozos o las baterías de la petrolera, llevando acciones militares en el centro poblado o interfiriendo políticamente en la comunidad movilizadora, lo que en muchas ocasiones trae consigo señalamientos de las autoridades civiles y/o militares respecto a infiltraciones de grupos armados en la protesta social. Se puede señalar a manera de hipótesis que podría tratarse de un caso en que la movilización es pretendidamente fuerte, organizada, institucionalizada, lo que contribuye a cerrar el paso a la injerencia de actores armados.

La población indígena frente al TLC.

Una segunda fuente de movilización destacada en Ipiales tiene que ver con la posición de los indígenas ante la política económica nacional de apertura neoliberal mediante la firma de Tratados de Libre Comercio. Los contextos de negociación de estos tratados son el escenario mediante el cual constantemente se movilizaron los grupos indígenas de los diferentes resguardos de la ex Provincia de Obando, pertenecientes principalmente pertenecientes al pueblo de los Pastos, que se reúnen en Ipiales y realizan marchas para rechazar los tratados.

Algunas de las movilizaciones responden a jornadas nacionales de movilización en donde Ipiales se hace presente y otras son organizadas local o regionalmente. Por lo general se desarrollaron como marchas numerosas con hasta cerca de 10.000 personas que recorrieron las calles de Ipiales y finalizaron en el puente internacional de Rumichaca. La motivación esencial que lleva a movilizar a los indígenas de la región es por la importancia que reviste la producción de leche, uno de los primeros renglones de la economía agropecuaria de Ipiales y la Ex Provincia de Obando.

Una de las marchas se desarrolló en mayo de 2010 con la participación de “miles” de integrantes de 18 resguardos indígenas, entre los que se encuentran los de Pástas, de Aldana; San Juan y Yaramal, de Ipiales; Males, de Cordoba; Tescual, de Puerres; Mueses, de Potosí; Aldea de María, de EL Contadero; Inchuchala, de Pupiales; Muellamues y Colimba, de Guachucal; Chiles y Mayasquer, de Cumbal; Yascual, de Tuquerres, entre otros. En esta ocasión, se intentaba llamar la atención de la afectación del sector agropecuario en general y el sector lechero en particular, con la negociación que ese mismo día se ultimaba con la Unión Europea en Bogotá.

Otra marcha se efectuó el 20 de julio de 2012, con un desarrollo similar a la anterior, solo que en esta ocasión se hablaba de unas 10.000 personas participando, pertenecientes a 23 resguardos indígenas y se mantuvo bloqueada pacíficamente el puente internacional de Rumichaca por cuatro horas. La movilización se efectúa a los dos meses de haber entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En esta ocasión, más que el rechazo al mismo, lo que hay es un llamado al gobierno nacional a acatar las peticiones de mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y asegurar los planes de salvaguarda reconocida en la Constitución de 1991.

Se destaca de estas movilizaciones que se desarrollan con el ánimo de llamar la atención sobre el papel que juegan las comunidades en medio de tales convenios internacionales de comercio, pero parecieran no generar mayores efectos o interlocución por parte de las contrapartes del gobierno nacional encargadas de la negociación de los tratados.

A pesar de la amplia convocatoria, resultan movilizaciones circunstanciales que no pasan del plano simbólico. Valdría la pena analizar con mayor detenimiento como estas se insertan en movilizaciones campesinas como la acontecida en agosto y septiembre de éste año, el cual puede leerse en clave de los impactos que estos tratados han ocasionado en la producción agropecuaria del país, con fuertes arraigos en regiones como Nariño, Cauca, Boyacá, Santander, entre otros. Sin embargo, antes que los tratados por sí mismos, es la condición de rezago competitivo del sector productivo de Colombia el mayor causante de la pérdida de dinamismo de las diferentes economías agrícolas y pecuarias.

Transporte de carga frente a la Comunidad Andina.

Por último, una tercera serie de movilización social en Ipiales está relacionada con el gremio de transportadores de carga. Está es una de las movilizaciones de mayor impacto, puesto que tiene repercusiones nacionales e internacionales. Estuvo presente a lo largo de la mayoría del periodo de tiempo analizado, entre 2008 y 2013, convoca gran cantidad

de personas, genera interlocución con los representantes del gobierno nacional y muestra signos de organización interna fuertes.

En Ipiales, muchas familias viven del transporte de carga y representando uno de los principales renglones de la economía en general. Tienen sede allí, varias de las empresas transportadoras, así como la Asociación de Camioneros de Colombia-ACC que agrupa una gran cantidad de transportadores del país. Por ser una dispensa agrícola de primer nivel a nivel nacional y la condición fronteriza con Ecuador, país con el que hay una fuerte relación comercial, la presencia de transportadores es alta en Ipiales.

La Comunidad Andina de Naciones-CAN reglamentó en el año 1997 el comercio de mercancías entre los países miembros mediante la Decisión 399. Dicha norma permite y facilita el transporte internacional entre los distintos países. Sin embargo, en Ecuador esa norma no se aplicó de la manera en que pretendía hacerlo la decisión de la CAN y empezó a impedirse el paso de camioneros colombianos hacia el Ecuador.

Esto ha motivado continuas protestas de los camioneros que alegan un trabajo en igualdad de condiciones. Adicionalmente, se establecen cuestionamientos por la eficiencia y disponibilidad de los puestos de control fitosanitario a lado y lado de la frontera. La primera movilización registrada se desarrolló en febrero de 2008, donde participaron cerca de 2000 personas entre transportadores y trabajadores de las empresas importadoras y exportadoras de alimentos, tanto de Ipiales como de Tulcán en Ecuador. La movilización consistió básicamente en la restricción del paso a los camiones ecuatorianos que pretendieran ingresar a Colombia, la parálisis de los vehículos nacionales y una huelga de hambre de algunos transportadores. Durante el transcurso hubo enfrentamientos con la Fuerza Pública, puesto que estos se dedicaban a proteger los vehículos ecuatorianos.

La movilización se postergó por cerca de 20 días. Los primeros acercamientos de negociación por parte del gobierno nacional fueron anulados por los manifestantes, puesto que no veían capacidad decisoria en los funcionarios. Finalmente, se logró levantar el bloqueo con seis puntos de acuerdo que fueron refrendados por los ministros de Relaciones Exteriores, Transporte, el director nacional de Tránsito y Transportes, el alcalde de Ipiales, el presidente del Comité Cívico pro Derechos de la Frontera y el director de la Asociación Colombiana de Camioneros en Ipiales. Estos incluían, entre otros, la intensificación del horario de atención de las autoridades intervinientes en el comercio internacional y otras disposiciones del transporte de carga seca, tanques, “niñeras” y refrigerados.

En el mes de noviembre del año 2010 vuelven a manifestarse los camioneros. La inconformidad por la restricción a trabajar hacía el país vecino se vuelve a poner de presente cómo el eje de la movilización. A pesar de algunas reuniones entre los líderes donde no se logran llegar a un acuerdo, el 8 de noviembre la Asociación de Camioneros de Colombia-ACC convoca a paro general e inmediatamente se trasladan a Ipiales delegaciones de otros departamentos del país. Como primeras medidas se establecen bloqueos a las afueras de Ipiales en el corregimiento San Juan y a las afueras de Pasto, en el corregimiento Catambuco. Por su parte, los camioneros de Ecuador invitan a dialogar a sus colegas colombiano, pero estos en tono soberbio los descalifican como interlocutores válidos, esperando solamente dialogar con los gobiernos centrales de ambos países y la CAN, lo cual se acuerda para el día 19 del mismo mes. Mientras tanto, los camioneros ecuatorianos anuncian desistir de transitar por carreteras colombianas y entregar las mercancías en la frontera, lo cual es visto inicialmente como avances, pero después desacreditado por considerarlo algo no cumplido. La movilización se levanta 22 días después, el día 30 de noviembre, sin mayores acuerdos logrados.

Prontamente, en febrero del año siguiente retoman la movilización, concentrándose nuevamente en Ipiales y Pasto, pero esta vez colocando la derogación del decreto que eliminó la tabla de fletes cómo uno de los principales motivos. Duras declaraciones se emiten desde la dirigencia de la asociación contra sus homólogos ecuatorianos para lo cual el presidente manifestó lo siguiente: "De manera cordial les hago un llamado para que respeten nuestras medidas, ya que por ningún motivo vamos a permitir que nos vengán a sabotear la protesta. No creo en la palabra de los dirigentes de ese país, por eso es mejor que no se involucren en nuestros objetivos con el Gobierno." Y adicionalmente advertía que no se hacían responsables por lo que les sucediera en suelo colombiano. Efectivamente, en las protestas se presentaron ataques contra camiones ecuatorianos, ante lo cual alguno delegados son detenidos por la Policía y rápidamente liberados a falta de pruebas. Esto alzó los ánimos de los camioneros, anunciaron denuncias y señalaron una presunta persecución en contra de ellos.

Al tercer día de protesta, quienes estaban concentrados en el corregimiento Yanalá deciden trasladarse a bloquear un centro de acopio en el sitio Las Cruces, un mecanismo de presión estratégica para impedir totalmente que camioneros no vinculados al paro detuvieran las actividades y tener control de los camiones que llegan de Ecuador a descargar. Se presentan también enfrentamientos con la Fuerza Pública quienes intentan proteger a algunos camiones ecuatorianos para transportarse al interior del país. A los 16 días se levanta este paro, nuevamente, los únicos resultados visibles son las pérdidas económicas, y aunque el decreto de eliminación de fletes pudo haberse derogado, lo cierto es que el conflicto por el transporte internacional se mantuvo.

No se hizo esperar nuevamente otra movilización en octubre de 2011. Los camioneros entran en paro y se producen nuevos ataques a los camiones ecuatorianos, aunque los dirigentes colombianos lo negaron. Algunos cambios se vislumbran en esta nueva movilización: uno, la menor convocatoria producida por la asociación, lo que muestra un cierto desgaste dentro del gremio y dos, que ahora sí aceptan y piden la interlocución directa con el gremio ecuatoriano, luego de, según ellos, no encontraran soluciones en los gobiernos nacionales. Los ataques a los vehículos generaron una fuerte reacción de parte de las autoridades civiles, unos pidiendo protección, como el embajador ecuatoriano, e incluso otros como el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, convocando de urgencia a una reunión extraordinaria de la CAN contemplando la posibilidad de renunciar a la comunidad, hecho que desde luego no ocurriría.

Al igual que en las anteriores movilizaciones, las negociaciones son ambiguas e inciertas. Aunque no se registran nuevas acciones a partir de esta última, se podría pensar que los acuerdos a los que se pudo haber llegado de “tu-a-tu” con los camioneros ecuatorianos surtieron mayor efecto que los intentos hechos con los gobiernos nacionales.

A manera de conclusión, se puede señalar lo variado de la movilización social en Ipiales. Diferentes sectores, cada uno a su manera, buscan la consecución de intereses específicos, que no siempre son atendidos por el Estado, pero que no confrontan al Estado ni lo desconocen, sino que lo ubican como el interlocutor válido de sus demandas. En todas estas movilizaciones se identifican niveles institucionales que aglutinan el movimiento social y que quizás lo encauzan a desarrollar repertorios de acción colectiva legítimas. Hay en Ipiales señales de fortaleza en los diferentes movimientos sociales que podría redundar en independencia de intereses externos de otras organizaciones, legales e ilegales, que bien pudieran tener injerencia en la orientación de sus acciones.

Actores protagónicos asociados.

Entre los actores que valen la pena resaltar por su incidencia en el contexto petrolero, está la Fundación El Progreso de Jardines de Sucumbíos. Sobre la historia de la organización desafortunadamente se conoció muy poco en este trabajo, ante la dificultad comunicativa y geográfica para acceder a la zona. Se sabe que está conformada desde hace varios años en la región, incluso antes de ser acogida por Ipiales, y se manifestó por vez primera en las reuniones con los entes departamental y municipal para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la protesta social en el año 2010.

Se destaca por la capacidad para organizar y hacer seguimiento a las actividades que se hacen desde el Estado para inversión y fortalecimiento institucional. Al respecto el Personero Municipal resalta lo siguiente:

“La Fundación (El Progreso) es la que organiza todo allá, por ejemplo, sí se hizo un convenio departamental, municipal y Ecopetrol para arreglar un puente, la Fundación estuvo haciendo exigencias por la comunidad y garantiza, como veedores, de que ese contrato llegue a feliz término.” (Entrevista al Personero Municipal de Ipiales, 21 de noviembre de 2013).

La dinámica del cabildo abierto que se lleva a cabo por la organización comunitaria en Jardines de Sucumbíos, permite un encuentro entre los líderes de la fundación y la comunidad en general, evidenciándose importante participación de apoyo y solidaridad en las actividades de fortalecimiento interno de la organización y las actividades de protesta. Por lo tanto, se pueden identificar unos líderes comunitarios que aparecen a la vocería del proceso y una comunidad -culturalmente diversa- que apoya el trabajo de sus líderes. Así describe la dinámica de trabajo de la Fundación el Personero municipal:

“La comunidad está organizada, hay una fundación que toma las decisiones y cada líder de vereda, o así (resguardos indígenas y/o consejos comunitarios), tienen que prestar reporte a esa fundación. La fundación es la que en últimas organiza y pelea por todo lo de la comunidad, creen en sus líderes y son muy organizados.” (Entrevista al Personero Municipal de Ipiales, 21 de noviembre de 2013).

La importancia de su trabajo es reconocido institucionalmente desde la administración local y por lo tanto es la figura consultora para desarrollar cualquier tipo de trabajo comunitario, inversión o proceso en el territorio. Así mismo lo es con las agencias de cooperación que han adelantado algún proceso de tipo humanitario. De otro lado, no se evidencia una interferencia de parte de los grupos armados ilegales, en este caso de las Farc, quienes a pesar de todo tienen un dominio militar territorial en la zona.

Los logros de la Fundación El Progreso se da en términos del desarrollo social y la interlocución lograda con el Estado para dirigir la inversión económica y social en un lugar en el que la imagen proyectada del Estado ha sido meramente en su expresión extractiva. Esto le otorga un reconocimiento que es expresado por el Personero Municipal de esta manera:

“Una organización de esas en un municipio como este, lo sacaría adelante” (Entrevista al Personero Municipal de Ipiales, 21 de noviembre de 2013).

Conclusiones

El municipio de Ipiales presenta una situación territorialmente dicotómica, ya que muestra en la zona urbana y sus alrededores condiciones específicas que guardan una gran distancia (física, económica, cultural y política) con buena parte del territorio, de carácter rural, que recientemente fue reconocido por el municipio en un contexto en el que, con las modificaciones a la ley de regalías y la tendencia creciente de la exploración y explotación petrolera, el departamento de Nariño se interesó por fijar su jurisdicción sobre el territorio de Cofanía o Jardines de Sucumbíos.

En ese sentido, la zona urbana y sus alrededores, la parte noroccidental del municipio, presenta socio-económicas relativamente favorables, una economía basada en la agricultura con alta inserción al mercado y gremios económicos fuertes ligados al transporte, baja intensidad en el conflicto armado por la poca presencia de actores armados ilegales (situación que ha mejorado en los últimos años con el cierre al paso ilegal del Frente 48 de las Farc hacia Ecuador por el corregimiento La Victoria), participación de los movimientos sociales indígenas en el control a los territorios de resguardo y fuerte presencia institucional del Estado.

Por su parte, en Jardines de Sucumbíos, las condiciones socio-económicas son desfavorables (amplias limitaciones en salud, educación, infraestructura, servicios públicos), una economía basada en la explotación petrolera mientras que las actividades agrícolas (arroz y plátano) son destinadas principalmente al consumo interno. Hay una alta presencia del actor armado ilegal Farc, aunque la intensidad del conflicto hasta el momento ha sido baja, ya que no hay presencia de Fuerza Pública destinada al control territorial, sino solamente a proteger la infraestructura petrolera de Ecopetrol en la vereda El Empalme.

La forma de poblamiento de la zona responde a oleadas de colonización generadas a partir de la explotación petrolera, adonde llegaron grupos de diferentes lugares del país, por lo que culturalmente Jardines de Sucumbíos es una región pluriétnica en la que están asentadas comunidades indígenas Kofan, Awá, Pastos, Nasa-U, comunidades negras y comunidades mestizas.

Sin embargo, en términos del movimiento social, en Jardines de Sucumbíos se ha constituido un movimiento social fuerte, reconocido institucionalmente y que ha sabido aprovechar el contexto de la reactivación petrolera y la indefinición administrativa del territorio, para exigir una mejor redistribución de los recursos acudiendo en determinadas ocasiones a la protesta social y captar la atención estatal por medio del departamento de Nariño, con mejores condiciones de asistencia que el departamento de Putumayo, pero

con una distancia enorme (geográfica y política) que le permite a la fundación ejecutar y hacer veeduría a las inversiones del Estado.

De alguna manera, ante la falta de presencia estatal en el territorio, la organización social ha cumplido un papel que en parte lo reemplaza y sirve de “árbitro” y “administrador local” en la resolución de conflictos y asistencia social a las comunidades. Uno de los posibles efectos que esto ha generado es la escasa injerencia de los actores armados que hacen presencia, en términos del control político y social al territorio, ya que no se observa persecución o ataques expresamente dirigidos a las comunidades o los miembros de la organización y las instancias del Estado siempre conciertan con las comunidades las inversiones y los planes a ejecutar.

MONOGRAFIA MUNICIPIO DE BARBACOAS – NARIÑO

Delimitación territorial y temporal del estudio.

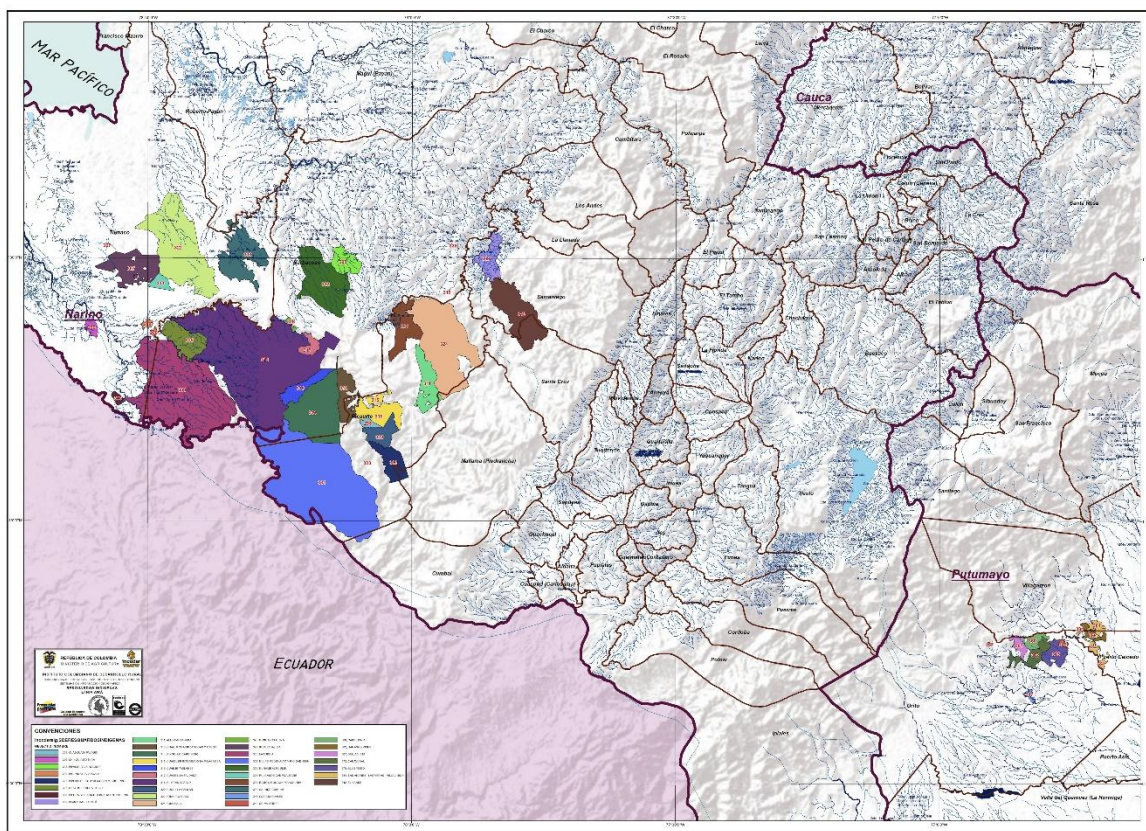
El municipio de Barbacoas tiene una extensión territorial de 2.324 Km² y está ubicado en el pie de monte costero al suroccidente de Nariño. Limita al norte con los municipios de Magüi y Cumbitara; al oriente con Los Andes, La Llanada, Samaniego y Ricaurte; al sur con la Republica de Ecuador; al occidente con los municipios de Tumaco y Roberto Payán. La cabecera municipal está ubicada en la parte norte del territorio municipal, a orillas del río Telembí, al cual se accede por carretera secundaria “destapada” desde el corregimiento Junín, en la vía al mar o por vía fluvial desde el Mar Pacífico por el río Telembí.

El territorio de Barbacoas está distribuido en una zona urbana de aproximadamente 4 Km² y dividida en 11 barrios. Por su parte, la zona rural está compuesta por 136 veredas, las cuales se agrupan en 13 resguardos indígenas y 9 consejos comunitarios de comunidades negras.

Los resguardos indígenas que pertenecen al pueblo Awá se denominan de la siguiente manera: Cuambí Yaslambí, Pingulló Sardinero, Faldada Cuasbil, Gran Sábalo, Yaundé Guiguay, Guelmambí Caraño, Tortugaña-Telembí, Pulgande-Tronquería, Chagui-Chimbuza, onda Río Güiza, Nunalbí Alto Ulbi, Pipalta Palpi Yaguapí y Piedra Verde (Ver mapa 1).

Los consejos comunitarios son llamados así: Alejandro Rincón, Manos Unidas del Socorro, Renacer Campesino, La Gran Unión Telpí, La Nueva Reserva ACANURE, Unión Guelmambí, La Gran Minga Inguambí, Nueva Alianza Alto Telembí y La Nueva Esperanza 1. (PBOT; 2006).

Resguardos indígenas del pueblo Awá



Fuente: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. *Resguardos indígenas etnia Awá*. Sin fecha.

La cantidad de población de Barbacoas está proyectada para el año 2013 en 36.214 personas, de las cuales 15.310 personas (42,3%) habitan la cabecera municipal y 20.904 personas (57,7%) habitan la zona rural o el resto. Tomando como referencia la fecha del último censo en el año 2005, cuando había 30.270 personas, se obtiene que el ritmo de crecimiento en los últimos ocho años ha sido del 2,5% promedio anual.

Según los datos del censo del Dane, en el año 2005 el 50,5% de la población eran hombres y el 49,5% restante eran mujeres. En cuanto a las edades, se puede decir que la población de Barbacoas es muy joven, con una pirámide poblacional de base ancha, ya que el 55,4% se encuentran en edades entre los 0 y 19 años. De lo anterior se difiere que hay una tasa de dependencia juvenil bastante alta, la cual llega al 87%, mientras que la población senil es poca, representado solo el 3,8% del total de la población y por lo tanto la tasa de dependencia senil igualmente es bastante baja del 7%.

La población de Barbacoas es mayoritariamente de pertenencia étnica, de la cual el 78,3% corresponde a población negra o afro descendiente y el 15,1% a población indígena. De lo anterior se desprende, que un 6,6% de la población es mestiza, siendo en este caso minoría.

De manera dramática, poco más de la cuarta parte de la población mayor de 5 años en Barbacoas es no sabe leer y escribir, sumado a grandes deficiencias de la cobertura en educación donde más de la mitad de la población en edad escolar no asiste al sistema educativo. Los niveles educativos preponderantes son el de primaria y ninguno con 44,7% y 29,6% respectivamente. Sólo un 18% ha terminado la secundaria y un escaso 2,5% ha logrado niveles superiores.

Dinámicas de la seguridad y conflicto armado.

Hitos principales y sus efectos sobre la población de cada una de las zonas.

Las cifras del conflicto armado en Barbacoas proporcionadas por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – AURIV, permiten aproximarse a la intensidad y la evolución del conflicto durante los últimos nueve años (Ver cuadro 1). En total, 43.605 personas han sido victimizadas por toda clase de hechos, lo cual es un número desbordado que indicaría que todos los habitantes del municipio han sufrido más de un hecho victimizante por hechos del conflicto armado. Más del 90% de los hechos corresponde a desplazamientos, lo cual es diciente de un escenario de involucramiento de la población a la guerra con carácter indiscriminado y la superposición de la confrontación con las zonas de poblamiento.

Cuadro 2

VICTIMAS POR HECHO VICTIMIZANTE EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS (2005-2013)

HECHO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	TOTAL
Desplazamiento	1.947	3.527	1.633	4.254	1.756	24.493	1.969	1.010	249	40838
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	27		5	27	12	948	30	84	5	1138
Amenaza	4	8	18	1	5	189	48	179	29	481
Homicidio*	30	48	46	27	28	253	9	10	1	452
Acto terrorista	9	4	4	14	13	224	35	67	26	396
Minas Antipersonal	13	2	11	17	15	76	8	4		146
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes	2	1	2	4	10	21	3	2		45
Desaparición forzada*	1	1	6	4	3	24	2	1	1	43
Secuestro*	2	2		5	1	15	2		4	31
Delitos contra la libertad y la integridad sexual						15	2	4		21
Tortura			1			8	2	1		12
Abandono o Despojo Forzado de Tierras						2				2

	203	359		435	184	2626	211			4360
Total	5	3	1726	3	3	8	0	1362	315	5

Fuente: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV.
Diagramación propia. Consultados el 6 de noviembre de 2013.

* La cifra corresponde sólo a víctimas directas, ya que la unidad contabiliza como víctimas indirectas a otras 971 personas por estos hechos (878 por homicidio; 88 por desaparición forzada; 5 por secuestro).

** Datos con corte al 1ro de octubre.

La preponderancia en la cantidad de personas víctimas por la pérdida de bienes muebles e inmuebles (1.138) sobre otros hechos victimizantes, llama la atención sobre lógicas particulares de estrategias de expulsión y despojo de la población por parte de los grupos armados. No se trata solamente de que las personas huyen por temor a quedar en el fuego cruzado entre sus poblados, sino que sus viviendas, sus enseres, sus pertenencias, son arrebatadas a la fuerza para uso de los grupos armados.

Barbacoas parece haber tenido un año oscuro en el 2010, donde todos los hechos victimizantes presentaron incrementos inusitados e incluso otros hechos de los que no había reporte, aparecieron en éste año. Se llegó a una cifra histórica de 26.268 víctimas, difícil de entender, si se tiene en cuenta que en años anteriores no se había llegado a superar la cifra de 5.000 víctimas y nomás al siguiente año la cifra volvió a niveles frecuentes.

La tendencia después del año 2010 es a la baja, continua y persistente. En lo corrido del presente año sólo se han presentado 315, lo cual podría indicar, que de mantenerse la tendencia, al finalizar el año haya menos de la mitad de víctimas en comparación a las presentadas el año inmediatamente anterior. Hechos como las minas antipersonales y la vinculación de niños, niñas y adolescentes no se han registrado en lo corrido del año, así como sólo un homicidio ha sido reportado.

Pese a la señalada tendencia a la reducción del total de hechos en los últimos años, la amenaza y el acto terrorista, como en muchas otros municipios del departamento de Nariño, presenta un incremento notable a partir del año 2010, aunque no tan pronunciado. Fenómenos como la extorsión es un elemento explicativo para entender este incremento, en un contexto en que grupos criminales se han debilitado y amplios contingentes de sus integrantes, que no pueden ser absorbidos por la economía legal,

buscan fuentes de subsistencia en la extorsión. De manera contraria, el homicidio ha tenido una reducción significativa en comparación a la tendencia de años anteriores, señal directa del apaciguamiento de la disputa en el control de la población.

Actores protagónicos: su evolución y transformación en el periodo objeto de estudio.

En el municipio de Barbacoas se ha dado una disputa permanente entre diferentes actores armados ilegales que han hecho presencia en el territorio por la ventaja estratégica que representa en términos de cultivos de uso ilícito, explotación minera y zonas de retaguardia. En Barbacoas ha operado desde su creación a comienzos de la década del 2000, la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc, el Frente Comuneros del Sur del Eln, específicamente con sus compañías “Héroes y Mártires de Barbacoas” y “Guerreros del Sindagua”. De otro lado, los paramilitares del Bloque “Libertadores del Sur” de las Auc hicieron presencia en Barbacoas desde el año 2000 y posteriormente a su desmovilización en el año 2005 se conformaron las “Águilas Negras” y “Los Rastrojos”.

La información referente a combates que presenta USAID (2011) muestra cómo se configuro una dinámica creciente de combates entre los años 2000 a 2004 pasando de dos a nueve anuales, luego desciende hasta el año 2007 y en el 2008 hay un nuevo incremento producto de la confrontación entre las Farc y el Eln.

Ahora bien, en el ejercicio de recopilación de información para este trabajo entre los años 2010 y junio de 2013, arrojó un total de 83 hechos ligados al conflicto armado en sus diferentes manifestaciones. En relativa concordancia a lo visto en el cuadro 1 de personas víctimas, en el año 2010 se concentran la mayor parte de estas acciones, teniendo un total de 33. Para el año 2011 y 2012 hay una notoria disminución con 20 y 9 casos respectivamente, pero en lo corrido del año 2013 hay una tendencia al alza con 21 hechos registrados al mes de junio.

Visto por el actor que desencadena el hecho se observa una mayor iniciativa de parte del Ejército por parte de diferentes estructuras, principalmente el Batallón de Ingenieros Militares #23, el Batallón de Selva #53 y el Batallón de Combate Terrestre #93, quienes reportan un total de 42 acciones. La Policía tiene una menor capacidad de acción en Barbacoas y sólo registra 9 acciones, mientras que en acciones conjuntas de distintos cuerpos de la Fuerza Pública se identifican 4 casos más.

De otra parte, está la organización guerrillera Farc a quienes se les atribuyen 16 acciones, realizadas por las Columnas Móviles Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre y el Frente 29. Por su parte, el Eln sólo participa en 1 acción. En cuanto a las bandas

criminales, las acciones desencadenadas por estos están dadas sólo por “Los Rastrojos” con 3 acciones. En las 8 acciones restantes no se pudo establecer quién es el actor desencadenante y son acciones dirigidas principalmente contra la población civil.

Ahora bien, observando a qué actores están dirigidas las acciones o el actor contendor, se encuentra una preponderancia hacia los grupos guerrilleros de las Farc y el Eln, quienes fueron objeto en distinta medida de la acción emprendida por la Fuerza Pública, contando 19 acciones adelantadas contra el primero y 11 contra el segundo

Por su parte, la banda criminal “Los Rastrojos” con 15 acciones y la banda “Águilas Negras” con 6, refleja la presencia de ésta última en el municipio y también su posible desarticulación, ya que todas las acciones se presentan en el año 2010.

Sin embargo, se puede observar que independientemente de quien ejecute la acción y quien la reciba, hay enfrentamientos entre todos los actores, con distinta o similar naturaleza, es decir, entre Fuerza Pública con grupos guerrilleros y bandas criminales; entre grupos guerrilleros con bandas criminales y de bandas criminales entre sí.

La Fuerza Pública

El tipo de acciones que se presentan por parte de la Fuerza Pública en Barbacoas muestran la insistencia en cortar las fuentes de financiamiento de los grupos armados respecto a la extracción ilegal de petróleo del Oleoducto Transandino y la refinación clandestina de este. Se contabilizan 17 acciones en total de éste tipo, la mayoría ubicadas en zonas que hacen parte del corregimiento El Diviso, el corregimiento Altaquer y algunos puntos de la vía Junín-Barbacoas. Los actores que se mencionan como responsables de estos son las Farc y “Los Rastrojos”, aunque en muchos casos no es posible precisar el grupo armado al que pertenecían.

Adicionalmente, hay un número importante de acciones de capturas, 17 en total, la mayoría dirigidas contra las bandas criminales de “Los Rastrojos” y las “Águilas Negras” que permiten la aprehensión de 23 personas. Uno de los objetivos principales fue el debilitamiento de estas estructuras en el casco urbano, en donde hacían presencia sin tener un dominio absoluto, ya que los grupos guerrilleros también llevan a cabo acciones importantes dentro de este. Sólo durante el año 2013 se han presentado capturas significativas contra las Farc en un proceso de cortar las redes de apoyo del grupo subversivo.

La Fuerza Pública, tanto Policía como Ejército, fue muy poco afectada por la acción de otro grupo armado, recibiendo de a 3 acciones cada cuerpo. Esto demuestra un periodo

marcado por la iniciativa del Estado por tomar el control del municipio de Barbacoas atacando a los diferentes grupos armados ilegales, empeño que es exitoso en el sentido del poco daño que recibe militarmente y el avance en la mejora de los indicadores de víctimas del conflicto.

Se podría decir que durante el año 2010 la dinámica que explica el recrudecimiento del conflicto armado es la entrada del Ejército buscando ganar un posicionamiento estratégico sobre los sectores de la carretera que conduce al casco urbano y desde la cual se coordina muchas de las incursiones hacia el interior del piedemonte. La intervención se hace amparada en la obra de pavimentación de la carretera Junín – Barbacoas, cuya responsabilidad es adjudicada al Batallón de Ingenieros #23 del Ejército y que actualmente continúa en ejecución.

Una gran ofensiva se despliega desde comienzo del año 2010, cuando se instala el Batallón de Ingenieros Militares #23 en el corregimiento Junín. Las primeras acciones comprenden un control de área que se toma varios meses. Desde allí, al cabo de poco tiempo, la geografía de los hechos va mostrando una rápida avanzada. En noviembre, el Batallón ha logrado tomar control de la vereda Buenavista, en medio de los más fuertes enfrentamientos que provocan el desplazamiento de gran parte de sus habitantes.

A mediados del año 2011 se evidencia que la Fuerza Pública ha consolidado presencia en los centros poblados cercanos al casco urbano como la vereda Tinajillas y en el mismo casco urbano mediante el Batallón de Selva #53. Los procedimientos de captura y destrucción de laboratorios contra los diferentes grupos armados continúan presentándose y de manera particular el Ejército ejerce presión sobre el Eln y logra ingresar a sus zonas de refugio, aprovechando la disputa interna que se da al interior de la organización alrededor de la posición frente al narcotráfico y señalamientos de robo entre cuadrillas de dineros provenientes de éste.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

La guerrilla de las Farc ha tenido una presencia fuerte y nutrida en el municipio de Barbacoas. Su presencia se da en todo el territorio municipal, sin embargo su dominio territorial esta marcado en ciertas zonas estratégicas al sur y los costados oriental y accidental del municipio, en las riberas de los ríos Nulpe, Telembí y Guelnambí. En cambio, en las zonas de la carretera al mar, la carretera Junín-Barbacoas y el casco urbano hay una presencia significativa, pero se ven enfrentados constantemente a la banda criminal “Los Rastrojos” y a la Fuerza Pública.

La dinámica reciente de las Farc en Barbacoas ha tenido dos direcciones: por un lado, han perdido presencia y capacidad ofensiva en la zona de la carretera Junín-Barbacoas debido al aseguramiento que ha hecho el Batallón de Ingenieros desde comienzos del año 2010 para la construcción de la vía y por otro lado se han puesto a la ofensiva para expulsar a la banda criminal “Los Rastrojos” de algunas zonas y reforzar la presencia en determinados puntos estratégicos, empleando para ello, alianzas con el Eln para debilitar la presencia de la Fuerza Pública en sitios como el corregimiento Altaquer, situación que se presenta desde mediados del año 2011.

Ante la llegada del Batallón de Ingenieros Militares #23 al corregimiento Junín, las acciones de las Farc se concentraron en hacer una defensa estratégica lugares como el corregimiento Bellavista, ubicado sobre la carretera Junín-Barbacoas. Para ello se intensificó el minado de sus alrededores, se llevaron a cabo atentados o intentos de atentados con cargas explosivas puestas en la carretera para activar al paso de las tropas, los cuales muchas veces fueron anticipados por la Fuerza Pública y también han recurrido a dotarse de armas de mayor poder destructivo, como las minas antitanques, para repeler los avances mecanizados del Batallón de Ingenieros.

Por otro lado, aprovechando la persecución de la Policía contra “Los Rastrojos” a raíz de la “Operación Troya Pacífico”, las Farc han tomado la iniciativa para asegurar las zonas de dominio de la banda criminal. Uno de los epicentros principales ha sido el casco urbano, en donde han atacado candidatos a la alcaldía y el concejo, aparentemente por considerarlos enlaces políticos de “Los Rastrojos” en la cabecera urbana. Allí por ejemplo, han sido atacados candidatos al concejo, en algunos casos en manifestaciones políticas en plaza pública, como la ocurrida en septiembre del año 2011, cuando con granadas y ráfagas de fusil, atacaron un encuentro político que se desarrollaba en el parque principal de Barbacoas, al que asistían cerca de 200 personas.

Así mismo, se observa desde finales del año 2011, un interés de las Farc por reforzar las áreas de los corregimientos El Diviso y Altaquer, ubicadas a los extremos occidental y oriental del tramo de la carretera al mar que corresponde a Barbacoas. A partir de septiembre de ese año, se intensifican los asesinatos de indígenas son señalados de colaborar con la Fuerza Pública y los atentados a la infraestructura petrolera.

A partir de enero del año 2012, la dinámica de las Farc se concentró en debilitar la presencia policial en el corregimiento Altaquer. El 15 de enero de 2011 hay un fuerte ataque contra la estación policial y un puesto de “avanzada” ubicado en la parte alta del caserío, logrando desalojar momentáneamente a este último. También se ejerce presión a la población civil de mediante el secuestro de comerciantes y amenazas a varios docentes de la institución educativa, quienes se ven obligados a salir de allí. El control al tránsito por

la vía al mar se agudiza y se desarrollan retenes ilegales continuamente para cobrar ‘vacunas’ y hacer retaliaciones contra los transportadores que no acceden a las estas.

Un aspecto que llama la atención en esta etapa es el acompañamiento que hace el Eln a las Farc para efectuar los ataques a la Policía y la coacción a la población. Se trataría entonces de alianzas recientes entre los dos grupos armados ilegales que se habían distanciado desde el año 2008, cuando el Eln intentó negociar con el Gobierno Nacional y cedió terreno en la región, a lo cual las Farc se opusieron rotundamente. Ahora, con el propósito de hacer frente común a los propósitos de expulsión a “Los Rastrojos” y reposicionamiento en sitios estratégicos, vuelven a desarrollar acciones conjuntas.

Pasado ese momento ofensivo, que se corresponde temporalmente con los ataques terroristas a las estaciones de Policía en el corregimiento Llorente, Chilví y el casco urbano de Tumaco, las Farc entraron en un periodo de desactivación y repliegue estratégico por la respuesta que diera el Estado luego de tan estruendosos sucesos. Lo que prosigue durante el resto del año 2012 y lo corrido del 2013, es un fortalecimiento económico con la intensificación de la extracción de crudo del Oleoducto Transandino y su respectiva refinación en estas zonas de reposicionamiento. A esto responde el incremento inusitado de destrucción de válvulas y refinerías clandestinas por parte del Ejército.

Aunque la respuesta de la Fuerza Pública con los planes “Espada de Honor” y el envío de la Fuerza de Tarea Pegaso no ha tenido logros de alta consideración contra las Farc hasta el momento, en la actualidad se desarrolla un intenso trabajo de inteligencia y presión para dar con la captura de los responsables de la serie de atentados terroristas ocurridos a comienzos del año 2012. Algunas capturas se han producido en Barbacoas, principalmente en el corregimiento El Diviso, que estarían dirigidas en este sentido.

El Ejército de Liberación Nacional.

El ELN muestra señales de debilitamiento a lo largo del periodo entre 2010 y 2013. En primer lugar, la disputa entablada con las Farc de tiempo atrás les significa perder capacidad ofensiva y replegarse sobre zonas altas de los ríos Guelnambí y Telembí, alejados de los espacios de poder: la carretera al mar, la carretera Junín-Barbacoas y la zona minera del río Telembí. En segundo lugar, hay señales de disputas internas generadas por la posición de algunos miembros respecto al financiamiento pro vía del narcotráfico y el manejo de finanzas que genera desmovilizaciones masivas del grupo. En tercer lugar, el ingreso de la Fuerza Pública a algunos de sus campamentos de entrenamiento y la destrucción de laboratorios de producción de cocaína.

Nueve eventos de entrega a las autoridades que incluyen un total de 54 combatientes se registran entre miembros de las diferentes compañías del Eln.²⁰ Una de las más significativas fue una cuadrilla completa de la Compañía “Guerreros del Sindagua” ocurrida en julio del año 2010, quienes al frente de su cabecilla alias “Ecuador”, se entregaron 18 personas (11 hombres y 7 mujeres) que declararon haberse entregado por señalamientos de sus líderes de hurtarse un dinero producto de extorsiones y narcotráfico.

En el acervo de información recopilada, solamente se da cuenta de dos acciones adelantadas exclusivamente por el Eln: dos retenes ilegales, uno en el corregimiento El Diviso y otro en Altaquer, donde secuestran seis personas en el primero y queman un taxi intermunicipal en el segundo.

Es solo hasta mediados del año 2011 cuando se vuelve a ver al Eln en una posición ofensiva, aunque en calidad de aliado estratégico de las Farc. Se da a raíz del interés de expulsar definitivamente a “Los Rastrojos” de zonas que han sido de injerencia de ambos grupos guerrilleros. Es así como se libra una fuerte batalla conjunta en julio de ese año en las veredas de la parte alta y media del río Guelnambí. Más tarde estarán también acompañando a las Farc en el proceso de reposicionamiento sobre el corregimiento Altaquer a comienzos del año 2012.

Las bandas criminales: “Los Rastrojos” y las “Águilas Negras”.

La dinámica reciente de las bandas criminales en el municipio de Barbacoas muestra señales de desmantelamiento progresivo de su presencia y accionar militar. Tanto “Los Rastrojos” como las “Águilas Negras” se establecieron en Barbacoas desde aproximadamente el año 2006, presentándose un reciclaje de las estructuras de las Auc desmovilizadas en el año 2005 y la incorporación de nuevos miembros.

La operación de “Los Rastrojos” ha estado centrada en el casco urbano del municipio, una parte de la zona minera sobre el río Telembí y puntos precisos de la carretera Junín-Barbacoas. Por su parte la banda criminal “Águilas Negras” tuvo su mayor injerencia principalmente en el casco urbano.

De manera particular, la relación de las dos bandas criminales fue de confrontación y ello acarrió una guerra intensa por el control del casco urbano. La disputa entre ambas bandas en Barbacoas generó las prácticas de terror más fuertes que se pueden identificar en términos de la violación de derechos humanos.

²⁰Hace referencia a un grupo denominado “Tropas Especiales de Los Andes”, del cual no se tiene mayor conocimiento.

Se podría decir que esta disputa fue una de las causas principales que provocó el práctico desmantelamiento de la banda de las “Águilas Negras”, que no lograron consolidar otras vías de tránsito distintas a la cabecera urbana para el desarrollo de sus actividades delictivas. Su accionar en los últimos años aquí analizados, estuvo ligada casi que exclusivamente dedicada al cobro de extorsiones a los funcionarios públicos y el comercio. Incluso, su movilización por la vía Junín-Barbacoas se convirtió en la oportunidad que “Los Rastrojos” adoptaron como estrategia para diezmar a los miembros de la banda.

Adicionalmente, la acción de la Policía con la intervención del Comando Operativo Especial de Seguridad Ciudadana de Tumaco logró propinar las capturas de sus grupos de sicarios y extorsionistas que continuaban delinquiendo en el casco urbano. La agrupación desaparece como actor representativo de la escena a comienzos del año 2011.

Por su parte, “Los Rastrojos” implantaron dominios sobre sitios precisos de la carretera Junín-Barbacoas y el río Telembí. Se beneficiaban de la extracción de crudo del Oleoducto Transandino para luego refinarlo y utilizarlo en la fabricación de alcaloides. Emplearon más a fondo la estrategia de expulsar determinadas familias para apoderarse de sus viviendas y desde allí establecer los centros de operaciones, permitiéndose quedar menos a la deriva de sus oponentes.

El desmantelamiento que ha venido sufriendo progresivamente “Los Rastrojos” en Barbacoas obedece fundamentalmente a la desconexión estructural que sufrieron sus hombres con la entrega y captura de sus máximos líderes a nivel nacional a mediados del año 2011. A partir de allí, sus integrantes quedaron sin un rumbo fijo y se extendieron las acciones de usurpación a la población civil mediante robos sobre la vía al mar y el aumento de extorsiones.

Esto motivó a que algunos de ellos fueran entregados por los habitantes de la zona a las autoridades en momentos en que se desarrollaba la Operación “Troya Pacifico II” por parte de la Policía contra las bandas criminales, que logra ser exitosa en la serie de capturas que se cumplen contra algunos cabecillas importantes en el manejo de finanzas y los grupos de sicarios.

Igualmente, las Farc aliado con el Eln, arremeten contra “Los Rastrojos” en determinadas zonas rurales que habían sido de control absoluto de los grupos guerrilleros y logra expulsarlos. Es notorio principalmente en julio de 2011 con los combates que se dan en las veredas La Vega, La Seca y Chalanví de la zona del río Guelnambí.

De manera particular, en lo corrido del año 2013 no se observan nuevas acciones adelantadas por parte de “Los Rastrojos” como tampoco acciones emprendidas contra ellos. Esto refleja que actualmente sus estructuras han sido debilitadas por la acción de la

Fuerza Pública en lo que tiene que ver con el casco urbano y por las Farc y el Eln en las zonas rurales.

Para concluir esta parte, según lo visto en los datos del cuadro anterior, surge la pregunta acerca de qué se estuvo jugando durante el año 2010 en la correlación de fuerzas entre los actores del conflicto para haber provocado tan significativo quiebre en la tendencia de los indicadores del conflicto en cuanto a la generación de víctimas se refiere y rápidamente encauzarse en un proceso prolongado de decrecimiento hasta la actualidad. Comprender qué sucedió en ese momento es un aspecto clave para vislumbrar los cambios recientes de la dinámica del conflicto en Barbacoas.

Analizando de cerca el proceso, es evidente el avance de la Fuerza Pública hacia sitios donde poca presencia ha tenido. Los grupos armados ilegales con mayor capacidad de acción como las Farc y “Los Rastrojos” sufren algunos golpes dados por la Fuerza Pública, pero ninguno tan certero como los que sí resultan del enfrentamiento entre ellos y otros grupos.

Durante la última parte del periodo analizado, las acciones de los diferentes grupos armados disminuyen notoriamente. Desde septiembre del año 2010 no se vuelven a registrar acciones por parte las bandas criminales, pero si varias contra ellos. La guerrilla de las Farc traslada sus acciones a la parte intermedia del municipio alrededor del corregimiento Altaquer, donde concentra sus acciones en atentados al Oleoducto Transandino y atentados contra la Fuerza Pública que transita por el sector de la vía al mar.

Las “Águilas Negras” han sucumbido a la presión de “Los Rastrojos” y la disminución de acciones de “Los Rastrojos” tiene un fuerte referente en la desarticulación que ha tenido por efecto de los cambios en las estructuras provocadas por la entrega y captura de sus máximos jefes a nivel nacional que ha conllevado a la pérdida de control sobre la propia organización.

Todo esto parece indicar, que si bien en los últimos dos años ha habido una merma sustancial de la confrontación armada expresada en las cifras y los hechos de los que se tiene conocimiento, es posible que esta se deba al decaimiento en la avanzada de la Fuerza Pública y la eliminación de algunas disputas por motivo de la desarticulación de algunos grupos, mientras que los que se han mantenido han tomado una posición de repliegue estratégico hacia otras zonas, sin perder totalmente la presencia en sitios clave del municipio. Por lo tanto, la relativa calma que parece vivirse actualmente en el municipio puede estar expuesta a nuevas incursiones de los grupos armados que se han

replegado, pero no han sufrido golpes contundentes que conduzcan a su desarticulación efectiva.

Quienes sí han sufrido golpes contundentes es la población civil. El escenario de disputa generado por el posicionamiento estratégico del Ejército y la guerra entre los múltiples bandos enfrentados, provocó que los señalamientos fueran una constante entre los habitantes de Barbacoas. Se volvió recurrente en la propia prensa, la mención a adjudicar los avances de la Fuerza Pública en la información brindada por las redes de cooperantes. La promesa de uno de los anhelos más sentidos por la comunidad barbacoaana como es la pavimentación de la carretera, pudo haber funcionado como un aliciente para lograr una colaboración más efectiva hacia la Fuerza Pública. Por lo tanto, el asesinato indiscriminado, individual y colectivamente, se volvieron unas de las prácticas más recurrentes de los grupos armados que justificaban su accionar en el juzgamiento a sus víctimas de colaborar con otros actores armados.

Dinámicas de la protesta social y del movimiento social (Zona objeto de estudio). Línea de tiempo de hitos asociados con la violencia colectiva en el territorio.

Hitos principales y sus efectos sobre la dinámica de violencia colectiva.

La protesta social en Barbacoas ha sido escasa durante el periodo analizado entre el año 2005 y 2013. Sólo dos hechos de protesta social se identificaron, sin embargo, la protesta social presenta rasgos particulares que le confieren un sentido de acomodo a la difícil situación de conflicto que subsume al municipio.

Una de las acciones en este sentido, fue un bloqueo corto, durante una hora, a la carretera al mar que realizaron los docentes y miembros de la comunidad de la Institución Educativa del corregimiento de Altaquer, a raíz de la amenaza de muerte proferida contra tres profesores y el rector del plantel por un actor armado sin identificar.

Se trató de una acción corta, esporádica y circunstancial, que se da en el contexto del reposicionamiento de las Farc y el Eln en la zona a comienzos del año 2012, para exigir que se solucione la situación de los docentes amenazados quienes se desplazaron forzosamente a la ciudad de Pasto.

La otra acción de protesta social se da por el denominado movimiento de las “Piernas Cruzadas”, que nació como una iniciativa de las mujeres de Barbacoas para abstenerse de tener relaciones sexuales, llamando la atención de las autoridades para gestionar la anhelada obra de infraestructura consistente en la pavimentación de la vía Junín-Barbacoas.

Esta manifestación social es significativa porque demuestra el constreñimiento a la posibilidad de manifestarse abiertamente en reclamo a determinadas demandas de la sociedad. Surge en Barbacoas un movimiento con altas dosis de creatividad para articularse en torno a uno de los problemas más apremiantes como es la pavimentación de la carretera que conduce al casco urbano y asegurarse, por medio de la curiosidad que genera, la atención del resto de la sociedad.

El movimiento desarrolló acciones de protesta social en la forma de concentración en plaza pública en la ciudad de Pasto y en Bogotá. Logro que desde el Ministerio de Transporte se diera prioridad a la obra y el Ministro del momento viajó a Barbacoas para anunciar los comienzos de la obra, adjudicada al Batallón de Ingenieros Militares #23.

Por último se encuentran las comunidades indígenas organizadas en la Unidad del Pueblo Awá-UNIPA, quienes han desarrollado acciones de resistencia a los grupos armados ilegales. Esto ha generado que sean continuamente víctimas de la acción criminal de grupos como las Farc, quienes han asesinado continuamente a los miembros de la comunidad indígena a quienes señalan de colaborar con la Fuerza Pública. Uno de los hechos más connotados ocurrió en febrero del año 2009 cuando un grupo de guerrilleros asesinó a diecisiete indígenas del resguardo Tortugaña-Telembí, entre ellos varios niños, lo cual generó una movilización sin precedentes de la organización indígena para recuperar los cuerpos de los asesinados y llamar la atención del Estado, las ONG y los organismos de cooperación internacional para condenar y exigir medidas efectivas de protección. A raíz de ello, hubo un fortalecimiento de la guardia indígena, se produjeron los autos de la Corte Constitucional y se crearon los Planes de Salvaguarda para el pueblo Awá.

Otro de los aspectos de los esfuerzos que recientemente se vienen desarrollando es la defensa del territorio de las explotaciones de minería en los territorios de resguardo. Ante esto se han desarrollado acciones de expulsión de empresas mineras ilegales en algunas zonas de Tumaco y se ha identificado en Barbacoas situaciones de explotación de oro en los resguardos Yaundé Guiguay y Alto Ulbi Nunalbi, las cuales aparentemente están a cargo del ex alcalde municipal.

Actores protagónicos asociados.

Por otro lado, se encuentra el proceso organizativo de la población indígena Awá, expresada en la organización Unidad del Pueblo Awá – UNIPA, proceso de comunidades que trabaja desde el año 1985, inicialmente con el nombre Proyecto Awá y posteriormente en 1995 tomando su nombre actual. Un trabajo que inició con el influjo de la Federación de Centros Awá del Ecuador-FECADE, el Consejo Regional Indígena del

Cauca-CRIC y la Diócesis de Tumaco. Una de las principales motivaciones para organizarse estuvo dada por la invasión de tierras de las empresas palmicultoras como Astorga.

UNIPA integra a cerca de 26.000 indígenas de la etnia Awá, pertenecientes a 26 resguardos indígenas de los municipios de Barbacoas (12 resguardos), Tumaco (14 resguardos), Roberto Payán (1 resguardo) y Samaniego (1 resguardo). En total, el territorio cobijado bajo la organización es de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados.

La estructura organizacional de UNIPA está conformada por 14 consejerías que corresponden a los puestos directivos y los encargados de los programas en los que trabaja la organización. Estos son los consejeros directivos: Consejero Mayor, Consejero Secretario General, Consejero de Planeación, Consejero Fiscal y Consejero Administrativo. Por su parte, los consejeros de los programas son: Consejería de Salud, Consejería de Educación, Consejería de Niñez y Juventud, Consejería de Mujer y Familia, Consejería de Economía y Producción, Consejería de Organización y Territorio, Consejería de Comunicaciones, Consejería de la Guardia Indígena y Consejería Binacional.

Entre los logros para mencionar de la organización se encuentran la legalización del territorio, la elaboración de un Plan de Vida, la emisora indígena “La Voz de los Awá”, un centro de capacitación, la Institución Educativa Bilingüe IETABA, la Institución Prestadora de Salud Indígena IPSI, proyectos productivos, entre otros.

La relación con la administración local de Barbacoas para los miembros de la organización ha sido de abandono y apoyo mínimo. Sólo recientemente la actual administración ha tenido gestos de inversión a las comunidades indígenas mediante la entrega de un bus para el transporte de los estudiantes de la IETABA.

De manera general, la UNIPA es una organización seria y fortalecida con alta presencia en el territorio y con estructuras organizacionales sólidas que permiten el liderazgo de sus miembros frente a la comunidad y la participación diversa en las instancias de decisión. Muchos retos tienen la organización por superar y metas por cumplir, que dependen en gran medida de que las barreras del conflicto lo permitan. Sin embargo, su fortaleza está dada, también, por haber surgido y posicionado en un contexto altamente desfavorable donde la protesta social y la organización social alternativa es perseguida insistentemente

BIBLIOGRAFIA NARIÑO

ÁVILA MARTINEZ, Ariel (2009). Conflicto armado en Nariño: reconfiguración del poder regional de los actores armados. Corporación Nuevo Arco Iris. Mimeo.

AVILA MARTINEZ, Ariel (2013). “La guerra sin fin del pacifico nariñense”. Recuperado de: <http://www.arcoiris.com.co/2013/03/la-guerra-sin-fin-del-pacifico-narinense/> el 26 de septiembre de 2013.

CONPES 3491 (2007). *Política de Estado para el Pacífico Colombiano*.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE). Censo general 2005. Cuentas nacionales. Consultado el 10 de septiembre de 2012.

KALYVAS, Sthatis (2001). “La violencia en medio de la guerra civil: esbozo de una teoría”, en *Análisis Político*, N° 42. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos - IEPRI – Universidad Nacional de Colombia, págs. 3 - 25.

MAMIÁM, Doumier (2000). Geografía Humana de Colombia: Región Andina Central. Tomo IV, Volumen I. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Tomado de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum4/pastos1.htm> el día 08 de enero de 2014.

MISION DE OBSERVACION ELECTORAL - CORPORACION NUEVO ARCO IRIS. *Monografía político electoral: Departamento de Nariño 1997-2007*. Bogotá-Colombia, Sin fecha, recuperado de: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/narino.pdf el 9 de septiembre de 2013.

OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. *Dinámica reciente de la violencia en la Costa Pacífica nariñense y caucana y su incidencia sobre las comunidades afrocolombianas*. Bogotá-Colombia, Enero de 2009.

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) (2013). *Censo de cultivos de coca 2012*.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO-PNUD (2011). *Nariño: análisis de conflictividad*. ASDI-PNUD.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO-PNUD (2011). Nariño: informe sobre el estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estado de avances 2011. PNUD, Colombia.

VILORIA DE LA HOZ, Joaquín (2007). *Economía del Departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico*. Banco de la República, Documentos de trabajo sobre economía regional #87, Bogotá. Colombia.

Documentos de prensa

El Tiempo.com. “*Asesinan a directora de Pastoral Social de Tumaco*”. 20 de septiembre de 2001. Recuperado el 6 de septiembre de 2013.

El Tiempo.com. “*Despliegue de 4.000 soldados en Tumaco*”. 24 de mayo de 2001. Recuperado el 6 de septiembre de 2013.

Bases de datos

CENTRO DE RECURSOS PARA EL ANALISIS DE CONFLICTOS (CERAC). Base de datos de acciones del conflicto armado. Consultado en septiembre 2013.

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV). Red Nacional de Información. Consultado en septiembre 2013.

BIBLIOGRAFIA TUMACO

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS – ACNUR (2013). *Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas: una aproximación desde los casos de Buenaventura, Tumaco y Soacha*. Bogotá.

AVILA MARTINEZ, Ariel. *Reconfiguración del poder regional de los actores armados*. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá: 2009.

GARCIA REYES, Paola (2011). *La paz perdida: territorios colectivos, palma africana y conflicto armado en el Pacífico Colombiano*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, México. Tesis para optar por el título de doctora en ciencias sociales.

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO – INDEPAZ (2011). *En Tumaco: La marcha de la desesperación*. Tomado de: <http://ccai-colombia.org/2011/09/17/tumaco-la-marcha-de-la-desesperacion/> Recuperado el 26 de octubre de 2013.

MOLINARES, Cesar & REYES, Elizabeth (2013). *Pobreza, debilidad institucional, cultivos ilícitos, tráfico de drogas y grupos armados ilegales en Buenaventura y Tumaco*. Friedrich

Ebert Stiftung en Colombia – FESCOL, International Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA, Bogotá – Estocolmo.

OCAMPO VALENCIA, Sebastián (2009). *Agroindustria y conflicto armado: el caso de la palma de aceite*, en: COLOMBIA INTERNACIONAL, Bogotá, Universidad de Los Andes.

OVIEDO AREVALO, Ricardo (2009). *Relatos, revueltas y desventuras de la gente entintada del Pacífico Sur*. Tumaco, Universidad de Nariño.

Fuentes Documentales

DIARIO DEL SUR 2010-2013 (versión impresa).

EL TIEMPO (versión digital).

DIOCESIS DE TUMACO (2012). *Que nadie diga que no pasa nada: una mirada desde la Región del Pacífico Nariñense*. Balance #2-3. Tumaco, Nariño.

Fuentes estadísticas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE. Censo 2005 y Proyecciones municipales de población 2005-2020.

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV. Reportes.

BIBLIOGRAFIA RICAURTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE. *Plan de Desarrollo Municipal de Ricaurte “Con tu mano y mi mano, vivir dignamente es posible” 2012-2015*. Alcaldía Municipal de Ricaurte: 2012.

AVILA MARTINEZ, Ariel. *Reconfiguración del poder regional de los actores armados*. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá: 2009.

CABILDO MAYOR AWA DE RICAURTE. *Plan de Vida: palabra oral y escrita de nuestra cultura*. CAMAWARI, Ricaurte, Nariño: 2002.

MONTENEGRO LANCHEROS, Hernán Camilo. *Rita Escobar Telag: Tejiendo sueños, chapeando territorios, arando realidades. Historia de vida de una mujer campesina e indígena y líder del movimiento social del Departamento de Nariño, sur de Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá: 2013.

OBSERVATORIO DE PROCESOS DE DESARME, DESMOVILIZACION Y REINTEGRACION-ODDR. *Caracterización del Departamento de Nariño*. Universidad Nacional de Colombia-UNICEF, Bogotá (Colombia): 2011.

USAID. CENTRO DE COORDINACION DE ACCION INTEGRAL. *Las zonas de Nariño afectadas por la Violencia: diagnóstico*: 2010. (Documento no oficial sujeto a revisión).

Fuentes Documentales

Base de datos de la Defensoría Regional de Pueblo.

Diario del Sur 2010-2013 (versión impresa).

El Tiempo (versión digital).

Fuentes estadísticas

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Censo 2005 y Proyecciones municipales de población 2005-2020.

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV.

BIBLIOGRAFIA IPIALES

AVILA MARTINEZ, Ariel. *Reconfiguración del poder regional de los actores armados*. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá: 2009.

Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Municipio de Ipiales: Sin fecha.

COMITÉ MUNICIPAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL. *Plan de Acción Territorial PAT*, Ipiales: Sin fecha.

RUANO JIMENEZ, Alba Jakeline. *Desplazamiento forzado: modos de vida y relaciones sociales en la ciudad de Ipiales*, Universidad Nacional de Colombia: 2012.

Fuentes Documentales

Bitacora de Hechos de Conflicto Armado de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV 2009-2013.

Diario del Sur 2010-2013 (versión impresa).

El Tiempo (versión digital).

Fuentes estadísticas

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Censo 2005 y Proyecciones municipales de población 2005-2020.

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV.

Fuentes orales

Entrevista al Personero Municipal de Ipiales. Dr. John Caicedo. Noviembre 21 de 2013.

BIBLIOGRAFIA BARBACOAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBACOAS (2006). *Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2006 – 2015 (Documento resumen)*. Barbacoas.

RESTREPO, Eduardo (2005). *De ‘refugio de paz’ a la pesadilla de la guerra: Implicaciones del conflicto armado en el proceso organizativo de ‘comunidades negras’ del Pacífico nariñense*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, Bogotá.

OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. *Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Awá*.

Fuentes Documentales

DIARIO DEL SUR 2010-2012 (versión impresa).

EL TIEMPO (versión digital).

DIOCESIS DE TUMACO (2012). *Que nadie diga que no pasa nada: una mirada desde la Región del Pacífico Nariñense*. Tumaco, Nariño.

Fuentes estadísticas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE. Censo 2005 y Proyecciones municipales de población 2005-2020.

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV. Reportes.